



UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
SECCIONAL CÚCUTA
BIBLIOTECA MANUEL JOSÉ VARGAS DURÁN

RESUMEN – TESIS DE GRADO

AUTOR(es) Nombres y Apellidos Completos

Miguel Dario Botello
Manuel Eduardo Jaimes Olivares
Gustavo Adolfo Tinjaca Escalante

FACULTAD

Derecho

DIRECTOR

Dr. Hernán Isaías Ibarra G.

TITULO DE LA TESIS

EFFECTOS DE LA COSA JUZGADA PENAL ABSOLUTORIA EN UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

RESUMEN

En la Ley 906 del 2004 – Código de Procedimiento Penal – mas conocida como el Sistema Penal Acusatorio, el legislador dejo por fuera del articulado, la institución jurídica de la cosa juzgada penal absolutoria cuyos efectos eran erga omnes y que estuvieron presente en nuestra normatividad desde 1938 hasta la Ley 600 del 2000. Hablamos específicamente del artículo 57 de la Ley 600, en la cual se extinguía la responsabilidad civil por las causales de que el sindicado no cometió el hecho punible o que el delito no se cometió, o que se obro en estricto cumplimiento de un deber legal o que se obro en legítima defensa. El trabajo hace una análisis de lo dicho por la Corte Constitucional en el 2003, los efectos y la falta de dicha institución en la practica diaria por parte del juzgador penal y civil

CARACTERISTICAS

PAGINAS:__111__ **PLANOS:**__0__ **ILUSTRACIONES:**__0__ **CD-ROM:**__1__

**EFFECTOS DE LA COSA JUZGADA PENAL ABSOLUTORIA EN UN PROCESO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL.**

**MIGUEL DARIO BOTELLO
MANUEL EDUARDO JAIMES OLIVARES
GUSTAVO ADOLFO TINJACA ESCALANTE**

**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCUTA
FACULTAD DE DERECHO
CUCUTA
2008**

**EFFECTOS DE LA COSA JUZGADA PENAL ABSOLUTORIA EN UN PROCESO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL.**

**MIGUEL DARIO BOTELLO
MANUEL EDUARDO JAIMES OLIVARES
GUSTAVO ADOLFO TINJACA ESCALANTE**

Trabajo de grado para optar por el título de Abogado

**Director de tesis
Dr. Hernan Isaias Ibarra G.**

**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCUTA
FACULTAD DE DERECHO
CUCUTA
2008**

DEDICATORIA

Dedico este trabajo mi esposa e hijos, familiares y amigos con cuyo apoyo, comprensión y cariño, me han permitido culminar mis estudios superiores.

MIGUEL DARIO BOTELLO

Dedico este trabajo de grado a mi padre, madre, mis hermanos y familiares por su constante apoyo y esfuerzo, quienes con amor y sabiduría me brindaron sus mejores consejos para poder de esta manera culminar una etapa de mi vida y comenzar otra.

MANUEL EDUARDO JAIMES OLIVARES

Dedico este trabajo de grado a mi padre Gustavo Tinjaca Peña y madre María Filomena Escalante de Tinjaca, quines con su esfuerzo, dedicación, apoyo y amor, me brindaron las herramientas para conseguir esta meta académica y profesional. A mi hija Andrea Carolina, inspiración de todo aquello que realizo en mi vida personal y profesional.

GUSTAVO ADOLFO TINJACA ESCALANTE

AGRADECIMIENTOS

Hoy que he alcanzado este triunfo en mi vida, quiero agradecer a Dios por darme esta oportunidad, a mi esposa e hijos por apoyarme en este tramo de mi vida y por ultimo a la institución educativa que me brindo las posibilidades de ver alcanzado mi sueño académico y profesional.

MIGUEL DARIO BOTELLO

Ellien Jaimes Yañez por su apoyo y compañía, que me dieron las fuerzas para no desfallecer en mis aspiraciones. A mi familia, que con su constante empuje y apoyo me inspiraron. Y a todos aquellos que de una forma directa e indirecta me ayudaron a culminar mis estudios.

MANUEL EDUARDO JAIMES OLIVARES

Faltan palabras en el diccionario y mi léxico para expresar la gratitud que debo a mi familia e hija por el apoyo incondicional que he recibido para terminar otra etapa en mi vida.

GUSTAVO ADOLFO TINJACA ESCALANTE

[illegible]

CONTENIDO.

1. GENERALIDADES	9
1.1 El Problema	9
1.1.1. Planteamiento del problema	9
1.1.2. Formulación Del Problema	10
1.1.3. Sistematización Del Problema	10
1.2. Justificación.....	10
1.3. Objetivos.....	12
1.3.1. Objetivo General	12
1.3.2. Objetivos Específicos	12
2. MARCO DE REFERENCIA	13
2.1. Antecedentes.....	13
2.2. Bases Teóricas	13
2.3. Bases Conceptuales.....	15
2.4. Bases Legales.....	16
3. DISEÑO METODOLOGICO	18
3.1 Tipo De Investigación.....	18
3.2 . Fuentes De Información	18
3.2.1 Información Secundaria	18
4. CONTEXTO JUDIRICO	20
DE CULPA EN UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	22
5.1. Diferencias De Los Regímenes Probatorios Del Proceso Penal Y Del Proceso De Responsabilidad Civil Por El Ejercicio De Actividades Peligrosas.....	23
5.1.1. Responsabilidad Civil Por El Ejercicio De Actividades Peligrosas: Régimen De Responsabilidad Objetiva	23
5.1.2. Responsabilidad Penal: Régimen De Culpa Probada.....	24
5.2. Constitución En Parte Civil Dentro Del Proceso Penal.....	24
5.3. ¿Hace Transito A Cosa Juzgada Erga Omnes La Sentencia Penal Absolutoria Por Ausencia De Culpa?	25
5.4. Jurisprudencia De La Corte Suprema De Justicia Y Comentarios	27
6. EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA POR	

INIMPUTABILIDAD DEL SINDICADO EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS	31
7. EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA POR AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD EN UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIVIDADES PELIGROSAS	33
7.1. La Legítima Defensa	37
7.2. El Estricto Cumplimiento De Un Deber Legal	39
7.3. Estado De Necesidad	40
7.4. En Legítimo Ejercicio De Un Derecho, De Una Actividad Lícita O De Un Cargo Público	43
7.5. En Cumplimiento De Orden Legítima De Autoridad Emitida Con Las Formalidades Legales.	44
8. EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA CUANDO LA CONDUCTA CAUSANTE DEL PERJUICIO NO SE REALIZÓ O EL SINDICADO NO LA COMETIÓ EN UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIVIDADES PELIGROSAS	45
9. EL CONCEPTO DE COSA JUZGADA	47
9.1. Límite Objetivo De La Cosa Juzgada	49
9.2. Límite Subjetivo De La Cosa Juzgada	50
9.3. La Cosa Juzgada Y El Derecho De Defensa	52
10. AUSENCIA DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 600 DE 2000	56
BIBLIOGRAFÍA	59
Sentencia C-899/03	62

1. GENERALIDADES

1.1 El Problema

1.1.1. Planteamiento del problema

Responsabilidad en su sentido más amplio es la obligación de satisfacer cualquier daño o perjuicio, es el estar sujeto a responder a alguna cosa o por alguna persona.

Ahora bien, es necesario distinguir la simple responsabilidad moral de la responsabilidad jurídica. La definición que hemos dado responde mejor a la responsabilidad jurídica que a la moral. Esta última consiste en la transgresión de una obligación de carácter moral, como violación de un principio de conciencia, y se identifica dentro de la creencia religiosa con la idea de pecado; diferenciándose de la responsabilidad jurídica en que el dominio de ésta se restringe a aquellos casos en que existe un perjuicio.

Según Ripert, la distinción no está tan precisada, y la responsabilidad civil no es sino la organización técnica de la responsabilidad moral. La responsabilidad civil no sería, según él, sino la expresión y sanción de un deber moral; no debiendo perderse de vista el que la noción misma de reparación es una de las más viejas ideas morales de la humanidad.

Hemos visto la necesidad de un perjuicio como fundamento de la responsabilidad jurídica. Este perjuicio puede consistir, tanto en una ofensa a la sociedad, como en un daño de carácter privado; y de esta diferencia tenemos las dos grandes divisiones de la responsabilidad: Civil y Penal.

Si analizamos esta división, podemos concluir que, en último término, lo que caracteriza a la responsabilidad penal es una violación directa de una Ley Prohibitiva, podríamos decir que es una falta directa contra el orden legal, para contraponer a ella la obligación de toda persona de no causar perjuicio a otra, por actos casual o intencionalmente perjudiciales. Faltas, estas últimas, que sin contravenir directamente un precepto legal, al ocasionar un daño, crean la obligación de indemnizarlo

Se ha dicho que la responsabilidad derivada del ejercicio de actividades peligrosas "se encuentra por completo desligada de toda consideración sobre culpa o diligencia o prudencia de quien ocasiona el daño con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde esta a utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quienes crean situación de peligro. En ejercicio de la ley 906, "Sistema Penal Acusatorio", el proceso civil que se llevaba adjunto al proceso penal y que se denominaba Acción Civil, en el sistema penal que comienza a regir en nuestra región a partir del 1 de enero del 2008, se lleva como un incidente, además de lo anterior, la desaparición del

artículo 57 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 600, en el cual se establecían las cuatro causales de absolución penal que hacían transito a cosa juzgada.

Cuando una sentencia se establece por una de las causales del mencionado artículo hace transito a cosa juzgada penal erga homes, por lo tanto impide la ejecución de una acción civil. Que pasara ahora que el procedimiento no menciona nada de dichas causales, en las cuales los doctrinantes nacionales debatían sobre la taxatividad de ellos. Y que los jueces civiles asumían como cosa juzgada erga homines

1.1.2. Formulación Del Problema

Cual deberá ser la posición que asumirá nuestros juzgados y cortes respecto de las causales que hacen transito a cosa juzgada erga homines en los asuntos penales que versen sobre responsabilidad civil por actividades peligrosas?

1.1.3. Sistematización Del Problema

La formulación del problema plantea las siguientes preguntas:

¿Cuál es el concepto de responsabilidad jurídica y de responsabilidad civil?

¿Ante el vacío legislativo de la norma todo negocio jurídico que verse sobre los asuntos de responsabilidad civil en actividades peligrosas se tomara la jurisprudencia o se fallara teniendo la culpa como un presupuesto jurídico sin importar las causales de exoneración?

¿Cuál debe ser la posición que toman los estrados judiciales ante la inexistencia de lo consagrado en el artículo 57 de la Ley 600 en la actual Ley 906?

1.2. Justificación

Actualmente en gran parte del territorio colombiano se regulan los delitos mediante la Ley 906 o también llamado Sistema Penal Acusatorio, para el territorio de Norte de Santander esta ley entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2008, al estudiar su articulado llama la atención y motiva una seria investigación sobre la ausencia del artículo 57 de la ley anterior, Ley 600, el cual reza lo siguiente:” ARTICULO 57. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.”.

En ningún artículo de la Ley 906 se hace mención a ello, entonces los jueces se basaran

en jurisprudencia para dejar claro su posición al momento de rendir sentencia y de esta manera un juez civil acatar los efectos erga homines que genera una sentencia penal absolutoria? Pero que ocurre cuando el señor juez solo se basa en el precepto constitucional de serle fiel a la norma exclusivamente y estar regido por el imperio de la misma? Ninguna sentencia será absolutoria y por ende sin importar el resultado de un proceso penal, el inculpaado tendrá una responsabilidad civil que asumir o todo lo contrario nunca asumir una responsabilidad civil, ya que la ley no hace mención a ello.

El proceso civil o mejor llamado acción civil dentro de un proceso penal se extingue como tal, ya que este se desarrolla como un incidente dentro del mismo, el actor de la parte civil ya no entra a aportar pruebas dentro del proceso y demostrar la responsabilidad civil de la contraparte sino hasta el momento de finalizado el proceso en el cual se resolverá si existe responsabilidad civil.

No hace falta estipular una estadística jurídica de la cantidad de procesos por lesiones personales, daño en bien ajeno, o cualquier otra conducta punible que genere una reparación directa a los afectados, para captar en su dimensión la magnitud del problema que se tendrá.

A la fecha no se tiene ningún pronunciamiento judicial de la altas cortes ante esta situación, ello se puede deber a que un proceso de este orden tiene una duración de 5 años y muchas veces termina con un proceso conciliatorio bastante deprimente para el actor civil, realidad que es supremamente conocida por los jueces de la causa y abogados litigantes en el ramo.

Esta serie de vacíos nos motivan a estudiar, expresar y proponer una hipótesis del futuro comportamiento de los juzgados penales y civiles a la hora de determinar la absolución o no mediante una sentencia por hechos de responsabilidad civil en ejecución de actividades peligrosas.

En la región de Norte de Santander, específicamente en el área metropolitana, zona de influencia inmediata del centro educativo que es la universidad Libre Seccional Cúcuta, el conjunto de actividades peligrosas que se realizan son bastantes altas, debido a ello muchas veces por imprevisión, imprudencia u otra circunstancia, causan daños a terceros. El presente trabajo será un aporte a la comunidad de abogados litigantes y al grupo jurisdiccional ante los cuales se desarrollen asuntos de responsabilidad civil por la ejecución de actividades peligrosas.

Ante la comunidad de discentes del pregrado de derecho de la universidad Libres Seccional Cúcuta, muestra el presente trabajo, que el estudio de las normas, así sea de un solo artículo, es bastante extenso y formativo, debido a la interrelación sistemática que presentan las normas de un área jurídica y otra. En el caso del presente trabajo es la ausencia de una norma que doctrinalmente se estableció como taxativa, actualmente en el orden jurídico ha desaparecido y por lo tanto debe subsanarse por las herramientas auxiliares que se presentan según la constitución nacional.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Determinar la posición que se deberá asumir al menos doctrinalmente en base a la jurisprudencia vigente y expresada por nuestra suprema corte de justicia en lo referente a su sala penal y civil en los procesos de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas.

1.3.2. Objetivos Específicos

Determinar el concepto de responsabilidad jurídica y de responsabilidad civil.

Establecer las diferencias y similitudes entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal.

Clasificar, analiza y critica las instituciones de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas.

Establecer los argumenta medios de defensa para exonerar de responsabilidad como serian:

- La identificación de las causales de justificación en la responsabilidad civil y las relaciona con las diferentes instituciones de responsabilidad civil extracontractual.
- Determinar la causa extraña y la relaciona con las diferentes instituciones de responsabilidad civil extracontractual.
- Conocer todos los medios procesales existentes en el ordenamiento colombiano para exonerar de responsabilidad.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Antecedentes

La doctrina contemporánea, considera que existen dos grandes fuentes de las obligaciones, dentro de las cuales se enmarcan las fuentes admitidas por la doctrina tradicional. Estas dos fuentes son el negocio jurídico y los hechos jurídicos. Estos dos campos son, respectivamente las fuentes de la responsabilidad civil contractual y extracontractual.

El mundo jurídico ve a diario como actividades humanas se encuadran en alguno de estos campos. Minuto a minuto los hombres venden, compran, alquilan, etc, para satisfacer sus necesidades, es decir transforman la realidad como consecuencia de su voluntad. Además no se ven exentos de incurrir en hechos humanos que en contra de su voluntad, mutan la realidad.

Los negocios jurídicos (manifestación de la voluntad encaminada a producir efectos jurídicos) y sus consecuencias jurídicas, por consiguiente la responsabilidad contractual, se estudian ampliamente en el curso de contratos civiles y comerciales. De igual forma se hace necesario que los hechos jurídicos y sus consecuencias civiles, se estudien a través de una asignatura independiente que abarque todas las nociones generales y específicas de la responsabilidad civil extracontractual.

2.2. Bases Teóricas

La responsabilidad civil se origina mucho antes que el derecho romano. La conciencia de la obligación de reparar el daño causado en la persona o bienes de otro es tan antigua como el hombre mismo. En la etapa primitiva encontramos el Código de Hammurabi, que tiene entre sus capítulos, uno referente a los delitos y su composición, y los hebreos que tenían leyes sobre daños a personas y a la propiedad.

En Roma no tenía un desarrollo teórico de responsabilidad civil por ser una sociedad agraria y no ser un derecho intencionalmente de principios, deductivo, basta dar un vistazo al Digesto para comprobar que es un derecho casuístico, muy concreto. Su derecho escrito tenía como fuentes la ley, los plebiscitos, las constituciones imperiales y los edictos de los magistrados. El derecho romano se basa en “Vivir honestamente, no dañar al otro, dar a cada uno lo suyo”.

Mas adelante el derecho romano hizo su mayor aporte con la lex aquila ya que introdujo 3 delitos privados (furtum, injuria y damnum) que trajeron consigo un hito fundamental en la responsabilidad civil o aquilina (que origina su nombre, precisamente de esta ley).

En la edad (siglo XIII) se distinguió claramente la responsabilidad penal de la responsabilidad, además se estableció un principio general de responsabilidad civil, ampliamente formulado por Lois de Domart: (Loix Civiles, lib, II, tit VIII, sec IV).

“Todas las perdidas y todos los daños que se puedan acaecer por el hecho de alguna persona, su imprudencia, ligereza, ignorancia de los que se debe saber, u otras culpas semejantes, por ligeras que puedan ser, deben ser reparadas por aquel cuya imprudencia u otra culpa haya dado lugar. Porque es un daño el que ha hecho incluso aunque no hubiera tenido intención de perjudicar.

La falta de no pagar una obligación es así mismo una culpa que puede dar ocasión de daños y perjuicios, por los que estará obligado”

Con este paso dado en la edad media de tomar la culpa como el fundamento de la responsabilidad y sentado claramente el principio general de responsabilidad civil: todo daño cursado con culpa debe ser indemnizado, se superaron las limitaciones de la lex Aquila del Derecho Romano clásico, que exigía una norma concreta para cada caso a fin de obtener la indemnización.

La edad moderna trajo consigo la redacción del código francés, que fue después la base del código civil chileno y más adelante de nuestro código civil.

Herederos de la tradición medieval los redactores del Código Napoleónico (1804) vierten el desarrollo de la responsabilidad civil alcanzado hasta entonces en los artículos 1382 a 1386 del Código Civil Francés .

La redacción de estas disposiciones legales fue tan general que dio base a una muy extensa jurisprudencia de la corte de casación francesa para colmar las lagunas dejadas por el legislador para enmarcar la nueva vida de la sociedad industrial que hacía aparición a finales del siglo XVIII.

Andrés Bello redactó, después de varios proyectos (1847 y 1857), el Código Civil para la república de Chile, Bello toma como fuente, para redactar lo correspondiente a responsabilidad civil, el Derecho Romano y las 28 leyes del título XV de la partida 7 de Alfonso X el sabio y el Código Francés. Bello se percató de la brevedad de los artículos del Código Francés (1382 al 1386) y prefirió extenderse acudiendo a la legislación Española y resolviendo cuestiones que no abordaban esas fuentes tales como la responsabilidad solidaria de los coautores del delito y del cuasidelito (Art. 2317 del Código Civil Chileno), la responsabilidad del ebrio (Art. 2318 C.C.Ch) la facultad judicial para reducir el monto de la reparación (Art. 2330 C.C.Ch.) y se apartó del principio general de responsabilidad por las cosas del código civil francés (Art. 1384 C.C.F) .

Más tarde esta normativa fue sancionada, casi en su totalidad, por el Estado de Cundinamarca el 8 de mayo de 1859; sucesivamente, los demás estados soberanos (Cauca

en 1859; Antioquia 1864) aprobaron como ley general este código derogando la antigua legislación. A raíz de la reconstrucción de la república de Colombia en 1886, se sancionó por la ley 57 de 1887, el texto de nuestro código civil.

Más tarde estas disposiciones quedaron consagradas en el título XXXIV del libro cuarto de Código Civil Colombiano, artículos 2341 a 2360, el cual se denomina “responsabilidad común por los delitos y las culpas”.

En el actual mundo jurídico, que cada vez tiende más a la globalización y armonización, es imprescindible que los estudiantes conozcan, analicen y relacionen otras realidades y ordenamientos jurídicos.

Por esta razón, el estudio de los ordenamientos jurídicos de Francia, Estados Unidos y Bélgica en cuanto a la responsabilidad civil, se hace necesario.

En Francia nació y evolucionó el concepto de culpa, tema central en la nueva concepción de la responsabilidad civil.

Estados Unidos cuenta con jurisprudencia importante, que entre otras cosas amplía el campo de indemnización de los daños.

Bélgica, al igual que Francia, cuenta con una avanzada y muy apropiada teoría del derecho de dominio sirve para solucionar problemas en la aplicación de la responsabilidad por las cosas y la responsabilidad por actividades peligrosas.

2.3. Bases Conceptuales

Actividad Peligrosa: Diariamente tenemos que el hombre desarrolla diversas actividades, las cuales van evolucionando y tecnificándose con cada avance científico y social. Dichas actividades podrían en determinado momento considerarse peligrosas para otros individuos, pero encontramos que ni la legislación ni la jurisprudencia actual se ha podido llegar a una definición clara de lo que se debe entender por actividad peligrosa lo cual dificulta su tratamiento. En ocasiones se ha establecido que una actividad peligrosa es aquella que aumenta la peligrosidad frente a los demás individuos.

Responsabilidad Civil: El vocablo responsabilidad empezó a ser utilizado en época muy posterior a la integración orgánica de la teoría de la responsabilidad civil. “De tal manera que, los hermanos Mazeaud dicen que Pothier pocas veces emplea el vocablo, y que Domat, uno de los primeros que estructuró la teoría de la responsabilidad civil, no lo usa ni una vez en su obra”. Parece que en Francia y como herencia en Inglaterra, comenzó a utilizarse en el siglo XVII. La palabra responsabilidad tiene un origen eminentemente latino. Tanto la voz española responsabilidad como la francesa responsabilité, provienen de la voz responsable, que a la vez tiene sus raíces en el latín responsus, participio pasado del verbo respondere, que equivale a constituirse en garante. El diccionario de la

Academia dice que responsabilidad es calidad de responsable y responsable es el que está obligado a responder de alguna cosa o por alguna persona.

Sentencia penal absolutoria: Es aquel auto que es emanado por un juez en la jurisdicción ordinaria en el área penal y cuyos efectos llegan al área civil de la jurisdicción ordinaria por tener la calidad de ergo homines, produciendo también una absolución de cualquier obligación que se halla originado por el hecho penal.

Teoría del Riesgo: Es una teoría con la cual se pretende establecer un criterio adecuado para los fines del derecho y de las necesidades sociales de nuestra época por medio del cual determinar cual o cuáles son los responsables de un daño ocasionado a una persona natural o jurídica que no tenía por qué soportar. Este criterio se estableció debido a la necesidad de lograr un criterio que no tuviese las mismas dificultades que tiene la noción de culpa que reinaba anteriormente en el campo de la responsabilidad civil. En efecto, la noción de culpa era insuficiente ya que en muchas ocasiones es casi imposible determinar quien fue el que ocasionó el hecho dañino, en especial teniendo en cuenta que en nuestra época, debido a la tecnificación, al crecimiento de las ciudades y la complejidad de nuestra sociedad, determinar quién tiene la culpa puede ser una tarea inmanejable.

Teoría de la culpa: Se basa en que para responder por las consecuencias de un daño, es preciso haber actuado con dolo o con culpa del individuo

Presunción: es la acción y efecto de presumir. En derecho se tiene como el hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea probado, el cual puede ser absoluto o relativo.

2.4. Bases Legales

Como bases legales para el desarrollo del trabajo tenemos en su orden kelsiano, la constitución del 91, en el cual se establecen que las relaciones entre particulares y estos con el estado. Específicamente el artículo 230 el cual reza: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”

La ley 600 establece para los daños materiales y morales unas excepciones en ocasión de algún hecho o acción antijurídico realizado en la vigencia de dicha ley una serie de conductas eximentes de carga civil y que los doctrinantes establecen como taxativa, esto se encuentra reflejado en el artículo 57 que reza:

Art. 57. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.

Concordante con el artículo 47 que reza:.

Art. 47. Oportunidad para la constitución de parte civil. La constitución de parte civil, como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento, a partir de la resolución de apertura de instrucción y hasta antes de que se profiera sentencia de única o de segunda instancia

La Ley 906 o mejor conocida como sistema penal acusatorio, derogo en su totalidad la Ley 600, y dicha ley en ninguno de su articulado menciona las conductas establecidas en la ley anterior en su artículo 57,

El Código Civil colombiano establece como fuente de obligación el delito y el cuasidelito en el libro cuarto del respectivo código “de obligaciones en general y de los contratos”, desarrollando el tema de responsabilidad en el título 34, en donde se encuentra el artículo 2341, el cual reza “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido” . Las conductas por acciones peligrosas están establecidas en el artículo 2356, el cual trae un listado de actividades que la doctrina y jurisprudencia lo han tratado como enunciativo ya que por avances industriales y tecnológicos o costumbres sociales se han agregado mas actividades de las ahí mencionadas

3. DISEÑO METODOLOGICO

3.1 Tipo De Investigación

Para la elaboración de la investigación se aplica una metodología de investigación teórica, dentro de la cual se incluyeron análisis de la doctrina nacional y extranjera, como de la normatividad que respecto a las obligaciones que nacen de la responsabilidad civil en daños antijurídicos causados por ejercer actividades peligrosas y los sistemas de exoneración de responsabilidad penal y civil que se aplican en el ordenamiento jurídico nacional.

Para tales efectos se realizó, en primera medida, un rastreo bibliográfico en materia de responsabilidad civil, con énfasis en la problemática que la misma entraña en relación con la posible exoneración. De este modo se irá agotando la investigación por capítulos, para así proceder a la caracterización de las condiciones de exoneración y finalmente concluir como deberá ser el comportamiento jurídico de los estrados judiciales en sus pronunciamientos finales y decisorios en negocios que versen sobre el tema tratado en el trabajo de grado

3.2 . Fuentes De Información

3.2.1 Información Secundaria

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 1971 – 2000, documento impreso por Temis, un resumen en el cual se logra observar la postura jurisprudencial de la alta corte con respecto a los negocios de reclamación en lo pertinente a la responsabilidad civil en nuestro territorio. A saber los siguientes:

Actividad Peligrosa:

- Accidente de tránsito A – 005 1995 S-022 1995 S-043 1996
- Guardián de la cosa S-009 1997 S-009 1997
- Responsabilidad aérea S-050 1997
- Responsabilidad del guardián S-088 1998
- Accidente de tránsito – perjuicio s-093 1998
- Accidente de tránsito; solidaridad; daño futuro S-075 1998
- Actividad peligrosa: Electricidad. Exoneración S-102 1999
- Actividad peligrosa: Eximente: Falla mecánica: concurrencia S-104 1999
- Actividad peligrosa – perjuicio; Legitimación S-066 1999
- Actividad peligrosa – elementos – Eximentes; casos configurantes; determinación S-081-99
- Actividad peligrosa. Accidente de transporte aéreo perjuicio – extensión S-066 1999

Presunción:

- Presunción de responsabilidad S-022 1995
- Presunción de culpa sentencia 028 de 2000

Causales de justificación

- Responsabilidad del transportador S-076 1998
- Responsabilidad del transportador – Exoneración X-087 1998
- Actividad peligrosa; eximente: concurrencia de culpas, causa extraña S-009 1998
- Compensación de culpas S-033 1998
- Eximentes – culpa excesiva de la víctima; compensación de culpas S-051 1998

La nueva estructura probatoria del derecho penal de Jose Joaquin Urbano Martinez, publicado por ediciones jurídicas Andrés Morales. El autor describe teórica e históricamente el cambio dado al sistema probatorio en el actual derecho penal así mismo denuncia el comportamiento de algunos jueces a seguir con el modelo anterior, “pruebas practicadas fuera del juicio oral”.

El miedo insuperable como ausencia de responsabilidad penal, Juan Carmell Cure Marquez, de editorial Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Este libro aborda el miedo insuperable en la mayoría de sus manifestaciones, su definición sus aspectos fisiológicos y psicológicos. El autor tiene como objetivo alimentar la doctrina nacional sobre causales de ausencia de responsabilidad penal consagrada en el código penal del 2000.

Además de los dos anteriores documentos, se toma como información secundaria las normas establecidas en el Código Civil, Ley 906 y 600

4. CONTEXTO JUDIRICO

En el siguiente trabajo pretendemos mostrar los efectos de la sentencia penal absolutoria en un proceso de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas. La importancia del tema radica en que "el hecho punible origina no solo consecuencias de orden penal, sino también civil, por lo cual - en principio- toda persona que realice una conducta típica, antijurídica y culpable, trátase de imputable o inimputable, debe restituir las cosas al estado en que se encontraban en el momento anterior a la comisión del ilícito, cuando ello fuere posible, y resarcir los daños o perjuicios ocasionados al perjudicado"¹. Por lo tanto, una persona puede ver comprometida tanto su responsabilidad penal como civil por un mismo hecho.

Aunque los dos tipos de responsabilidades tengan su fuente en un mismo hecho, las acciones en contra del potencial responsable se deben gobernar por procedimientos distintos. Cada tipo de responsabilidad se debe regir por reglas diferentes. Así, la responsabilidad penal se analiza conforme a las normas penales, tanto sustanciales como procesales, mientras que la responsabilidad civil se determina con fundamento en la ley civil.

Surge entonces una pregunta: si se absuelve penalmente al sindicado ¿debe proseguirse la acción civil, o esta igualmente se extingue?

En el código penal, artículo 99, se establecen causales de extinción de la acción penal, y algunas de ellas extinguen a su vez la acción civil. Como regla general se establece que las causales de extinción de la acción penal que no impliquen disposición del contenido económico de la obligación, no extinguen la acción civil. En los códigos penales anteriores a la ley 906 de 2004, el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establecía cuatro causales de absolución penal que hacían tránsito a cosa juzgada penal *erga omnes*. Estos casos impedían iniciar o proseguir la acción civil que se derivaba del hecho que estaba siendo investigado. Doctrinantes nacionales debatían acerca de la taxatividad del mencionado artículo, pues mientras unos lo consideraban taxativo, otros por el contrario afirmaban que era meramente enunciativo. Ahora, con la ley 906 de 2004, desaparece el artículo 57 del CPP y la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado al respecto. Por lo tanto, al final de este trabajo plantearemos la que para nosotros debería ser la posición que debería asumir la Corte respecto de las causales de absolución penal que hacen tránsito a cosa juzgada *erga omnes*.

Aunque "autores o tribunales opinen lo contrario, lo cierto es que algunos elementos del fallo penal tienen efectos de cosa juzgada erga omnes ante los jueces civiles. Así por ejemplo,

¹ VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho Penal. Parte general. Editorial TEMIS. Tercera edición. Santa Fe de Bogotá. 1997. Página 774.

si el juez penal afirma que el hecho existió y que el procesado lo realizó, el juez civil no puede desconocer estas dos afirmaciones, poco importa que el fallo penal sea condenatorio o absolutorio"². Esto es así porque tanto la responsabilidad penal como en la civil requieren que el agente haya causado el daño sin que haya un hecho que lo justifique.

Es posible que "el hecho por el cual se absolvió al sindicado genere una responsabilidad civil objetiva (actividades peligrosas), o una presunción de responsabilidad civil, o una responsabilidad fundada en una culpa que no es sancionada por el orden penal. El legislador penal le deja abierta la vía al juez civil para que de acuerdo con sus propios principios decida si hay o no cosa juzgada.

En consecuencia, habrá algunos casos no previstos expresamente por la ley penal en donde la absolución penal tiene efectos de cosa juzgada civil"³

De lo anterior se deduce uno de los aspectos más importantes, y que posiblemente genera la mayor dificultad para extender los efectos de la sentencia penal absolutoria al proceso de responsabilidad civil por actividades peligrosas, esto es, la diferencia entre los regímenes probatorios. Recordemos que en materia penal existe una presunción de inocencia del procesado, razón por la cual su culpa o dolo deben ser demostrados dentro del proceso; mientras que en un proceso de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas, dicha culpa no influye al momento de tomar la decisión por tratarse de un régimen de responsabilidad objetiva. Por lo tanto, si un juez penal decide absolver al sindicado por ausencia de culpa, nada impide que se inicie una acción civil de responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, pues dicha culpa no es un elemento estructural de este tipo de responsabilidad.

² TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Indemnización de Perjuicios en el Proceso Penal. Editorial LEGIS. Segunda edición. Bogotá 2003. p 174

³ Ibid,p.175

5. EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA POR AUSENCIA DE CULPA EN UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIVIDADES PELIGROSAS

No es posible explicar claramente los efectos de una sentencia penal absolutoria en un proceso civil sin antes hacer unas aclaraciones teóricas. Tanto el Código Civil como el Código Penal incorporan dentro del articulado el concepto de delito, pero en cada código con significados diferentes. La forma idónea para mostrar las diferencias es por medio de la comparación entre el ilícito civil y el ilícito penal.

Un hecho jurídico, es decir, una transformación de la realidad producida por el hombre y que genera efectos jurídicos que no son el producto de la voluntad dirigida a esa transformación, puede ser lícito o ilícito. Un hecho lícito es aquel que genera consecuencias jurídicas no reprochadas por el ordenamiento jurídico. Así que será ilícito aquel hecho que viola un deber general de prudencia, o una obligación, o aún cuando sin violar deberes generales u obligaciones, la ley establece una responsabilidad objetiva.

El hecho ilícito es un concepto genérico dentro del cual se pueden enmarcar tanto conductas realizadas de manera culposa como dolosa. En síntesis, la ilicitud no surge de que haya o no culpa, sino de la conformidad o no que tengan las consecuencias de la conducta desplegada con el ordenamiento jurídico.

Como se dijo anteriormente, cuando el Código Civil habla de delito, lo hace de una manera diferente al Código Penal. Para que una conducta sea calificada como delito por el Derecho Penal, esta debe ser típica, antijurídica y culpable. En sala de tipicidad es donde encontramos los elementos más relevantes para diferenciar el delito penal del delito civil, pues para que una conducta sea típica, debe ser dolosa, o siendo culposa, debe haber sido consagrada como conducta punible por el legislador. Es decir, siempre se hace una clara distinción entre las conductas punibles a título de dolo y a título de culpa.

Por otro lado, la fuente de las obligaciones en la responsabilidad civil es el hecho jurídico ilícito. Es importante tener en cuenta que la conducta desplegada por el agente nunca busca la consecuencia jurídica de la responsabilidad, esto es, la indemnización. El hecho ilícito en materia civil, también puede ser realizado a título de dolo o a título de culpa. Pero esto no es claro en nuestro Código Civil. En él se habla generalmente de delito, cuasidelito y culpa. Veamos qué quiso significar el legislador para comprender mejor la problemática.

Cuando en el Código Civil se habla de delito, como en el artículo 2341, se quiere significar

aquellos hechos ilícitos realizados dolosamente, es decir, con el conocimiento y con la intención de causarle un daño a un tercero. Por el contrario, cuando se habla de cuasidelito, se hace referencia es al hecho ilícito culposo, es decir, realizado con negligencia, imprudencia o impericia.

El concepto que podría generar mayores dificultades para interpretar el Código Civil es la culpa, pues en este concepto se incluye tanto al dolo como a la negligencia, la imprudencia y la impericia. Por lo tanto, la culpa de que habla el Código Civil es un concepto genérico o amplio, y cuando nosotros en este trabajo nos referimos a la culpa en materia civil, queremos comprender, al igual que el Código Civil, tanto el concepto de dolo como de culpa en sentido estricto, es decir, negligencia, imprudencia e impericia⁴.

5.1.Diferencias De Los Regímenes Probatorios Del Proceso Penal Y Del Proceso De Responsabilidad Civil Por El Ejercicio De Actividades Peligrosas

Es de la diferencia de los regímenes probatorios de donde se deriva la importancia del análisis de los efectos de una sentencia penal absolutoria por ausencia de culpa en un proceso de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas. Como se verá la culpa no es un elemento de la responsabilidad cuando se trata de actividades peligrosas, pero si es un elemento indispensable en la responsabilidad penal. Es por eso que surge la pregunta, ¿hace tránsito a cosa juzgada en lo civil, la sentencia penal absolutoria por ausencia de culpa?

5.1.1. Responsabilidad Civil Por El Ejercicio De Actividades Peligrosas: Régimen De Responsabilidad Objetiva

Se ha debatido si la responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas es un régimen de culpa probada, de presunción de culpa o de presunción de responsabilidad.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en la responsabilidad por el ejercicio de las actividades peligrosas rige un sistema probatorio de presunción de culpa. De esta manera, el demandante tiene la carga de probar el hecho y el daño; no tiene que probar la culpa ni el nexo de causalidad. Lo que sucede entonces es que esa carga probatoria se invierte y es el demandado quien debe desvirtuar esa presunción. Siendo consecuentes con la doctrina nacional y extranjera, dicha presunción se podría desvirtuar

⁴ En el mismo sentido. TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil. Tomo I. Editorial TEMIS

bien probando diligencia y cuidado, bien probando causa extraña. Pero lo que ha establecido la Corte es que se trata de una presunción de culpa que sólo se puede desvirtuar probando causa extraña, esto es, rompiendo el nexo de causalidad⁵. Es por esta razón que consideramos que la Corte asume una denominación equivocada del régimen probatorio en el proceso de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas.

Nosotros consideramos que en la responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas rige un sistema de responsabilidad objetiva. Este sistema se caracteriza fundamentalmente porque el componente psicológico de la conducta del demandado es irrelevante al momento de establecer la responsabilidad y porque se presume que el daño es consecuencia del ejercicio de la actividad peligrosa. Es por esto que el demandante lo que debe probar es el hecho y el daño, mas no el nexo de causalidad. Así que el demandado no se puede exonerar probando diligencia y cuidado, pero sí por medio de la prueba de una causa extraña con el fin de evitar que opere la presunción del nexo causal.

5.1.2. Responsabilidad Penal: Régimen De Culpa Probada

Como es bien sabido, en el proceso penal rige un sistema de culpa probada. La carga de la prueba de esa culpa está principalmente en cabeza de la Fiscalía, que de conformidad con la Constitución Política, es el órgano en el cual se encuentra radicada la acción penal⁶ y por lo tanto es el encargado de desarrollar las investigaciones en contra de los sindicados. El régimen de culpa probada se evidencia en el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, ley 906 de 2004, el cual establece que "toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda". Esta presunción de inocencia, además de determinar que existe una carga probatoria en cabeza del ente acusador, puede ser entendida como "un auténtico derecho"⁷ del sindicado.

5.2. Constitución En Parte Civil Dentro Del Proceso Penal

⁵ Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 5177 del 14 de marzo de 2000. M.P Manuel Ardua Velásquez. Corte Suprema de Justicia. Sentencia 196 del 4 de junio 1992, M.P Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

⁶ Constitución Política de Colombia. Artículos 250 y siguientes

⁷ LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando. Derecho Procesal Penal. Editorial TEMIS. Bogotá. 1982. Pag. 29

Con anterioridad a la ley 906 de 2004, se establecía en el ordenamiento jurídico colombiano la posibilidad de que una persona iniciara un proceso civil dentro de un proceso penal, con el objetivo de que si se declaraba penalmente responsable al sindicado, igualmente lo fuera pero desde el ámbito de la responsabilidad civil. Así que un juez penal podía decidir acerca de la imputación de responsabilidad civil al penalmente responsable.

Con la ley 906 de 2004, desaparece la posibilidad de constituirse en parte civil dentro del proceso penal, así que la forma de buscar o reclamar la indemnización de perjuicios es a través de un proceso ante la jurisdicción civil. Cabe mencionar que esta ley consagra el incidente reparación, que sirve a la víctima para reclamar la indemnización de perjuicios siempre y cuando haya existido una sentencia condenatoria en contra del sindicado. Pero de este caso no nos ocuparemos porque el objeto de este trabajo es determinar los efectos de una sentencia absolutoria en un proceso de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas.

5.3. ¿Hace Transito A Cosa Juzgada Erga Omnes La Sentencia Penal Absolutoria Por Ausencia De Culpa?

Es acá donde surge una dificultad para extender los efectos de una sentencia penal a un proceso civil por el ejercicio de actividades peligrosas. Queremos aclarar que el análisis que realizaremos en este punto se va a centrar en la legislación vigente, es decir, en la ley 906 de 2004 de la cual se habló anteriormente. Cabe recordar que esta ley no estableció la posibilidad de constituirse en parte civil dentro del proceso penal y tampoco consagró las causales de absolución penal que hacían tránsito a cosa juzgada erga omnes, establecidas anteriormente en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal de 2000.

Es en este punto concreto donde más nos interesa tener en cuenta la distinción anteriormente hecha sobre los regímenes probatorios en un proceso penal y en uno de responsabilidad civil por actividades peligrosas. Por lo tanto, "puede suceder que el hecho que ha sido investigado por el juez penal comprometa la responsabilidad civil del sindicado o de cualquier otro tercero, bajo instituciones de la responsabilidad civil que no exigen la culpa probada del agente. Es lo que ocurre en la responsabilidad extracontractual por actividades peligrosas"⁸

Un ejemplo claro de lo que se ha venido planteando es cuando una persona dispara un arma de fuego causándole lesiones a una persona, además de daños a sus bienes y la imposibilidad para desarrollar cualquier tipo de trabajo a futuro, y a la persona que disparó

⁸ TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Indemnización de Perjuicios en el Proceso Penal. Op. Cit.. p. 175

el arma de fuego no se le pudo imputar ningún delito porque no se logró probar su culpa o dolo dentro del proceso penal. Se pregunta: ¿Debe condenarse civilmente a esta persona a la indemnización de perjuicios a favor del lesionado, teniendo en cuenta que no es penalmente responsable?

Para desarrollar el problema, hay que tener en cuenta diferentes hipótesis, pues hay elementos de la sentencia penal que sí harán tránsito a cosa juzgada. Es necesario tener en cuenta también un principio del derecho procesal que es la economía. Es innecesario que un juez civil entre a analizar hechos que ya fueron revisados por el juez penal. No es pertinente que un el juez civil dirija la actividad probatoria con el fin de establecer si en un caso concreto si ocurrió un hecho o no cuando un juez penal ya dictaminó al respecto. Sucede lo mismo con el daño. Así las cosas, como se mencionó anteriormente en este trabajo, hay efectos del fallo penal que hacen tránsito a cosa juzgada civil como cuando el juez penal afirma que el hecho existió y que el procesado lo realizó, sin importar que el fallo penal sea condenatorio o absolutorio.

Por lo tanto, si existe una sentencia penal absolutoria por ausencia de culpa del sindicado, este fallo no hará transito a cosa juzgada en lo civil porque en la responsabilidad civil por actividades peligrosas no se tiene en cuenta la culpa de la persona que cometió el hecho. El fallo del juez civil para condenar a una persona por el ejercicio de actividades peligrosas debe tener en cuenta si se dio el hecho y el daño, es decir, si por el ejercicio de una actividad peligrosa se causó un daño. Y no es que la actividad peligrosa sea algo diferente del hecho, por el contrario, el hecho en esta institución de la responsabilidad está compuesto o constituido por el ejercicio de la actividad que es considerada como peligrosa⁹.

Se reitera, hay que tener en cuenta dos aspectos del fallo penal que si hacen tránsito a cosa juzgada civil así el fallo haya sido condenatorio o absolutorio. Si el juez penal encuentra probado que el hecho existió y que el sindicado fue quien lo realizó, el juez civil debe considerar que son inútiles las pruebas dirigidas a probar estos hechos. Por lo tanto, si estos hechos fueron probados en el proceso penal, el juez civil tendrá que valorar las pruebas existentes sobre el daño, y si ello se prueba ya entrará a cuantificar pecuniariamente el valor de los perjuicios. Por otro lado, si el juez penal determinó que el hecho no existió o que el sindicado no fue quien lo realizó, el juez civil debe desestimar las pretensiones porque no se dan los presupuestos de la responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas. No se harán más precisiones al respecto en este punto porque será objeto de análisis más adelante.

⁹ En el mismo sentido, MARTÍNEZ RAVE, Gilberto. MARTÍNEZ TAMA YO, Catalina. Responsabilidad Civil Extracontractual. Undécima Edición. Editorial Temis. Bogotá- Colombia. 2003

Es importante tener en cuenta las consideraciones del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, que se pueden ver en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, expediente 7346 del 12 de agosto de 2003, pues el tribunal afirma lo que hemos venido diciendo. Dice el tribunal que "si bien es cierto que la legislación penal prohíbe la acción indemnizatoria contra el sindicado o el civilmente responsable cuando la absolución obedece a alguna de las causas referenciadas (las del artículo 57 CP), ello no descarta otros casos de absolución penal que pueden estar provistos de la fuerza vinculante de la cosa juzgada en materia civil, si se dan las condiciones legalmente exigidas, como ocurriría *vr. g.* cuando aquella se cimenta en la ausencia de culpa... y luego se promueva acción civil por el mismo hecho y con fundamento en una culpa probada, porque al respecto ya se ha decidido en el campo penal en el sentido de que no existió la culpa. De ahí que en la hipótesis de absolución por la ausencia de culpa, sea posible promover la acción de responsabilidad civil con fundamento en actividades peligrosas, pero no con base en una culpa probada".

En síntesis, la actuación probatoria de la víctima en el proceso civil debe dirigirse a probar el hecho (si no ha habido una sentencia penal que se refiera al respecto) y el daño. Si en dicho proceso se prueban estos dos elementos, el juez civil debe condenar a la indemnización de perjuicios al responsable. Y si tenemos en cuenta que la culpa no es, en este caso, un elemento de la responsabilidad, no existe fundamento jurídico alguno para no condenar a quien desplegó la conducta peligrosa. La única causal de exoneración que puede alegar quien cometió el hecho es una causa extraña con el fin de romper el nexo de causalidad entre el hecho y el daño.

5.4. Jurisprudencia De La Corte Suprema De Justicia Y Comentarios

A continuación citaremos apartes de las diferentes sentencias de la Corte Suprema de Justicia con el fin de mostrar la interpretación que se le ha dado allí al problema que hemos venido planteando. También realizaremos comentarios a lo que dicen las sentencias, bien para criticarla, defenderla o complementarla. Hay que tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte que citaremos es anterior a la ley 906 de 2004, razón por la cual en todas ellas se hace mención al artículo 57 del Código de Procedimiento Penal de 2000. Pero es importante tener en cuenta esta jurisprudencia porque allí se debate acerca de la taxatividad de dicho artículo y se dan razones de fondo para determinar por qué una sentencia penal absolutoria debe hacer tránsito o no a cosa juzgada *erga omnes*.

La sentencia de 12 de agosto de 1999, que corresponde al expediente número 5253, cuyo magistrado ponente fue Manuel Ardua Velásquez, niega el carácter taxativo del artículo 57 en los siguientes términos:

"Bajo la premisa de que un mismo hecho puede generar diversas proyecciones en el ámbito jurídico en general, y particularmente en los campos penal y civil, el primero de los cuales sería llamado a establecer la infracción de la ley punitiva y el segundo a examinar el aspecto resarcitorio de la misma conducta, ello sólo avista la eventualidad, inconveniente como la que más, de que haya sentencias excluyentes, siendo que, por imperio de la lógica, la verdad no pudo ser sino una sola. Muy grave se antoja, por cierto, que en tanto la justicia penal proclame libre de culpa al sindicado, la civil, antes bien, lo condenase al abono de perjuicios.

Puesta en guardia ante tamaño despropósito, la legislación ha pretendido establecer algunos diques para impedirlo, entre los cuales destaca el secular principio de la cosa juzgada penal absolutoria, consagrado positivamente en el ordenamiento patrio; así, el artículo 55 del Decreto 050 de 1987, en vigencia para la época en que sucedieron los hechos aquí litigados, dispuso al respecto que "la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa". Quiérese garantizar así una dosis mínima de coherencia del sistema jurídico, y que, por lo mismo, el tráfico social no se resienta de manera palmaria.

...así como en el ordenamiento jurídico el interés individual cede al público o general, "la cosa juzgada lleva impreso el mismo principio, de donde resulta, como lo afirma Lalou, que el orden público se opone a que se rechace en interés privado lo que se ha juzgado en interés social" (LXX, Nos. 2048, 2049).

Así las cosas, es entendible que el primeramente llamado a respetar decisión semejante sea el propio Estado a través de todas sus autoridades, incluidas como es obvio las jurisdiccionales; por suerte que la jurisdicción, así sea de otra especialidad, debe corearla a una, y vedada se encuentra por tanto para tocar de nuevo el preciso punto que así ha sido definido, pues ya es cosa juzgada, con efectos universales.

Un análisis riguroso refleja que en verdad lo que consagra la norma transcrita no es propiamente la supremacía de una determinada jurisdicción sobre otra, sino que más bien propende es por la unidad de jurisdicción, entendiendo cabalmente que ésta es una sola, y que si admite clasificaciones es con el único objeto de dar cabida al cada vez más actuante postulado de la especialización".

Lo que plantea básicamente esta sentencia es que el ordenamiento jurídico debe ser coherente. Y que por lo tanto, lo coherente sería que si la para la jurisdicción penal una conducta no es sancionable, tampoco lo debería ser para la jurisdicción civil.

Creemos que la coherencia del ordenamiento no se viola cuando existiendo una sentencia penal absolutoria, se condena al sindicado absuelto a una indemnización de perjuicios en un proceso civil, y más en uno de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas.

Para entender esto de una mejor manera es necesario tener en cuenta el objeto de cada una de las instituciones. El objeto de un proceso penal es la protección de bienes jurídicos, es decir, la relación de valor que existe entre una persona y un concepto u objeto¹⁰. Mientras que el objeto de la responsabilidad civil es el mantenimiento del equilibrio patrimonial entre las partes. De aquí se puede inferir que así habiendo una sentencia penal absolutoria por ausencia de culpa, una persona se pueda ver avocada a pagar una indemnización de perjuicios a favor de una víctima. Tal es el caso de una persona que conduciendo un vehículo choca a un motociclista y es absuelto penalmente porque en sala de tipicidad no se logra probar que el sindicado obró dolosa o culposamente. Pero ya en el campo de la responsabilidad civil, que como se mencionó anteriormente no se analiza la culpa del demandado, este puede resultar condenado a pagar los perjuicios de la víctima. Queda así demostrada la ausencia de incoherencia; nos parecería incoherente en cambio que no se condenara civilmente al responsable cuando la misma Corte no exige la culpa del demandado en un proceso de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas.

En sentencia del 12 de agosto de 2003, expediente 7346, del magistrado José Fernando Ramírez, de la cual se habló anteriormente debido a las consideraciones que hizo el Tribunal Superior de Medellín, la Corte se apartó de la motivación del tribunal.

Recordemos lo que dijo el Tribunal: ""si bien es cierto que la legislación penal prohíbe la acción indemnizatoria contra el sindicado o el civilmente responsable cuando la absolución obedece a alguna de las causas referenciadas (las del artículo 57 CP), ello no descarta otros casos de absolución penal que pueden estar provistos de la fuerza vinculante de la cosa juzgada en materia civil, si se dan las condiciones legalmente exigidas, como ocurriría vr. g. cuando aquella se cimenta en la ausencia de culpa... y luego se promueva acción civil por el mismo hecho y con fundamento en una culpa probada, porque al respecto ya se ha decidido en el campo penal en el sentido de que no existió la culpa. De ahí que en la hipótesis de absolución por la ausencia de culpa, sea posible promover la acción de responsabilidad civil con fundamento en actividades peligrosas, pero no con base en una culpa probada".

¹⁰ La que se menciona es la posición tradicional del derecho penal, según la cual éste tiene por objeto la protección de bienes jurídicos. Es importante tener en cuenta que existen otras teorías, dentro de las cuales cabe resaltar la funcionalista por su gran acogida por los doctrinantes que sostiene que el fin u objeto del derecho penal es la protección de la vigencia de la norma penal

La Corte consideró errada esta interpretación en los siguientes términos: "la Corte debe corregir la errónea motivación propuesta por el ad-quem para desechar la cosa juzgada penal sobre la acción civil, pues como se expuso ab-initio, la decisión absolutoria penal sólo cierra el camino para pretender ante los jueces civiles la indemnización del daño proveniente del delito, cuando se adecúa en alguna de las hipótesis previstas por el art. 57 del C. de P. Penal. De manera que no era la disimilitud de causa entre uno y otro proceso la determinante de la ausencia de cosa juzgada, sino que bastaba verificar el motivo de la absolución penal del demandado y confrontarlo con las causas taxativamente diseñadas por el legislado, para concluir que por no presentarse esa subsunción la cosa juzgada debía descartarse, específicamente, porque la causa de la inculpabilidad conocida como defensa putativa, consagrada por el art. 40 num. 3 del C. Penal, vigente para entonces, no puede asimilarse a la inexistencia del hecho, como lo afirma el recurrente, es decir, que éste física y fenomenológicamente no tuvo ocurrencia. Punto este que técnicamente no aparece controvertido por el recurrente".

Si bien tanto el Tribunal Superior como la Corte llegan a la misma conclusión, nos parece más acertada la motivación del Tribunal. Primero entra a analizar de fondo el asunto para aducir las razones por las cuales esa sentencia penal no hace tránsito a cosa juzgada en materia civil, y lo hace de una manera acertada que es comparando el régimen probatorio en el proceso penal y en el proceso de responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas. Nos parece vago el análisis de la Corte al decir que por el solo de hecho de que la absolución penal no haya tenido origen en una de las causales consagradas por el artículo 57 del CP, no haga tránsito a cosa juzgada civil.

Otro aparte errado que encontramos en la motivación de la Corte es cuando ella dice que "no era la disimilitud de causa entre uno y otro proceso la determinante de la ausencia de cosa juzgada, sino que bastaba verificar el motivo de la absolución penal del demandado y confrontarlo con las causas taxativamente diseñadas por el legislado". Pues la causa de ambos procesos es el hecho dañino, es decir, tienen la misma causa. Una cosa distinta es el objeto o la finalidad de cada proceso, donde si hay diferencias grandes. Creemos que la Corte considera a las instituciones del derecho como causas pero ellas no son más que formas para resarcir los perjuicios, pero la causa es una sola, el hecho dañino.

6. EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA POR INIMPUTABILIDAD DEL SINDICADO EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS

Tenemos que decir que en este punto no hay una solución pacífica. La doctrina colombiana ha asumido diferentes puntos de vista y los tribunales no se han manifestado al respecto. Pero para el desarrollo del capítulo haremos unos comentarios con el fin de plantear la discusión más que con el ánimo de llegar a una solución.

Antes de entrar a hacer consideraciones sobre el tema, creemos importante mostrar la diferencia que existe entre la inimputabilidad penal y la incapacidad aquiliana del derecho civil. Por un lado, el artículo 33 del Código Penal dice que "es inimputable quien al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo a esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares.... Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al sistema de Responsabilidad Penal Juvenil". Por otro lado, el artículo 2346 del Código Civil establece que "los menores de diez años y los dementes no son capaces de cometer delito o culpa; pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores o dementes, si a tales personas pudieren imputárseles negligencia".

Las definiciones de ambos códigos tienen diferencias. Una que merece ser destacada es la siguiente: para el Código Penal, una persona menor de dieciocho años es inimputable; mientras que para el Código Civil es inimputable el menor de diez años. En síntesis, una persona que para el derecho penal es inimputable, puede reunir todas las condiciones necesarias para que sea declarado responsable de conformidad con la legislación civil. Tal es el caso de una persona que oscila entre diez y dieciocho años de edad.

La diferencia existente entre incapacidad aquiliana e inimputabilidad penal se refleja en las posiciones de Javier Tamayo Jaramillo y Gilberto Martínez Rave; mientras el primero fundamenta su teoría en el Código Civil (incapacidad aquiliana), el segundo lo hace con base en la definición del artículo 33 del Código Penal (inimputabilidad penal). Veamos: Javier Tamayo Jaramillo afirma que los inimputables, es decir, quienes no son capaces de cometer culpa por no tener la capacidad aquiliana de que trata el artículo 2346 del Código Civil, sí responden civilmente por el ejercicio de actividades peligrosas. Para llegar a esta conclusión no tiene en cuenta el artículo 2356, pues él dice que de conformidad con éste artículo los inimputables no responden civilmente por el ejercicio de actividades peligrosas porque no son capaces de cometer la malicia o negligencia de que habla el artículo, pues carecen de capacidad aquiliana¹¹.

Por lo tanto, Tamayo Jaramillo concluye que de conformidad con el artículo 669 del Código Civil los inimputables deben estar obligados a reparar los daños causados durante el ejercicio de una actividad peligrosa. Para fundamentar esta tesis, dice que "la culpa y la capacidad aquiliana nada tienen que ver con la obligación de reparar, pues no se juzga la conducta del propietario, sino el hecho objetivo de que el goce del dominio se ejerció contra derecho ajeno"¹². Cabe aclarar que en este caso se trata de una responsabilidad fundada en el derecho de dominio y no en la culpa, razón por la cual el inimputable debe ser el propietario del bien con el cual se estaba ejerciendo la actividad peligrosa al momento de causar el daño.

Otra es la argumentación de Gilberto Martínez Rave, quien llega a la misma conclusión. Él hace una distinción entre imputabilidad física e imputabilidad jurídica. Mientras la primera es la posibilidad de atribuirle un hecho a una persona, la segunda significa "la imputación física hecha a una persona que reúne los requisitos mínimos psicofísicos para que responda penalmente por el hecho"¹³.

En materia penal, tanto la imputabilidad física como jurídica son elementos de la responsabilidad. Para confirmar esto, Martínez Rave cita el artículo 33 del Código penal, que establece quiénes son inimputables, es decir, a quiénes no se les puede atribuir jurídicamente una pena privativa de la libertad, sino que en cambio se ven sometidos a las medidas de seguridad consagradas en el Código Penal. Y continúa diciendo que aunque una persona sea inimputable jurídicamente, de todas formas puede llegar a imponérsele responsabilidad penal, no a título de pena sino de medida de seguridad de conformidad con el artículo 69 y siguientes del Código Penal. De esta manera, afirma que los inimputables no tienen culpabilidad pero sí responsabilidad. Por lo tanto, lo que difiere entre un imputable y un inimputable es la sanción (pena o medida de seguridad), pero la responsabilidad penal es idéntica.

Su conclusión final es que "si los inimputables tienen responsabilidad penal, lógica y consecuentemente, también tienen responsabilidad civil en los hechos dañosos que cometan"¹⁴. En síntesis, un proceso de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas puede iniciarse o proseguirse así la sentencia penal declare que el sindicado es inimputable.

Nos parece muy vaga la argumentación de Martínez Rave, y poco fundamentada. Él no da razones por las cuales la sentencia penal que declara inimputable al sindicado no hace tránsito a cosa juzgada en lo civil. Y además consideramos que las medidas de seguridad aplicables a los inimputables no son propiamente responsabilidad penal, sino más bien una medida de protección para el sindicado.

7. EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA POR AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD EN UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIVIDADES PELIGROSAS

El artículo 57 del Código de Procedimiento Penal del 2000 estableció en su numeral tercero, que la acción civil no puede proseguirse cuando se haya declarado en el proceso penal que el sindicado actuó en estricto cumplimiento de un deber legal; y en el numeral cuarto de la misma norma se consagra la misma imposibilidad de iniciar la acción civil cuando se haya sentenciado en el proceso penal que el sindicado obró en legítima defensa.

Se ve entonces como el artículo 57 CPP ha entendido que existe cosa juzgada en relación con el proceso de responsabilidad civil cuando en el proceso penal se hayan declarado como probadas las causales de justificación enumeradas taxativamente por la norma. La razón de la anterior prescripción reside en que el legislador considera que cuando nos encontramos frente a la legítima defensa o cuando el sindicado actuó en estricto cumplimiento de un deber legal, la ilicitud del hecho desaparece puesto que se ha actuado bajo el amparo de una norma permisiva que permite realizar una conducta típica sin que por eso se cometa un injusto penal, esto es, el daño es justificado por el derecho y por lo tanto es legítimo.

La no inclusión de las demás causales de antijuridicidad dentro del artículo 57 CPP del 2000, se explica en tanto estas, a diferencia de la legítima defensa y el estricto cumplimiento de un deber legal, no tienen las suficientes razones para trasladar la carga del perjuicio, puesto que estas siguen siendo ilícitas ya que sólo se absuelve penalmente por que el Derecho Penal hace unas particulares consideraciones sobre la persona y las circunstancias.

Así las demás causales de justificación implican la no responsabilidad penal, por valoraciones de las circunstancias del caso concreto que hace el Derecho Penal, atendiendo al carácter de última ratio de la sanción penal. Pero esto no implica que la misma conducta pueda estar tipificada por las normas de responsabilidad civil, en las cuales no siempre hay consideraciones subjetivas sino regímenes de responsabilidad objetiva. Téngase en cuenta además que la legítima defensa y el estricto cumplimiento de un deber legal tienen como fundamento una norma permisiva o imperativa, y la configuración de ambas ponen en situación de irresistibilidad al agente; situaciones que no pasan en las demás causales donde la voluntariedad de cometer la acción típica es mayor y su no punibilidad penal es solo producto de valoraciones sobre la persona o las circunstancias. En todo caso, miraremos detenidamente las causales de justificación más relevantes, en los párrafos siguientes.

Sin embargo, es importante aclarar que en la nueva normatividad del procedimiento penal no se incluye una norma jurídica del tipo del artículo 57 CPP del 2000. Lo que va a suceder es que los criterios para reconocer el carácter de cosa juzgada no van a ser los mismos del Código del 2000, puesto que anteriormente se tenía una norma expresa, pero ahora no existe tal, y por lo tanto el juez deberá observar hacer un análisis sustancial de la cosa juzgada y no podrá limitarse a resolver los casos con la taxatividad del artículo 57. Debe entenderse que la cosa juzgada es un fenómeno procesal pero sus efectos radican en las relaciones sustanciales, sino que es un mandato imperativo que surge de una sentencia y que debe hacerse valer en todo el ordenamiento jurídico, sea entre las partes, frente a la ley o frente a futuras sentencias.

Sí nos basamos en las interpretaciones literales de la Corte Suprema de Justicia, entonces deberíamos concluir que en el nuevo código los efectos de cosa juzgada de los fallos penales quedan abolidos, ya que era la misma Corte la que fundamentaba la cosa juzgada en la taxatividad de la ley. Sin embargo, en materia de causales de justificación el juez deberá acoger la teoría de la unidad del acto ilícito, ya que un acto ilícito es contrario al sistema jurídico, no sólo a una rama de éste, y por lo tanto si existe una causal de justificación, está valdrá para todo el sistema jurídico, tanto para el derecho penal como el civil. Y será el juez civil el que tendrá que hacer valer la coherencia y la seguridad jurídica, al tener en cuenta que a una persona no se le puede decir que su actuar se considerará lícito o ilícito dependiendo del punto de vista desde el que se observe.

La inclusión de estas dos causales dentro del artículo 57 del Código de Procedimiento Penal se explican satisfactoriamente mediante el concepto de la antijuridicidad. Se afirma que una conducta es antijurídica cuando lesiona el ordenamiento jurídico sin justa causa; este es un juicio donde se constata la realización de una conducta tipificada por el orden penal sin que exista una causal de justificación que permita su realización; "... la antijuridicidad es la característica de contrariedad al derecho presentada por un comportamiento consistente en la no observancia de la prohibición o el mandato contenidos en la norma...es, además, indispensable la vulneración del bien jurídico protegido por la norma"¹⁵.

La antijuridicidad es una de las condiciones necesarias para que una conducta sea punible penalmente, esto es, es necesario que la conducta este prohibida por el ordenamiento jurídico y que efectivamente lesione uno de sus bienes jurídicos. Ahora bien, si es el mismo ordenamiento el que permite la realización de la conducta tipificada penalmente entonces esta pierde su antijuridicidad, puesto que es el mismo derecho el que incentiva y legitima la acción.

Dos de los diferentes supuestos en que el ordenamiento jurídico permite realizar conductas tipificadas penalmente son: la legítima defensa y el actuar en el estricto cumplimiento de un

deber legal. El legislador colombiano ha concluido que cuando se actué bajo estos dos supuestos, la justificación de la conducta debe tener efectos en materia civil, dado que sería contradictorio que una conducta permitida por una norma jurídica, fuera sancionada y desvalorada por otra norma diferente.

Se acogió en la presente norma la teoría de la unidad del acto ilícito que predica que la antijuridicidad y la ilicitud de una conducta aparece cuando ésta contradice lo prescrito por una norma jurídica; independientemente de que la conducta este regulada por una u otra rama del derecho, la ilicitud se coteja frente a la integridad del ordenamiento jurídico. Según lo anterior, y con el fin de no afectar la coherencia y la lógica del ordenamiento jurídico, es importante defender la idea de que cuando una acción está permitida por una norma jurídica entonces se está dotando a la conducta de licitud y de correspondencia con el ordenamiento jurídico como conjunto.

La anterior tesis la han defendido diferentes doctrinantes:

El doctrinante colombiano Alvaro Pérez Vives sostiene que: "no existe entre el ilícito civil y el ilícito penal, entre delitos propiamente hablando y contravenciones o faltas disciplinarias, una diferencia cualitativa sino cuantitativa... "todo acto que infrinja los órdenes de disciplina social constituye un acto ilícito... el único elemento posible de distinción está constituido por las sanciones"¹⁶.

Por otro lado, Javier Tamayo Jaramillo afirma que: "... si el juez penal niega la existencia del hecho o niega que el sindicado lo haya cometido, o afirma que el procesado actuó en cumplimiento de un deber o en legítima defensa, el juez civil tampoco podrá desconocer estas afirmaciones. La razón de ser de esta solución radica en que tanto la responsabilidad civil como la penal requieren que el agente haya causado el daño sin que haya un hecho que lo justifique, y sería lamentable y perjudicial que mientras el juez penal afirma o niega cualquiera de estos elementos, el juez civil llegue a una solución contraria".¹⁷ En relación con la legítima defensa, y el mismo argumento sirve para las demás causales de justificación o de permisión de la conducta, Tamayo Jaramillo dice que: "Si algún daño es jurídico es el causado en legítima defensa. Por eso la ley penal dice que en esa hipótesis el daño se justifica. Ahora, en el mundo entero se tiene claro que cuando el hecho se justifica, esa justificación abarca todos los regímenes legales, incluido el administrativo".

En el mismo sentido Tamayo Jaramillo refiriéndose a los efectos de una absolución penal por estado de necesidad defiende la unicidad de la ilicitud: " En efecto, la ilicitud de quien actúa en estado de necesidad, comprende el ordenamiento jurídico en su totalidad. En consecuencia, cuando un hecho se justifica desde el punto de vista penal, también se justifica desde el punto de vista civil o administrativo. Por ello, quien sea absuelto

penalmente por estado de necesidad, no podrá ser condenado por un juez civil como responsable civilmente. Sería imposible que el hecho se considerase justificado a la luz del derecho penal, y que, al mismo tiempo, se considerase delictuoso a la luz del derecho civil"¹⁸. Reafirma su posición diciendo que: "Aún en los casos de responsabilidad civil o del Estado, puramente objetiva, la absolució n no se produce porque haya existido culpa o no, sino porque el hecho causado intencionalmente está justificado por el ordenamiento jurídico".

Ilumina y aclara aún más la teoría de la unidad del acto ilícito, la referencia que hace Javier Tamayo Jaramillo a lo sostenido por el penalista Hans Jescheck, al respecto sostuvo el profesor alemán: "El ordenamiento jurídico cuenta con un solo concepto unitario de antijuridicidad. Lo único que varía según las distintas parcelas del derecho son las consecuencias jurídicas de la acción antijurídica (por ejemplo, indemnización de perjuicios en el derecho civil, anulación de un acto administrativo en el Derecho Administrativo, reparación en Derecho Internacional, penas y medidas en el Derecho Penal). En consecuencia, también las causas de justificación deben deducirse del ordenamiento jurídico en su conjunto. Así lo impone el principio de unidad del ordenamiento jurídico. Significa que, por ejemplo, en caso de concurrencia de una causa de justificación según el Derecho Civil o el Derecho público, resultará también de inmediata aplicación en Derecho Penal"¹⁹.

Adicionalmente, y para dejar en claro la importancia que le han radicado muchos autores al problema, citaremos la opinión de los juristas argentinos López Mesa y Trigo Represas en relación con la antijuridicidad civil y penal: "ambas ramas del derecho en orden a la antijuridicidad, comparten el concepto básico sobre que ella implica una contradicción con una norma jurídica".²⁰

Igualmente, el doctrinante argentino Ricardo Núñez afirma con certeza que "La antijuridicidad como característica del hecho punible o delito penal, no presenta ninguna condición que la diferencie de la antijuridicidad propia del hecho ilícito civil [...] si bien [...] la antijuridicidad es una característica que diferencia el hecho típico punible del hecho ilícito civil. Ambos hechos están en contraste con el derecho y lo están por la misma razón fundamental de ser desaprobados por una norma jurídica, la cual no se estructura ni funciona en forma distinta para el campo de la responsabilidad penal y para el de la civil".

Sostiene finalmente Núñez que "debe sostenerse firmemente el concepto de la unidad de la antijuridicidad en todo el campo del derecho, sin distinción de sus ramas. Un hecho es o no es antijurídico en sí mismo, sin que pueda serlo para una rama jurídica y no serlo para otra. Esto sin perjuicio de que siendo antijurídico el hecho, produzca efectos en una de ellas y en otras no; por ejemplo, la destrucción culposa de un objeto es un acto ilícito civil, pero, por no encuadrar en el artículo 183 del Código Penal, no produce efectos en el campo penal. La

unidad de la antijuridicidad del hecho resulta de la unidad de la norma jurídica de valuación que regula su compatibilidad o incompatibilidad con el derecho, con prescindencia de que, por su tipificación penal o por sus efectos civiles, se le atribuyan consecuencias jurídicas de una u otra índole".²¹

Es así como el Código de Procedimiento Penal del 2000 acertó en incluir causales de justificación penal como eventos en que la sentencia penal absolutoria hace tránsito a cosa juzgada. La norma defiende la coherencia del sistema jurídico colombiano, además que no menoscaba el principio de la eficacia procesal y de la necesidad de una norma individual o sentencia eficaz que le ponga término al pleito jurídico, so pena de afectar el principio procesal y derecho individual a la tutela judicial efectiva.

Y lo anterior no es poco, como bien lo sostiene Hernando Devis Echandía en relación con la importancia del principio de la cosa juzgada: "La razón de ser de esta institución es la necesidad de ponerle término a los litigios decididos por sentencia judicial, para impedir su sucesivo replanteamiento por la parte desfavorecida, evitando así la incertidumbre en la vida jurídica y dándole eficacia a la función jurisdiccional del Estado, que de otra manera sería casi inútil"²²

Una vez constatada la importancia de la inclusión de eventos de declaración penal de causales de justificación que hacen tránsito a cosa juzgada en el campo civil, es necesario preguntarse por qué razón no se incluyeron todas las modalidades de causales de justificación en el artículo 57 del CPP del 2000, puesto que de todas las que menciona el artículo 32 del Código Penal solo se incluyeron la legítima defensa y el estricto cumplimiento de un deber legal.

7.1. La Legítima Defensa

El artículo 57 CPP prescribe que la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el sindicado obró en legítima defensa. La anterior figura presupone por parte del agente el uso de la violencia, proscrita por el ordenamiento jurídico, para proteger la vigencia de determinado bien jurídico. La legítima defensa presupone dos actuaciones: actuación de agresión en contra del agente y actuación de defensa por parte del mismo. La agresión debe ser injusta, esto es ilícita, y por lo tanto típica y antijurídica; igualmente la agresión debe ser actual o inminente. Por el lado de la actuación de defensa esta debe ser necesaria y proporcional a la actuación de agresión.

"La legítima defensa no es más que un ejercicio de la violencia para tutelar o proteger un bien jurídico atacado injustamente... la naturaleza de esta institución es ser una norma

permisiva y unos le otorgan un fundamento de carácter social, colectivo o supraindividual, consistente en la necesidad de la defensa del orden jurídico; y otros de naturaleza individual o particular: la necesidad de defender el bien jurídico o los derechos subjetivos injustamente agredidos... confluyen, pues, en la legítima defensa una tendencia de carácter social y otra individual, lo que es en el fondo reflejo de una concepción política del Estado que persigue la armonía entre los intereses colectivos y los particulares, bajo el imperio de la democracia participativa en una sociedad pluralista"²³

Sin embargo, es importante distinguir la legítima defensa objetiva de la subjetiva, lo anterior en razón a que solo la objetiva tiene posibilidad de producir efectos de cosa juzgada en el proceso civil. En la legítima defensa objetiva efectivamente se reúnen los requisitos legales para que exista tal: agresión grave, actual o inminente; la necesidad de la defensa y la proporcionalidad de la misma con relación al ataque. Por el contrario, en la subjetiva o legítima defensa putativa, los requisitos de esta no se encuentran probados y si bien el sindicado es absuelto adjudicándole una legítima defensa presunta, esta absolución es solo por una consideración que hace el juez sobre el estado subjetivo del sindicado, consistente en que se abstiene de imponer pena en tanto el sujeto obró con la convicción no dolosa de que se estaba defendiendo legítimamente bajo el amparo de la ley.

Es correcto que se haya incluido la legítima defensa, entiéndase la objetiva, en el artículo 57 CPP del 2000. Es importante su inclusión ya que el acto del imputado carece de antijuridicidad puesto que el ordenamiento jurídico le permite actuar de esta forma a condición de que se cumplan los requisitos legales de la legítima defensa. Es el mismo ordenamiento jurídico el que lo alienta a defenderse y a proteger bienes jurídico propios o ajenos, y a salvaguardar el ordenamiento jurídico en su integridad. Además téngase en cuenta que "el procesado simplemente se defendió de una agresión grave, que no podía impedir de otra forma. No existe responsabilidad penal porque el hecho se justifica, pero tampoco responsabilidad civil por cuanto quien resultó perjudicado o sus herederos no pueden esperar una indemnización o una contraprestación económica cuando quien agredió, o quien provocó, fue quien resultó perjudicado... el perjudicado es un agresor, un provocador, que no tiene por qué esperar una indemnización por su conducta y tampoco sus herederos"²⁴.

Otro es el fundamento que le confiere Alvaro Pérez Vives a la producción de efectos de cosa juzgada del fallo penal absolutorio por legítima defensa. Inicialmente afirma que la legítima defensa se incluye en la norma por tratarse de un caso donde la conducta es típica penalmente pero lícita en razón a que una norma la permite en casos específicos. Sin embargo, Pérez Vives sostiene que para que esta causal de justificación tenga plenos efectos justificantes en el derecho civil se necesita de una institución civil que ampare la conducta: la fuerza mayor. Así la legítima defensa sólo será objetiva cuando la conducta logre encuadrarse para el juez civil en un caso de fuerza mayor, donde no se harán las consideraciones subjetivas típicas de los jueces penales, que por cierto son muy frecuentes

cuando se alega una causal de justificación, sino que el juez civil deberá constatar que la legítima defensa fue producto de una causa extraña al demandado, que éste no podía impedir ni prever.

Nosotros creemos que no son muy necesarias las acotaciones de Pérez Vives en este aspecto, puesto que los mismos requisitos de la legítima defensa hacen que el juez penal haga un verdadero juicio sobre la imprevisibilidad e irresistibilidad del acto agresor. Un examen sobre la ilegalidad, gravedad y actualidad o inminencia del acto agresor producen resultados iguales desde el punto de vista ontológico a aquellos que se producen por la constatación de una verdadera irresistibilidad e imprevisión del acto agresor. Si alguien se defiende bajo la legítima defensa objetiva es porque no pudo prever y resistir el acto sin incurrir en la descripción típica penal, o sea le quedaba imposible defenderse de la agresión sin incurrir en una defensa violenta de sus bienes jurídicos. Además sostener la posición de Pérez Vives sería contradecir la teoría de la unidad del acto ilícito, ya que como sabemos las causales de justificación le suprimen la ilicitud a la actuación del sindicado, y en la teoría de Pérez Vives se estaría incurriendo en una causal de justificación y al mismo tiempo cometiendo un ilícito civil en caso de que no se encuadre dicha causal en un evento de fuerza mayor civil.

Así las cosas, hay una norma dentro del ordenamiento jurídico que permite actuar en legítima defensa bajo ciertas condiciones especiales. En el caso que se cumplan dichas condiciones la conducta estará permitida por el ordenamiento jurídico, y por eso independientemente de que se trate de responsabilidad penal o civil (con culpa probada, presunta o responsabilidad objetiva), la conducta será lícita. Si la legítima defensa vuelve a la conducta del sindicado lícita, entonces su absolución penal tendrá efectos de cosa juzgada en materia civil.

Sin embargo, la legítima defensa subjetiva o defensa putativa, que consiste en que no se configuran los presupuestos legales de la legítima defensa objetiva, no produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil. Lo anterior, dado a que es el causante quien configura el error, y las consecuencias negativas de la falta de diligencia del agente no pueden trasladarse a un tercero ajeno a las causas del ilícito. Además, la defensa putativa no le quita la antijuridicidad al acto, sino que excluye la responsabilidad penal por ausencia de culpabilidad, es decir, porque no se puede exigir otra conducta en el presente caso; pero al adolecer de ilicitud, el agente deberá responder ante las normas civiles quebrantadas.

7.2. El Estricto Cumplimiento De Un Deber Legal

Esta causal de justificación se refiere a que "se declara ajustada al derecho la realización de ciertas conductas típicas llevadas a cabo por el agente en cumplimiento de lo dispuesto por

el mismo ordenamiento jurídico; aunque para poder concebir esta hipótesis justificante, es indispensable la existencia de un deber consagrado en la ley... la configuración de esta eximente descansa en el principio de interés preponderante, lo cual se explica porque el ordenamiento jurídico impone -en ciertos casos y a ciertas personas- el deber de realizar conductas tipificadas en la ley que menoscaban los bienes jurídicamente tutelados; pero al mismo tiempo, esa normatividad manda a tales destinatarios el respeto a intereses protegidos"²⁵

Razón tuvo el legislador para incluir esta causal en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, puesto que la conducta fue ejercida por el mandato de una norma jurídica que admite la producción de daños y perjuicios bajo determinadas condiciones. Si una norma penal permite un comportamiento y lo desafecta de ilicitud, entonces con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica y la coherencia dentro del ordenamiento jurídico es menester entender que la norma es lícita en la totalidad del sistema jurídico. Es que "todo lo jurídicamente permitido es lícito, de manera que no puede decirse que el cumplimiento de un deber sea contrario al derecho objetivo"²⁶, y acertada es la opinión de Reyes Echandia al afirmar que "sería injusto y contradictorio que el propio ordenamiento jurídico le impusiese a los subordinados la obligación de cumplir órdenes superiores, y al propio tiempo, las sancionase al acatarlas"²⁷

Sin embargo, y para una mayor protección de quienes se verían perjudicados por el despliegue de tal conducta, es importante que se esté cumpliendo estrictamente el deber impuesto por la norma y no se incurra en ningún tipo de exceso, así "no basta alegar la causal, pues es necesario demostrar que la conducta se ciñó a las exigencias del deber que se cumple. El adjetivo adscrito impone al juez la obligación de hacer un análisis detenido de las circunstancias que permitan establecer que el procesado cumplía funciones legalmente confiadas"²⁸. Valga aclarar que dicho análisis está en cabeza del juez penal, y que en caso que concluya que se configura la causal de justificación entonces el juez civil ni siquiera podrá pronunciarse acerca del tema.

7.3. Estado De Necesidad

El estado de necesidad implica una situación de riesgo para los bienes jurídicos, pero a diferencia de la legítima defensa no presupone agresión humana; el estado de necesidad es cuando "el agente realiza una conducta típica con la finalidad de proteger un derecho propio o ajeno de una amenaza o daño actual o inminente, produciendo en tal empeño una lesión de menor gravedad que la impedida en los bienes jurídicos de otra persona y no esté obligado jurídicamente a afrontar el trance que no ha sido provocado por él"²⁹.

Valga aclarar que nos referimos es al estado de necesidad justificante, el considerado como

causal de justificación que elimina la antijuridicidad y la responsabilidad. Otra cosa es el estado de necesidad exculpante, donde se produce un daño no menor que el evitado, a diferencia del justificante donde se produce un daño menor para evitar uno mayor. El exculpante no produce efectos de cosa juzgada, puesto que no elimina la ilicitud del hecho, y por lo tanto si bien se absuelve penalmente, la razón de la no responsabilidad es la no culpabilidad dada la no exigibilidad de otra conducta.

Lo problemático del artículo 57 CPP aparece cuando no se incluyeron otras causales de justificación consagradas expresamente por el Código Penal en su artículo 32. El caso tal vez más discutido es el del estado de necesidad, y no se sabe si el juez tiene el camino libre para condenar a la indemnización de perjuicios civiles a quien fue absuelto penalmente alegando estado de necesidad. La jurisprudencia y la doctrina han concluido que el juez civil puede condenar en estos casos a la indemnización de perjuicios, pero el fundamento jurídico para dicha indemnización no ha tenido el mismo consenso.

Por un lado, se encuentra la posición que diferencia la legítima defensa y el estado de necesidad en las características del ofendido. Consideran que como en el estado de necesidad el ofendido no es un provocador entonces éste merece una indemnización, en cambio en la legítima defensa el ofendido es provocador y por lo tanto no tiene derecho a la indemnización de los daños que le ocasionaron.

Martínez Rave sostiene que "En la legítima defensa el ofendido es un provocador, un agresor que por tanto, no tiene derecho a esperar indemnización. En el estado de necesidad la víctima es inocente, es alguien que ni intervino, ni provocó la situación que dio origen al perjuicio. Y si bien ambas, como causales de justificación, ponen fin a la responsabilidad penal, el estado de necesidad no tiene ese mismo efecto de la responsabilidad civil"³⁰

En una línea de pensamiento similar se encuentra Alvaro Pérez Vives quien sostiene que la absolución por estado de necesidad no tiene efectos de cosa juzgada, ya que la conducta sigue siendo antijurídica y sólo se exime de responsabilidad penal por especiales motivos atinentes exclusivamente al derecho punitivo. El estado de necesidad no le quita a la conducta las características de tipicidad y antijuridicidad.

Valencia Zea piensa que "quien se exonera de responsabilidad penal en razón de actos realizados en estado de necesidad, no se exonera de indemnizar los perjuicios causados por la destrucción de un bien ajeno. Es verdad que el estado de necesidad otorga al titular del bien jurídico que se halla en grave peligro la facultad de influir en la cosa ajena en la medida que sea necesario para evitar el peligro; pero no existe motivo o razón para que quien se encuentre en estado de necesidad se salve a costa ajena"³¹

Esta primera corriente considera que el estado de necesidad no le quita a la conducta su ilicitud y culpabilidad, puesto que el hecho fue plenamente voluntario, y además el hecho no se realizó en ejercicio de un derecho y además estar en estado de necesidad no confiere el derecho para dañar a otros y no hay razón asó para trasladar la carga del perjuicio.

Por otro lado, esta la posición de Tamayo Jaramillo, que sostiene básicamente que el hecho cometido bajo estado de necesidad es lícito aun desde el punto de vista civil, pero de todas formas debe existir algún tipo de compensación a favor de la persona perjudicada, y para llegar a esta conclusión utilizan las instituciones del enriquecimiento sin causa o la agencia oficiosa. Sostiene Tamayo que "se aplicará la institución del enriquecimiento sin causa cuando el agente causante del daño lo hizo para salvar sus propios bienes, y entonces es lógico que sea él quien deba reparar el daño sufrido por la víctima. En cambio, si el agente que actúa en estado de necesidad lo hace para salvar los bienes de un tercero, éste deberá reparar el daño sufrido por la víctima, y entonces la fuente de la obligación será la agencia oficiosa"³². Tamayo agrega que es precisamente porque la jurisprudencia y la doctrina han admitido que el daño producido en caso de un estado de necesidad es indemnizable, que el legislador no incluyó el estado de necesidad dentro del artículo 57 CPP del 2000, con el fin de no generar una contradicción con las instituciones de derecho civil.

Puede criticarse la idea de que pueda usarse la institución del enriquecimiento lícito para fundamentar la indemnización en el proceso civil, en tanto el estado de necesidad se explica por la situación apremiante en que se encuentra el agente; y lo que busca éste, más que enriquecerse, es proteger un derecho personal o patrimonial propio, en este último caso se hablaría de una negación a empobrecerse más.

Finalmente, hay una corriente que se separa un poco del debate acerca del fundamento de la indemnización civil, y se preocupa más bien por llegar a conclusiones atendiendo a la equidad y solidaridad social. Se propone que ambos soporten el daño equitativamente, tanto el sindicado absuelto por estado de necesidad como el victimario, puesto que ninguno de ellos puede reprochársele todo el daño sufrido puesto que al fin de cuentas ambos son victimarios de un mismo hecho.

Hizo bien el legislador al no otorgarle efectos de cosa juzgada a la absolución penal por estado de necesidad ya que nada es más justo que quien sacrifica el bien de otro para salvar un propio, esté a su vez obligado a resarcir el daño injustificado inferido. Es cierto que quien actúa presionado por encontrarse en estado de necesidad no esta actuando con culpa o dolo, pero eso no justifica que la carga deban soportarla terceros ajenos a su estado de necesidad, además téngase en cuenta que el sindicado no está frente a un hecho irresistible.

7.4. En Legítimo Ejercicio De Un Derecho, De Una Actividad Lícita O De Un Cargo Público

El artículo 57 CPP del 2000 tampoco le otorga efectos de cosa juzgada respecto al proceso civil a la sentencia penal que absuelve al sindicado por haber actuado en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. La razón para esta exclusión podría ser que los terceros ajenos al ejercicio del derecho, cargo público o actividad lícita no tienen por qué cargar con las consecuencias negativas de aquellas conductas.

Nótese que es precisamente la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica las que se podrían ver amenazadas en los casos en que se acepte que estas causales no hacen tránsito a cosa juzgada al ser probadas en un proceso penal, puesto que estaríamos otra vez ante el absurdo jurídico de encontrar que una conducta esté al mismo tiempo prohibida y permitida.

Martínez Rave justifica la no inclusión de esta causal en el artículo 57 CPP: "Es aceptable que se justifiquen penalmente conductas que se cumplen en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita o de un cargo público, por cuanto el presunto causante no actúa ilícitamente. Pero cuando una persona es afectada en su integridad o en su patrimonio, ¿por qué tiene que cargar con las consecuencias patrimoniales de ese hecho o conducta? Es por tanto perfectamente explicable que el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal no incluya como excepción que hace tránsito a cosa juzgada civil, la absolución que por esta causa haga el juez penal. No existe responsabilidad penal y está bien, pero sí puede existir responsabilidad civil por los daños o perjuicios ocasionados con ese acto, las más de las veces cuando se abusa o excede en su ejercicio"³³.

En el mismo sentido argumentan los abogados Carlos Darío Barrera Tapias y Jorge Santos Ballesteros en relación con los efectos civiles cuando se está ejerciendo un derecho subjetivo, pero valgan también sus razones para el legítimo ejercicio de un derecho o cargo público: "... es claro que el ejercicio de un derecho es causa de justificación del daño ocasionado. La responsabilidad como sanción del acto ilícito civil es pues excluida. De todas maneras, el sentimiento jurídico se compadece ante la situación de la víctima; no parece justo que el titular del derecho, quien se beneficia del goce de la prerrogativa, no soporte siquiera mínimamente las consecuencias desfavorables de su privilegio.

Consideraciones de equidad imponen que en ciertos casos el juez ordene una reparación a cargo del enriquecido a costa del menoscabo que causó a otra persona. La Constitución Política actual contempla algunas normas que pueden servir de fundamento a esta reparación en equidad. Por un lado, dispone que el ejercicio de un derecho supone responsabilidades y, si bien es muy temprano para afirmarlo, no se ve por qué esto deba ser

interpretado como referido restrictivamente a la "responsabilidad común por los delitos y las culpas" regulada en la ley civil. Adicionalmente dicha equidad o sensibilidad tiene suficiente sustento al ser considerada por la Constitución como criterio auxiliar de la actividad judicial"³⁴.

Vemos como la doctrina otra vez y de manera forzosa ha creado mecanismos y argumentos para no dejar sin indemnización a las víctimas; sin embargo, y aunque el fin es loable, persiste la inconsistencia de que a una persona que actuó conforme a derecho y lícitamente se le imponga una sanción por su conducta, lo que es problemático desde el punto de vista del principio de legalidad que gobierna las normas jurídicas punitivas.

7.5. En Cumplimiento De Orden Legítima De Autoridad Emitida Con Las Formalidades Legales.

"No actúa antijurídicamente... quien, en cumplimiento de orden emitida por su superior jerárquico dentro de una relación propia de derecho público, realiza una conducta tipificada en la ley, siempre y cuando tenga competencia para actuar y el mandato impartido se ajuste a las previsiones legales establecidas en cada caso concreto"³⁵

Quien actúa bajo el amparo de esta causal de justificación no tiene responsabilidad penal, pero la no inclusión de esta conducta en el artículo 57 CPP hace que la responsabilidad civil de quien actúa en cumplimiento de orden legítima de autoridad puede verse comprometida. Algunos piensan que la falta de antijuridicidad de la conducta no puede implicar una falta de protección al victimario, y argumentan con la inequidad de imponerle la carga a un tercero ajeno al cumplimiento de la orden estatal. Aunque en principio, esta conducta justificada no podría implicar una condena civil de indemnización de perjuicios dado que el agente se encuentra justificado por el ordenamiento jurídico.

Es problemático que la declaración de esta causal no tenga efectos de cosa juzgada puesto que es el mismo ordenamiento jurídico el que está alentando el despliegue de la conducta, se le está imponiendo una carga y se le castiga tanto si no la cumple como si la cumple, estaríamos en presencia de la contradicción jurídica ya tantas veces mencionada, además "no tendría sentido que el orden jurídico propio de un Estado social y democrático de derecho no amparase a quien válido de su investidura pública cumple con los mandatos legales"³⁶

8. EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA CUANDO LA CONDUCTA CAUSANTE DEL PERJUICIO NO SE REALIZÓ O EL SINDICADO NO LA COMETIÓ EN UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIVIDADES PELIGROSAS

Finalmente, el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal establece que la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió.

En el primer caso, cuando el hecho que originó el perjuicio no se realizó, y así lo declaró el juez penal en providencia en firme, desaparece uno de los elementos esenciales de la responsabilidad civil: el hecho; y por lo tanto no será posible posteriormente pedir indemnización de perjuicios ante el juez civil. Ahora, cuando se trata que el sindicado no cometió el hecho, tampoco es posible reclamar perjuicios civilmente frente a la misma persona absuelta penalmente ya que se le imputo indebidamente la conducta, claro que esto no quita que se pueda reclamar contra una persona frente a la cual no se pronunció el fallo penal y que por lo tanto podría imputársele material o civilmente la conducta generadora de daño.

Aunque estas dos causales del artículo 57 CPP no presentan mayor problema a la hora de aceptar sus efectos de cosa juzgada, surge un nuevo problema en relación con la causa extraña. En efecto Javier Tamayo Jaramillo sostiene que en la medida que la causa extraña rompe el nexo de causalidad, la absolución penal por ese motivo puede enmarcarse dentro de la causal según la cual el sindicado debe ser absuelto porque no causó el daño. Para llegar a la anterior conclusión, Tamayo Jaramillo aclara que la causal de absolución penal por causa extraña también deber ser considerada como causa extraña a la luz del derecho civil; "se tiene entendido que tienen efectos de cosa juzgada todos aquellos elementos de la sentencia que son el soporte de mismo de ella. Si la causa extraña sirve de soporte a la absolución penal, el juez civil no puede negar esa misma circunstancia en un proceso posterior"³⁷.

Sin embargo, y como ya lo acotábamos en el presente trabajo, la presunción de inocencia que tiene el sindicado dentro del proceso penal produce consecuencias procesales que no aconsejan adoptar la posición de Tamayo Jaramillo ya que en muchos casos en el proceso civil el causante del daño está cobijado con una presunción de culpa o de responsabilidad, "este juego de presunciones es, probatoriamente hablando una diferencia fundamental y determinante. Por eso los criterios evaluativos (en el penal a favor del causante, en el civil en contra del causante) modifican radicalmente las consecuencias de la conducta en cada una de las responsabilidades y por ello su declaratoria por el funcionario penal no impide o cierra la vía para que el juez civil analice y declare o no su existencia"³⁸

Lo conveniente es que el juez dentro del proceso civil haga un análisis de la causa extraña, con el fin de poder decidir si la causa extraña declarada en el proceso penal cumple con los presupuestos de causa extraña de la responsabilidad civil. En tanto la causa extraña trate de un hecho inexistente o que no lo cometió el sindicado, entonces frente a esa misma persona el juez civil debe adoptar la causa extraña con efectos de cosa juzgada puesto que tanto la responsabilidad civil como la penal le conceden efectos de causa extraña a ambas situaciones; pero en los demás casos de causa extraña será el juez civil el que deberá declarar si la causa extraña penal corresponde a los presupuestos legales de la causa extraña civil.

9. EL CONCEPTO DE COSA JUZGADA

Una vez vistas las similitudes que existen entre los elementos de ambas responsabilidades, es importante determinar si aquel cotejo es suficiente o no para sostener que la sentencia penal absolutoria tiene efectos de cosa juzgada en procesos posteriores de responsabilidad civil por actividades peligrosas. Esto no es otra cosa que hacer un análisis, consistente en examinar si entre el proceso penal y el civil existen elementos comunes que nos permitan sostener que se está haciendo un uso correcto del concepto de cosa juzgada.

La cosa juzgada es una institución jurídica consagrada con el fin de proteger el derecho que tenemos todos a la eficacia de la decisión judicial, y así esto implica consecuentemente la protección de nuestro derecho a una tutela judicial efectiva. Para lograr la eficacia de la decisión, es necesario darle estabilidad a la providencia, y esta estabilidad viene asegurada por unos mecanismos procesales que impiden que se vuelva a juzgar un litigio ya resuelto judicialmente. De igual forma, la eficacia de la decisión viene asegurada por la imperatividad de la misma, ya que la sentencia debe contener una norma vinculante. Esto, la imperatividad y la estabilidad de la sentencia, y no otra cosa, son las características básicas del concepto de cosa juzgada.

Hernando Devis Echandia ha definido a la cosa juzgada como: "... la calidad de inmutable y definitiva que la ley le otorga a la sentencia, en cuanto declara la voluntad del Estado contenida en la norma legal que aplica, en el caso concreto"; adicionalmente sostuvo: "Mediante el instituto de la cosa juzgada se determina que la voluntad del Estado, contenida en la ley, es para ese litigio y en ese caso concreto definitiva e inmutable la que el juez declara en la sentencia"³⁹ y " la razón de ser de esta institución es la necesidad de ponerle término a los litigios decididos por sentencia judicial, para impedir su sucesivo replanteamiento por la parte desfavorecida, evitando así la incertidumbre en la vida jurídica y dándole eficacia a la función jurisdiccional del Estado, que de otra manera sería casi inútil".⁴⁰

Las características y la explicación de esta institución jurídica han sido diversas, algunos sostienen que es una simple ficción jurídica; otros alegan que es un hecho jurídico material y no procesal, que produce efectos exclusivamente sobre el derecho material, efectos que son producto de la ley y no de la sentencia; adicionalmente se ha afirmado que ésta es una institución netamente procesal que no produce efectos sobre las relaciones jurídicas sustanciales; y finalmente, las teorías modernas consideran que la cosa juzgada es una institución de derecho procesal emanada de la voluntad de la ley, no del juez (aunque parte de esta teoría hace emerger los efectos de cosa juzgada más de la sentencia que de la ley). La importancia de analizar estas teorías radica en que dependiendo de cual se escoja, será el punto de partida para afirmar si los efectos de cosa juzgada deben estar consagrados

expresamente o es el juez el encargado de hacerlos valer.

Sigamos caracterizando el concepto de cosa juzgada: se puede afirmar que el objeto de ésta no es llevar la certeza al litigio, dado que éste es el fin de toda sentencia, sino que más bien lo que busca la cosa juzgada es darle inmutabilidad y definitividad a tal declaración de certeza que es la sentencia. En el evento de que no exista cosa juzgada la sentencia sólo tendrá una certeza provisional, puesto que todavía se podría recurrir en el proceso; en cambio la cosa juzgada nos asegura que ese mismo litigio no puede recibir otra vez un pronunciamiento, dado que precisamente la cosa juzgada le dio a la sentencia dos características: es inmutable y definitiva.

La anterior explicación, nos lleva a hacer una claridad en cuanto a las diferencias del concepto de cosa juzgada con el concepto de sentencia ejecutoriada. En esta última se contiene una norma obligatoria concreta producto de la voluntad de la ley, pero es la cosa juzgada la que le da ese plus: la inmutabilidad y la definitividad. La cosa juzgada no le está dando a la sentencia ejecutoriada su obligatoriedad e imperatividad, pues estas son características de toda sentencia, pero la cosa juzgada tiene efectos en estas características cuando las convierte en inmutables y definitivas, ya que no se puede volver a procesar las pretensiones ya resueltas.

Ahora bien, para hablar de los alcances y efectos de la cosa juzgada, la regla general en materia civil es que la cosa juzgada no implica que la parte favorecida tiene una certeza definitiva frente a todo el mundo, puesto que la cosa juzgada se limita en este caso a quienes fueron partes e intervinientes en el proceso. Así en principio, la cosa juzgada tiene unos efectos ínter partes, excepto en materia penal donde sus efectos son erga omnes, decisión legislativa, incluso constitucional, que busca limitar el poder punitivo del Estado y proteger las garantías del sindicado.

En términos generales podríamos afirmar que la cosa juzgada, como institución de derecho público, implica la imposibilidad de revisar una decisión previa sobre un litigio en un proceso posterior. Debe el juez identificar que haya identidad entre lo que se juzgó en el pasado y lo que le pide que se procese actualmente, y así se ve la esencia especialmente procesal de la cosa juzgada, dado que es una consecuencia del proceso y la voluntad de la ley procesal. De todas formas, se debe reconocer que sus efectos jurídicos van más allá, y afectan relaciones jurídicas sustanciales. Así existe un efecto directo y procesal: la inmutabilidad de la decisión, y uno indirecto y sustancial: la definitividad de lo resuelto en derecho sustancial.

Valga definir, que la inmutabilidad se refiere a la imposibilidad que tienen los jueces de volver a procesar las mismas pretensiones, consideradas en un proceso anterior que

culminó con sentencia. Ahora bien, la definitividad es la declaración judicial que nos brinda certeza frente al problema sustancial resuelto por la sentencia. Concluamos: - la cosa juzgada satisface la pretensión al darle definitividad a lo resuelto en relación a lo que planteó la pretensión, y - la cosa juzgada es efecto de la voluntad del Estado contenida en la ley, y no un efecto proveniente de la sentencia o del juez (afirmación respaldada por la mayoría de la doctrina, pero sobre la cual haremos posteriormente precisiones sobre ella para poder aceptar que el artículo 57 CPP no es taxativo).

Aceptado que el fundamento de la cosa juzgada reside en la voluntad del Estado manifestada en la ley, no es necesario hacer más consideraciones intentando explicar la razón de ser de la institución, simplemente sosténgase que la potestad interventora del Estado, mediante la ley, tiene el poder suficiente para establecer los efectos y la eficacia de la sentencia definitiva. ¿Por qué razones lo hizo? Pues obviamente por razones políticas que buscan solucionar problemas sociales, como por ejemplo la seguridad jurídica y la eficacia de las decisiones judiciales.

Como se aplica la cosa juzgada? Mediante un análisis que hace el juez identificando la identidad de partes, de objeto y de causa petendi. Estos se convierten en verdaderos límites, que son: -el objetivo, que implica que un juez para aplicar la cosa juzgada debe observar que los objetos de los dos litigios sean exactamente iguales, y - el subjetivo: que las personas de ambos procesos hayan sido partes o intervinientes en el mismo.

9.1. Límite Objetivo De La Cosa Juzgada

Trata del objeto de la pretensión que está siendo procesada, por ejemplo en derecho penal sería la pretensión punitiva del Estado y el hecho del sindicado que afectó el bien jurídico, y en materia civil sería la relación jurídica o bien que se discute dentro del proceso. Así las cosas, si varía el objeto entonces el litigio se convierte en otro diferente y cambia la pretensión. Valga aclarar que el objeto se puede extender a aquellos asuntos sustanciales que son consecuencia o guardan una estrecha conexidad con el objeto estrictamente procesado. Igualmente, hay identidad de objeto cuando en el nuevo proceso se discute una parte o fracción de la totalidad del objeto anteriormente discutido. Ahora bien, en materia penal, este límite consiste en la prohibición de volver a juzgar por los mismos hechos mediante proceso penal, independiente de que cambie la imputación típica.

Es la causa petendi el segundo aspecto a observar dentro de los límites objetivos de la cosa juzgada. La causa petendi es la razón de hecho que se tiene para formular la pretensión, es el fundamento que uno tiene para obtener el objeto de la pretensión. Es importante diferenciar la causa petendi con el derecho invocado, pues ésta se refiere al hecho o circunstancia que genera derechos u obligaciones, y no a los mismos; además en Colombia los

fundamentos de derecho no obligan al juez. Acá el límite consiste en que no puede volver a pretenderse bajo la misma causa petendi el mismo objeto, y entonces se concluye que ambos elementos deben ser analizados conjuntamente, su observancia individual no satisface el límite de la cosa juzgada. En el proceso penal, la causa son los mismo hechos, en algunos casos se incluye la culpa, pero en general la causa no es un factor separado del objeto.

Otros autores, como Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, afirman que la causa petendi no tiene relevancia desde el punto de vista de la cosa juzgada, si se entiende a ésta sólo como las motivaciones para pretender, "los motivos tan solo juegan para la comprensión del caso juzgado. De esta manera esos motivos no despliegan ninguna eficacia en otros procesos que tengan por objeto otros derechos o relaciones jurídicas porque en ellos las cuestiones atinentes a los motivos o hechos o elementos axiológicos de la pretensión tienen que ser independientemente discutidos y demostrados..."en cambio sostienen en relación con los hechos: " Pero si en un nuevo proceso entre las mismas partes se presenta como relevante un hecho que fue objeto de decisión y de cosa juzgada, esta despliega su eficacia prejudicial en el nuevo proceso y debe ser asumida como corresponde a un caso juzgado"⁴¹

9.2. Límite Subjetivo De La Cosa Juzgada

Solo hay cosa juzgada cuando nos referimos a las mismas partes cobijadas por una sentencia. Con partes se hace alusión al accionante, al accionado y a los intervinientes. Lo importante, más que su identidad física, es su identidad jurídica. En principio, y por regla general, a una persona que no intervino en un proceso no lo puede vincular la sentencia y afectar, ya que en materia penal se da la excepción, pues la sentencia penal es vinculante frente a todas las personas. La razón de los efectos de erga omnes de la sentencia penal, es que por limites al poder punitivo del Estado y por consideraciones en materia de derechos fundamentales, la constitución y la ley no permiten que se le inicie un nuevo proceso penal frente a los mismos hechos a un sindicado.

Una vez vistos los requisitos que se exigen para predicar que existe cosa juzgada frente a un proceso, es necesario explicar por qué razones consideramos que existen unos verdaderos efectos de cosa juzgada en los casos plasmados en el artículo 57 CPP y otros adicionales, independiente de que se pueda o no hablar estrictamente del concepto de cosa juzgada. Lo que necesitamos es comparar si existe identidad de partes, objeto y causa petendi entre un proceso actual de responsabilidad civil por actividades peligrosas y una sentencia penal absolutoria previamente dictada.

En relación con los sujetos observamos que no existe una verdadera identidad, puesto que en el proceso penal el sujeto pretensor es el Estado, en cambio en el proceso civil es el

perjudicado. En segundo lugar, encontramos que no hay identidad de objeto, puesto que en el proceso penal se pretende imponer pena al sindicado y en el proceso civil se pretende la indemnización de perjuicios. Finalmente, encontramos que la causa petendi sí cumple el requisito pues son los mismos hechos los que dan lugar tanto al proceso penal como al civil.

Dado que no existe una identidad de objeto y sujetos entre un proceso penal y un proceso civil, es que algunos doctrinantes afirman que la cosa juzgada con efectos erga omnes, que es básicamente la que produce la sentencia penal, no corresponde al concepto de cosa juzgada y es más bien una ficción jurídica del legislador con el fin de salvaguardar un valor jurídico.

Evidentemente se debe aceptar que la cosa juzgada erga omnes que produce la sentencia penal no corresponde estrictamente a la estructura del concepto cosa juzgada. Sin embargo, estas consideraciones sobrepasan el objeto de estudio en el presente, trabajo dado que nosotros estamos es sosteniendo que se producen los efectos de la cosa juzgada erga omnes, independiente de que se acepte o no que se respeta el concepto de la cosa juzgada. Y el mejor argumento para afirmar que se producen esos efectos, es porque la ley y la Corte Suprema de Justicia dicen que sí se producen:

El artículo 57 del Código de Procedimiento Penal: "la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió, o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa".

Y dice la jurisprudencia "los efectos erga omnes de la cosa juzgada penal, pueden ser oponibles a cualquier persona, así no haya sido parte en el proceso penal, o como lo dice la doctrina, en tal evento la "autoridad de la cosa juzgada en lo criminal es absoluta sobre la civil; se impone sean cuales sean las partes, sean cuales sean el objeto y la causa de la demanda civil". José Fernando Ramírez Gómez ,25 de agosto de dos mil tres, Expediente No. C-7228.

Adicionalmente doctrinantes como Javier Tamayo Jaramillo y Hernando Devis Echandia, aceptan los efectos de cosa juzgada erga omnes en materia penal. Por otro lado, debemos aclarar que este trabajo no es analítico, sino que sólo pretende demostrar que efectivamente se dan esos efectos en la práctica, independiente de que muchos piensen que verdaderamente no estamos frente al concepto de la cosa juzgada, planteamientos importantes sin duda alguna, pero que su análisis profundo desbordaría el objeto de un trabajo descriptivo en su mayoría y no analítico, como el presente.

¿Por qué el legislador llamo esto "efectos de cosa juzgada erga omnes " a un evento que no obedece a la teoría de la cosa juzgada? Pudo ser por un mal manejo de conceptos; pero también es posible que interviniesen consideraciones políticas y jurídicas que buscaban limitar el poder punitivo del Estado y asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, y que encontraron que la forma que mas se ajustaba a sus pretensiones era los efectos que tenia la institución de la cosa juzgada. O también se pudo recurrir al argumento de la coherencia del sistema, ya que el legislador no consideraba deseable que a alguien se le diga que se defendió en legítima defensa, y al mismo tiempo resulte perjudicado pecuniariamente, lo que no es otra cosa que no permitir dos sentencias contradictorias en el sistema jurídico.

Ahora bien, frente a la problemática de si estas causales deben estar expresamente consagradas en la ley, nosotros sostenemos que esto dependerá de cual teoría de las anteriormente señaladas se acojan. Si se escoge una que sostenga que los efectos de cosa juzgada vienen de la voluntad de la ley, entonces sólo se puede llegar a los efectos de la cosa juzgada en la consagración taxativa; si se entiende que sus efectos vienen de la sentencia o del juez y que se trata más que todo de un problema sustancial entonces podremos defender el análisis en cada caso concreto de la cosa juzgada. Nuestra posición obedece a una combinación entre ambas, dado que sí reconocemos que los efectos de la cosa juzgada vienen determinados por el derecho, con regulación expresa de la ley; pero diferimos con esa visión formalista que sostiene que sólo pueden estar expresamente consagrados, y más bien proponemos que el juez pueda analizar el caso concreto y concluir si los presupuestos sustanciales de la cosa juzgada corresponden al sentido general, y no especial y taxativo, que le da la ley.

En palabras de Carnelutti: "precisamente porque la eficacia material de la cosa juzgada se resuelve en al declaración de certeza o en la constitución de una relación jurídica, y por ello se despliega fuera del proceso, dicha eficacia se manifiesta en relación a todos, no sólo en relación a las partes, en el sentido de que en relación a todos se fija la tal relación"⁴²

9.3. La Cosa Juzgada Y El Derecho De Defensa

Sosteníamos que la cosa juzgada consiste en impedir que los hechos o conductas debatidas y resueltas en un proceso judicial vuelvan a ser discutidos por un funcionario judicial en un juicio posterior. De conformidad con el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, para que una sentencia ejecutoriada tenga fuerza de cosa juzgada, se requiere que "el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa del anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes". Estos requisitos constituyen límites a la cosa juzgada, mientras los dos primeros elementos constituyen el límite objetivo, el último constituye el límite subjetivo. Es importante tener en cuenta que "mientras que la cosa

juzgada requiere identidad de partes, de objeto de causa, la cosa juzgada penal tiene valor erga omnes y puede ser oponible a cualquier persona, así no haya sido parte en el proceso penal"⁴³

Una vez hechas todas las anteriores consideraciones, es importante analizar si en aquellos casos en los cuales una sentencia penal absolutoria hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, se vulnera el debido proceso y en particular el derecho de defensa de aquellas personas que, sufriendo un perjuicio, se les niega la posibilidad de demandar por la vía civil, la indemnización de sus perjuicios por haberse proferido una sentencia penal absolutoria en un proceso penal en el cual no participaron.

Si bien podría pensarse que, por el hecho de la víctima no haber tenido la posibilidad de aportar pruebas o controvertir las aportadas en el proceso penal y habersele negado la posibilidad de alegar los hechos constitutivos de la responsabilidad civil se estaría vulnerado el derecho de defensa, nosotros creemos que tal vulneración no se presenta. Veamos.

Para hacer éste análisis es indispensable mencionar los casos en los cuales consideramos que una sentencia penal absolutoria hace tránsito a cosa juzgada erga omnes. Ellos son: que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, una causa extraña interrumpió el nexo causal entre el hecho y daño, el sindicado obró en legítima defensa o en estricto cumplimiento de un deber legal.

Para empezar cabe tener en cuenta que cuando el Estado promueve un proceso penal en contra de una persona, está obrando movido por el interés público, interés que comprende tanto al Estado como a todos los individuos del mismo, incluyendo obviamente a la víctima. En síntesis, el interés de la víctima se encuentra materializado en la actuación del Estado.

Ahora ubiquémonos en el escenario de una sentencia penal en la cual se absuelve al sindicado porque durante la parte instructiva del proceso quedó probado que el hecho no existió o que el sindicado no lo cometió. Recuérdese que como se mencionó anteriormente, en estos dos casos la sentencia penal hace tránsito a cosa juzgada erga omnes. Mal podría pensarse que se está vulnerando el derecho de defensa de la víctima cuando se le niega la posibilidad de demandar la indemnización de perjuicios por medio de un proceso civil. Se dice esto porque ya se acreditó de manera cierta y suficiente que un hecho, indispensable para la constitución de una responsabilidad civil, no existe. Dados estos presupuestos, consideramos que sería temeraria la pretensión dirigida a demostrar en un nuevo proceso que esos hechos si existieron, y más teniendo en cuenta que la causa de ambos procesos es la misma.

Ahora miremos el caso de la absolució obrar en legítima defensa. Nos detendremos a examinar nuevamente si se vulnera el derecho de defensa de la víctima al negársele la posibilidad de demandar por la vía civil la indemnización de perjuicios. El demandante civilmente sería aquella persona que dio lugar a que el sindicato desplegara una conducta típica en su contra. Consideramos que en este caso no se vulnera el derecho de defensa por varias razones. Primero, este es el supuesto en el cual se presenta un hecho exclusivo de la víctima, hecho que exonera de responsabilidad civil al demandado. Segundo, a la persona en contra de la cual se ejerció la legítima defensa tiene la posibilidad de participar en la fase probatoria del proceso penal, actividad probatoria que servirá para demostrar que su conducta no fue la que generó la acción típica del sindicato. Tercero, la demanda de indemnización de perjuicios por la vía civil atenta contra el principio de economía procesal por generar una actuación del aparato judicial tendiente a demostrar un hecho que ya fue probado en otro proceso.

Caso parecido es el de la causa extraña, pues esta es una causal eximente de responsabilidad, tanto en el ámbito civil como en el penal, debido a que en ambos casos se requiere que exista un nexo de causalidad entre la conducta desplegada por el agente y el resultado que genera el daño. Aclaremos que cuando hablamos de causa extraña en materia penal no nos estamos refiriendo a que el sindicato obró sin dolo o culpa sino a que el perjuicio "fue causado por un fenómeno diferente a la conducta del sindicato"⁴⁴. La causa, es decir, "el grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica"⁴⁵ es la misma en ambos procesos, y si ya se probó en un proceso penal que ésta no se constituyó, es innecesario y contrario al principio de economía procesal iniciar una actividad probatoria en un proceso de responsabilidad civil tendiente a probar su existencia.

Por último, analizaremos si se atenta contra el principio del debido proceso y en especial del derecho de defensa cuando una sentencia penal absolutoria hace tránsito a cosa juzgada en lo civil por haber considerado que el sindicato obró en estricto cumplimiento de un deber legal. La norma que consagra la causal de absolució penal por obrar en estricto cumplimiento de un deber legal lo que hace es faculta a un sujeto a actuar inclusive atentando contra bienes jurídicos de otras personas. Por lo tanto, "sería injusto y contradictorio que el propio ordenamiento jurídico le impusiese a los subordinados la obligación de cumplir órdenes superiores, y al propio tiempo, las sancionase al acatarlas"⁴⁶. En síntesis, no es posible que por un lado se le permita u obligue a un agente a actuar mientras que por el otro se le sanciona. Esto sería una evidente incoherencia del sistema jurídico. Y si se llegara a condenar civilmente a un sujeto que había sido absuelto penalmente por obrar en estricto cumplimiento de un deber legal, se estaría atentando de manera evidente, contra el principio de seguridad jurídica.

Ahora bien, y a manera de conclusión, no se olvide que esto es un problema netamente constitucional, donde está en juego el goce efectivo de los derechos fundamentales. Hay que partir de dos supuestos incontrovertibles: - el derecho de defensa es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 constitucional y -efectivamente existe una limitación de este derecho cuando se consagra los efectos de cosa juzgada penal erga omnes para las sentencias penales. Lo que no es tan obvio es: ¿se está vulnerado ilegítimamente el derecho de defensa?; y para responder a esta pregunta es necesario recurrir a un test de razonabilidad, para comprobar si efectivamente se está vulnerando el núcleo esencial del derecho, lo que en caso afirmativo sería inconstitucional. Estamos frente a lo que Ronald Dworkin denominó "una cuestión de principios", donde la respuesta a la constitucionalidad de tal intervención es determinar si es razonable e idóneo proteger valores como la seguridad jurídica y la coherencia del ordenamiento jurídico, en contraposición con un juicio estricto de proporcionalidad que determine si se violó el núcleo esencial del derecho fundamental de defensa.

10. AUSENCIA DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 600 DE 2000

Como se ha mencionado reiteradamente durante el desarrollo de este trabajo, la ley 906 de 2004 no incluyó el artículo 57 de la ley 600 de 2000. Este artículo establecía que "la acción civil no podrá iniciarse o proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicato no lo cometió o que obró en cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa".

Por lo tanto, si un juez penal absolvía de responsabilidad por una de esas cuatro causales, no podía un juez de otra jurisdicción entrar a analizar cualquier otro tipo de responsabilidad civil.

Es importante que la Corte Suprema de Justicia cree jurisprudencia con el fin de brindar seguridad jurídica a aquellas personas que acudan a la jurisdicción con el fin de solucionar sus conflictos de intereses. Y esto es importante porque sin existir normas jurídicas que regulen la materia, y sin una jurisprudencia al respecto, pueden presentarse decisiones judiciales en diferentes sentidos, atentando contra el mencionado principio de la seguridad jurídica.

Creemos que lo más importante para determinar si una sentencia penal absolutoria hace tránsito a cosa juzgada en lo civil, y especialmente cuando se trate de un proceso de responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, es saber cuáles son los elementos comunes a ambos tipos de responsabilidad. Por lo tanto, si el juez penal se manifiesta sobre uno de los aspectos o elementos comunes de ambas responsabilidades, no puede entrar el juez civil a controvertir la decisión. De esta manera se protege el principio de la seguridad jurídica, en tanto no existirán decisiones manifiestamente contrarias de diversos jueces quienes estarían juzgando un mismo hecho pero basados en normas sustantivas de diferente carácter.

Lo primero que hay que tener en cuenta es la manifestación del juez penal acerca de la ocurrencia del hecho, pues si él determina que éste no existió, es innecesario e inútil que un juez civil entre a hacer consideraciones al respecto. Esto atenta contra los principios del derecho procesal, y específicamente contra el de economía procesal. En síntesis, la decisión de un juez penal acerca de la existencia del hecho hace tránsito a cosa juzgada en lo civil, esto porque en ambos tipos de responsabilidades, como es obvio, se requiere la ocurrencia de un hecho a partir del cual se configura la responsabilidad.

Consideramos que la acción como elemento de la responsabilidad penal, puede equipararse

con el hecho de la responsabilidad civil por actividades peligrosas. Hay que hacer una aclaración, y es que estamos hablando de un hecho que puede generar tanto responsabilidad penal como civil, y que por lo tanto requiere un actuar del agente o causante del daño. Así las cosas, si un juez penal se manifiesta acerca de la comisión del hecho, bien sea que diga que fue cometido o no por el sindicado, esta decisión hace tránsito a cosa juzgada en lo civil, por versar sobre un elemento común a la responsabilidad penal y a la responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas.

Por otro lado, la manifestación de un juez penal sobre la tipicidad de una acción no hace tránsito a cosa juzgada en lo civil. Esto se debe básicamente a que hay unas conductas que no están tipificadas en el Código Penal como delitos pero que pueden generar responsabilidad civil con base en la institución de las actividades peligrosas. Tal es el caso de un daño en un bien ajeno causado de manera culposa durante el ejercicio de una actividad peligrosa.

Recuérdese que el delito de daño en bien ajeno sólo se configura si ha sido causado de manera dolosa. Lo anterior respecto de la tipicidad objetiva. Es decir, estamos hablando de un caso en el cual el sindicado es absuelto penalmente porque su conducta no es típica.

Tampoco hace tránsito a cosa juzgada en lo civil, aquella decisión del juez penal respecto de la tipicidad subjetiva, es decir, sobre el dolo o la culpa. Esto es así porque como se mencionó anteriormente, en la responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas rige un sistema de responsabilidad objetiva, donde el dolo y la culpa no son elementos constitutivos de responsabilidad.

Ya en sede de antijuridicidad, hay que tener en cuenta las consideraciones que haga el juez penal sobre las diferentes causales de justificación. Se tendrá que hacer un análisis en cada caso en concreto para establecer si la absolución penal por tener como probada una causal de justificación determinada, hace tránsito a cosa juzgada erga omnes desde el punto de vista civil. Una vez que el artículo 57 CPP desaparece, dejando sin efectos la jurisprudencia que había creado la Corte Suprema de Justicia alrededor de su taxatividad, aparece una nueva oportunidad para que los jueces civiles tengan en sus manos la protección de la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico adoptando la teoría de la unidad del hecho ilícito. Deberá llegarse a la conclusión de que una causal de justificación existe precisamente porque el ordenamiento jurídico está permitiendo una conducta de forma expresa, la permite y la dota de licitud con el fin de proteger bienes jurídicos protegidos por el derecho; si la conducta es tutelada por una norma jurídica entonces es contradictorio que el desarrollo de la misma pueda producir efectos indeseados para el agente. Claro está, los jueces civiles deberá también proteger a terceros que se vean afectados por los efectos que puedan traer las realizaciones de conductas típicas penalmente pero lícitas igualmente.

Nos parece que el juez civil deberá contraponer principios: por un lado la coherencia y unidad del sistema jurídico y por el otro la equidad y la solidaridad social. La anterior ponderación se explica frente a aquellos casos en que si bien es claro que el actuar del sindicato es lícito, también es evidente que, imponerle a terceros ajenos al hecho la carga de soportar los efectos indeseados de la conducta es injusto. Para que tal valoración no quede expuesta a las circunstancias de cada caso concreto, y se genere inseguridad jurídica, es necesario que una ley o la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se pronuncien sobre el tema.

Ahora bien, no habrá problema alguno para que los jueces civiles le otorguen efectos de cosa juzgada erga omnes a las sentencias penales absolutorias que declaren que la conducta no se realizó o que el sindicato no cometió el hecho; estas decisiones prueban requisitos esenciales para ambas responsabilidades como lo son: la existencia del daño y la imputación física del hecho. Así que siempre que se prueben en el proceso penal habrá efectos directos del fallo penal sobre el proceso civil.

El análisis del juez penal respecto de la imputabilidad del sindicato en sede de culpabilidad, no hace tránsito a cosa juzgada en lo civil como se mencionó anteriormente en este trabajo. Esto se debe, bien a que al inimputable penalmente, en sede de responsabilidad civil se le juzga el hecho objetivo de haber ejercido el derecho de dominio contra derecho ajeno (posición de Javier Tamayo Jaramillo); o bien a que, como dice Gilberto Martínez Rave, si los inimputables pueden ser declarados penalmente responsables a título de medida de seguridad, consecuentemente pueden ser declarados civilmente responsables por los daños que cometan.

En síntesis, un proceso de responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas puede iniciarse o proseguirse así la sentencia penal declare que el sindicato es inimputable.

Después de las todas las consideraciones hechas durante este trabajo, creemos que lo correcto sería que si hay una absolución penal por una causa extraña, es decir, que existe un hecho imprevisible e irresistible que impide la configuración de un nexo causal, debe haber cosa juzgada erga omnes. Pero si en cambio la absolución penal se debe a una ausencia de culpa, el juez civil puede entrar a analizar si se configuran todos los elementos de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, esto es, el hecho, el daño y el nexo de causalidad. En cambio a la hora de la absolución penal por una causal de justificación, el juez civil debe acoger la teoría de la unidad del acto ilícito, teniendo como cosa juzgada aquellas conductas que no fueron declaradas no contrarias a derecho en el juicio penal; pero también tendrá que tener en cuenta la protección a terceros de buena fe que no intervinieron en el hecho.

BIBLIOGRAFÍA

GONZALEZ NAVARO, Antonio Luis. La Responsabilidad Civil en los Sistemas Penales (Mixto y Acusatorio). Segunda Edición. Editorial Leyer. Bogota

ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. Derecho Civil. Segunda Edición. Editorial Zamorano y Caperan. Santiago-Chile. 1936.

BARRERA TAPIAS, Carlos Darío y SANTOS BALLESTEROS, Jorge. El daño justificado. Seminarios 2. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Jurídicas.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-048 del 1 de febrero de 1999. MP. José Gregorio Hernández Galindo.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de agosto de 2003. Expediente 7346 .MP. José Fernando Ramírez Gómez.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de febrero de 2005. Expediente 00215. MP. Pedro Octavio Munar Cadena

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de marzo de 2004. Expediente 7622. MP. Manuel Isidro Ardua Velásquez

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de octubre de 1999. Expediente 5253. MP. Manuel Isidro Ardua Velásquez

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 25 de agosto de 2003. Expediente 7228. MP. José Fernando Ramírez Gómez.

DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de derecho procesal. Tomo I. Teoría general del proceso. Editorial ABC. Sexta edición. Bogotá 1978.

LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando. Derecho Procesal Penal. Editorial TEMIS. Bogotá. 1982. Pag. 29

MARTÍNEZ RAVE, Gilberto y MARTÍNEZ TAMAYO, Catalina. Responsabilidad Civil Extracontractual. Undécima Edición. Editorial Temis. Bogotá- Colombia. 2003.

NÚÑEZ, Ricardo C. Derecho Penal Argentino. Tomo I .Parte general, Ed Bibliográfica Argentina. 1964.

PÉREZ VIVES, Alvaro. Teoría general de las obligaciones. Volumen II. Parte Primera De las fuentes de las obligaciones (Continuación) Tercera Edición. Editorial TEMIS BOGOTÁ, D. E. 1968.

REYES ECHANDIA, Alfonso, Derecho Penal, parte general, Ed. Temis, Bogotá, 1987.

TAMAYO JARAMILLO, Javier. De La Responsabilidad Civil. Tomos I, II y III. Editorial Temis. Bogotá-Colombia. 1999.

TAMAYO JARAMILLO, Javier. La Indemnización de Perjuicios en el Proceso Penal. Editorial LEGIS. Segunda edición. Bogotá 2003. p 175

TRIGO REPRESAS Félix A. y LÓPEZ MESA, Marcelo J. Tratado de la responsabilidad civil. Tomo I. El derecho de daños en la actualidad: Teoría y Práctica. Editorial Ley.

VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil. De las obligaciones, 8§ Ed. Temis, Bogotá, 1990. tomo III.

VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho Penal. Parte general. Editorial TEMIS. Tercera edición. Santa Fe de Bogotá. 1997. Página 774.

ANEXOS

Sentencia C-899/03

Referencia: expediente D-4562

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 38 (parcial), 42, 48 (parcial), 52 (parcial), 55, 57 (parcial) de la Ley 600 de 2000, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

Actor: Martín Bermúdez Muñoz

Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

Bogotá D.C., siete (7) de octubre de dos mil tres (2003)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Clara Inés Vargas Hernández - quien la preside -, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes,

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Martín Bermúdez Muñoz, actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en los artículos 40-6, y 95-7, de la Constitución Política, demandó la inexecutable parcial de los artículos 38 (parcial), 42, 48 (parcial), 52 (parcial), 55, 57 (parcial) de la Ley 600 de 2000, por la cual se expide el nuevo Código de Procedimiento Penal, por considerar que contraría varias disposiciones constitucionales.

II. NORMAS DEMANDADAS

A continuación se transcriben las normas demandadas y se subrayan los apartes que se consideran inconstitucionales:

Ley 600 de 2000

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

Artículo 38. Extinción. La acción penal se extingue por muerte, desistimiento, amnistía, prescripción, oblación, conciliación, indemnización integral y en los demás casos

contemplados por la ley.

Artículo 42. Indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.

Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección.

La extinción de la acción a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse en otro proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya proferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación por este motivo, dentro de los cinco (5) años anteriores. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan proferido por aplicación de este artículo.

La reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado.

Artículo 48. Requisitos. Quien pretenda constituirse en parte civil dentro del proceso penal, si no fuere abogado titulado, otorgará poder para el efecto.

La demanda de constitución de parte civil deberá contener:

El nombre y domicilio del perjudicado con la conducta punible.

El nombre y domicilio del presunto responsable, si lo conociere.

El nombre y domicilio de los representantes o apoderados de los sujetos procesales, si no pueden comparecer o no comparecen por sí mismas.

La manifestación, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible.

Los hechos en virtud de los cuales se hubieren producido los daños y perjuicios cuya indemnización se reclama.

Los daños y perjuicios de orden material y moral que se le hubieren causado, la cuantía en que se estima la indemnización de los mismos y las medidas que deban tomarse para el

restablecimiento del derecho, cuando fuere posible.

Los fundamentos jurídicos en que se basen las pretensiones formuladas.

Las pruebas que se pretendan hacer valer sobre el monto de los daños, cuantía de la indemnización y relación con los presuntos perjudicados, cuando fuere posible.

Los anexos que acrediten la representación judicial, si fuere el caso. Igualmente deberá acompañarse la prueba de la representación de las personas jurídicas, cuando ello sea necesario. Si quien pretende constituirse en parte civil fuere un heredero de la persona perjudicada, deberá acompañar a la demanda la prueba que demuestre su calidad de tal.

Si fueren varias las personas perjudicadas, podrán constituirse en parte civil separada o conjuntamente.

Cuando se hubiere conferido poder en forma legal, el abogado podrá conocer el proceso siempre que acredite sumariamente la calidad de perjudicado del poderdante, obligándose a cumplir con la reserva exigida.

Cuando el demandado fuere persona distinta del sindicado, en la demanda deberá indicarse el lugar donde aquél o su representante recibirán notificaciones personales. En su defecto, deberá afirmar bajo juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, que desconoce su domicilio.

La providencia admisorio de la demanda se notificará personalmente al demandado o a su representante legal y se le hará entrega de una copia de la demanda y de sus anexos. No habiendo sido posible la notificación personal, se surtirá el emplazamiento respectivo de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 52. Rechazo de la demanda. La demanda será rechazada cuando esté acreditado que se ha promovido independientemente la acción civil por el mismo demandante, que se ha hecho efectivo el pago de los perjuicios, que se ha producido la reparación del daño o que quien la promueve no es el perjudicado directo.

También procede el rechazo cuando la demanda se dirija contra el tercero civilmente responsable y la acción civil se encuentre prescrita.

En cualquier momento del proceso, en que se acredite cualquiera de las situaciones descritas, mediante providencia interlocutoria se dará por terminada la actuación civil dentro del proceso penal.

Artículo 55. Extinción de la acción civil. La acción civil proveniente de la conducta punible se extingue en todo o en parte, por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil.

Artículo 57. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá

iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.

III. LA DEMANDA

El actor manifiesta que su demanda se encuentra fundamentada en la Sentencia C-228 de 2002 de la Corte Constitucional que reconoció que la parte civil en el proceso penal no sólo persigue la indemnización de perjuicios sino que también busca garantizar su derecho a obtener la verdad y a que se imponga la sanción correspondiente.

En efecto, para el demandante, aceptar que la parte civil en el proceso penal sólo busca la indemnización de los perjuicios implica quebrantar las siguientes normas constitucionales: el artículo 1º, que consagra el principio de la dignidad humana, por cuanto se reduce la protección de la víctima a una mera cuestión económica; el artículo 2º que garantiza el goce efectivo de los derechos, así como la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; el derecho a acceder a la justicia señalado en el artículo 229 del mismo estatuto, y los artículos 15 y 21, que garantizan el derecho al buen nombre y a la honra, en la medida en que las víctimas no se les da la oportunidad de controvertir la versión de los hechos que los perjudican.

Del mismo modo, dicha posición atenta contra convenios y tratados internacionales que hacen parte del bloque constitucional, como es el caso del artículo 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder (Asamblea General de las Naciones Unidas-resolución 40134, 29 de Noviembre de 1985), y por último, el artículo 32 del Protocolo Adicional 1º a los Convenios de Ginebra.

Tomando como base que la indemnización de los perjuicios no puede ser el único objetivo de la acción civil en el proceso penal, porque así lo reconoce el ordenamiento constitucional, para el actor es claro que la expresión “indemnización integral”, contenida en el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal es inconstitucional porque establece que la acción penal puede extinguirse con el solo pago de la indemnización que se debe. Es decir, si se acepta que la parte civil en el proceso penal busca la realización de otros objetivos: encontrar la verdad de los hechos y sancionar al responsable, es evidente la imposibilidad de que la acción penal se extinga por el simple pago de la indemnización. Ello satisfaría sólo uno de los fines de la demanda, dejando por fuera los que acaban de mencionarse.

Tal situación se agrava –añade- por el hecho de que la indemnización integral puede decretarse sin el consentimiento de la víctima “en la medida en que puede ser dispuesta cuando el responsable paga el valor de los perjuicios determinados pericialmente”, lo que se convierte en una razón más para considerar que es una violación al derecho que tiene la

víctima de que se haga justicia, derecho que “queda sólo protegido cuando el juez penal, en sentencia, se pronuncia sobre la responsabilidad penal del sindicado”.

En lo que respecta al 42, el demandante añade lo siguiente: al permitir que la acción penal se extinga para los delitos mencionados cuando se paga la indemnización, se está quebrantando el derecho a la igualdad consagrado en la Carta, toda vez que se sanciona penalmente a los que no pueden pagar la suma correspondiente, mientras a los que pueden pagarla, se les da la oportunidad de evitar dicha pena.

Esta discriminación no está justificada pues si lo que se buscaba con ella era la extinción de la pena con el pago, entonces la medida más razonable y menos discriminatoria era la despenalización de las conductas a las que se refiere. El anterior argumento tiene sentido si se tiene en cuenta que la razón para decretar que una conducta merece una sanción penal es la consideración de que se trata de un daño a la sociedad y no sólo a la víctima, daño que no se estima reparado con el pago de la indemnización al individuo perjudicado, sino con el cumplimiento de la sanción penal. En este sentido, se estaría fijando una conducta como delito para aquellos que no pagan- ya sea porque no desean hacerlo, ya sea porque no pueden hacerlo- mientras que no se le daría carácter de delito a esa misma conducta para aquellos que pagan la suma requerida.

De esta forma surge la siguiente pregunta: ¿Qué se está sancionado penalmente, el no pago de la indemnización del perjuicio causado o la conducta? En cuanto a este interrogante, recuerda el actor que la Carta Política, en su artículo 28, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 77, prohíben la detención, prisión o arresto por deudas. Sostiene que, si bien la Corte ha dicho que la prohibición constitucional del artículo 28 “no abarca la posibilidad de convertir una multa-como sanción punitiva del Estado- en arrestoSentencia C-041/94, M.P. Eduardo Cifuentes, este caso es diferente pues no está transformando la multa en arresto sino que “se estaría convirtiendo una obligación civil- la de indemnizar integralmente la víctima- en pena privativa de la libertad, lo cual es contrario a la prohibición de arresto por deudas establecida por la Constitución Nacional”.

El artículo 42 de la citada ley viola además el artículo 29 de la Norma Fundamental, según dice el actor, pues se incita a que el sindicado pague la multa con el único interés de extinguir la acción penal que se adelanta en su contra, incluso si no se considera culpable, lo que impide que el sindicado ejerza su derecho a defenderse.

Así mismo, el demandante hace énfasis sobre el aparte del referido artículo del Código de Procedimiento Penal que permite la extinción de la acción penal en los delitos de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, incluso cuando la víctima no ha aceptado el monto a pagar. En su concepto, esto constituye una violación aberrante del artículo 2º de la Carta que asegura la convivencia pacífica y la prevalencia de un orden justo; así como de la protección constitucional a la vida, honra y bienes de los ciudadanos, ya que se permite que los individuos se expongan a tratos crueles, inhumanos y degradantes que pueden tener como única sanción el pago de una multa que tal vez ni la misma víctima considera ajustada.

Por otro lado, en referencia a los artículos 48, 52 y 55 de la Ley 600 de 2000, el actor afirma que, según lo expuesto en la Sentencia C-228/02, resulta inconstitucional establecer como requisito para interponer la demanda que se proponga la estimación de los perjuicios, así como disponer que si la víctima persiguió y obtuvo su pago en un proceso civil o si obtuvo la satisfacción de su pretensión indemnizatoria de cualquier manera, no puede incoar la demanda de parte civil en el proceso penal o no puede permanecer como parte dentro del proceso. En otros términos, el que la víctima ingrese al proceso como sujeto procesal y permanezca como tal no puede depender de que incoe una pretensión indemnizatoria, toda vez que, bajo la nueva concepción de la parte civil en el proceso penal, la víctima también tiene como propósito al involucrarse al proceso penal, el buscar la verdad y el que se sancione al responsable.

Además, negar la participación de la víctima como parte civil en el proceso penal, cuando ésta haya decidido acudir a la jurisdicción civil o a la contencioso administrativo a reclamar perjuicios por el hecho punible, va en contra del derecho al debido proceso si se tiene en cuenta que hay decisiones en el proceso penal que pueden afectar el proceso civil, por lo cual la víctima debería tener derecho a controvertir lo que sucede en el proceso penal. Anteriormente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado daban a escoger al demandante una de dos opciones: el constituirse en el proceso penal como parte civil, o el acudir al proceso civil o contencioso administrativo para reclamar los perjuicios causados. Desde la promulgación de la sentencia C-228/02 se estableció que para que la víctima pueda controvertir los argumentos o hechos que puedan obstaculizar la satisfacción de su indemnización, haciendo así efectivo el debido proceso, ésta podrá ejercer sus derechos patrimoniales en el proceso civil, y al mismo tiempo en el penal, con el objetivo de esclarecer la verdad, buscar la sanción del culpable y controvertir los hechos que le pueden perjudicar en el proceso civil.

Finalmente, en referencia al artículo 57 de la ley aquí impugnada, el actor esgrime los siguientes argumentos para que se declare su inconstitucionalidad. Considera que la cosa juzgada debe ser declarada en las materias sobre las cuales los pronunciamientos del juez civil y del juez penal no pueden ser contradictorios. Así, se debe establecer cosa juzgada en la decisión del juez penal, por ejemplo, en lo referente a la causalidad pues no puede darse lugar a las contradicciones en la ocurrencia del hecho y su autor.

Sin embargo, no es procedente que el legislador establezca “circunstancias que atañen exclusivamente a la conducta del sindicado y por lo tanto sólo pueden tener efectos respecto a la sanción penal, como la consagración del hecho como delito (falta de tipicidad) o la falta de la culpabilidad exigida en el tipo penal, pueden impedir que la víctima logre la indemnización de perjuicios provenientes del mismo hecho”. En este orden de ideas, el artículo 57 es inconstitucional pues limita el acceso a la administración de justicia consagrado en nuestra Constitución al disponer que la absolución del sindicado por cumplimiento de un deber legal o por actuar en legítima defensa impide que se prosiga a la acción civil con el objetivo de que se paguen los daños causados. Si bien se podría argumentar que habrá ocasiones en que quien obre en legítima defensa sea exonerado de

pagar perjuicio civiles por considerar que los daños fueron causados por causa exclusiva de la víctima, habrá ocasiones en que no sucederá de esta forma, por ejemplo, cuando se trate de la legítima defensa subjetiva. En este último caso, la víctima tiene derecho a acudir a la justicia para que se le indemnicen los daños causados, pero por disposición del aparte demandado, no podrá gozarse de este derecho.

Lo mismo sucede cuando se absuelve al sindicado por ser su conducta el resultado del desarrollo de un deber legal. En esa circunstancia, es razonable que no se considere penalmente responsable al sindicado, sin embargo, nada justifica el que no se indemnice a la víctima pues de igual manera se le habría causado un perjuicio que ha de ser subsanado a pesar de haber sido causado en desarrollo de un deber legal; así lo dispone el artículo 90 de la Constitución. En suma, la expresión acusada impide que la víctima tenga acceso a la justicia (artículo 229 de la C.P) para que se le pague por los perjuicios a los cuales tiene derecho que se le indemnice.

IV. INTERVENCIONES

1. Ministerio de Interior y de Justicia

Dentro del término correspondiente, intervino la Doctora Ana Lucía Gutiérrez Guingue, actuando en representación del Ministerio de la referencia, para solicitar a la Corte que declare la constitucionalidad de las normas demandadas.

La nombrada funcionaria comienza su intervención recordando que en desarrollo del artículo 250 Superior, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 21, le da la facultad al funcionario judicial de adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible haciendo posible la ejecución de mecanismos que protejan el derecho de la víctima de que se indemnicen los perjuicios ocasionados por el delito, según lo dispone el artículo mencionado del Estatuto Superior. Uno de estos mecanismos es “la indemnización integral (...), que una vez definido por el funcionario judicial, motiva la extinción de la acción penal adelantada contra el infractor llamado a indemnizar”. No obstante, ésta opera sólo frente algunas conductas específicas que el legislador considera que pueden ser valoradas económicamente.

Así mismo, coincide con la doctrina en la consideración de que la terminación anticipada del proceso por la indemnización integral es una institución que intenta descongestionar los despachos judiciales y, ante todo, hacer efectivo el principio del restablecimiento del derecho de donde se deriva que el proceso no debe procurar únicamente la definición de un responsable penal sino que también cesen los efectos creados por la conducta delictiva. Además, con la terminación del proceso por la indemnización se adoptaron los postulados de la criminología crítica que intenta desjudicializar ciertos conflictos sociales reduciendo su solución a un contenido estrictamente económico.

Por otro lado, la interviniente señala su desacuerdo con el argumento de “que el derecho a la justicia se agota, como esgrime el accionante, con la imposición de medidas privativas de la

libertad” pues, en su sentir, si es ineludible que el proceso culmine con una sentencia condenatoria entonces se le estaría otorgando una finalidad meramente retributiva.

Conjuntamente, hace una revisión de las características de la pena, entre las cuales menciona la razonabilidad, proporcionalidad y la necesidad. De acuerdo con esta última característica, la sanción penal que se impone debe ser una que, intentando evitar nuevos delitos, sea además indispensable para concretar el programa político criminal que el legislador ha establecido, así como la menos dañina para el condenado. Así, sólo merecen la pena aquellos que han realizado una conducta que realmente amenace la tranquilidad y seguridad de la sociedad.

En este sentido, la aprobación de que se extinga la pena por la indemnización de los perjuicios causados por ciertas conductas, puede ser entendida como la aceptación del legislador, teniendo en cuenta la levedad de la infracción, del escenario en que el pago a la víctima satisface y protege el derecho de la sociedad a que se persiga su seguridad y tranquilidad y a que se haga justicia. Paralelamente, cumple el legislador el fin de acelerar la respuesta judicial y evitar la congestión de los despachos haciendo efectivo el principio de la eficacia en la justicia. De esta manera, la extinción de la pena por la indemnización integral se une al grupo de figuras que producen la terminación anormal del proceso conformado, entre otras, por la oblación, la compensación, la conciliación y la retracción .

Al mismo tiempo, la interviniente sostiene que “el incremento de bienes jurídicos objetos de sanción desde la órbita penal (...) necesariamente debe tender a un proceso, igualmente generalizado, de despenalización de ciertas conductas, y de búsqueda de mecanismos alternativos de solución de aquellos conflictos cuya naturaleza no requiera del desgaste del ente judicial”. De lo anterior es claro que es válido y necesario el requisito de que no se haya iniciado proceso civil para la incoación del proceso penal toda vez que busca permitir el cumplimiento de un deber que la Constitución impone al ciudadano, a saber, el de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto acudir a la justicia por dos vías diferentes siendo un mismo hecho y entre las mismas partes, sugiere un desgaste desleal de la justicia”.

Por otra parte, sostiene que, a tenor de lo dispuesto por la Corte en la Sentencia C-1063/00, es evidente que el alegato que pretende desestimar el pago de la indemnización como medio para dar por terminado el proceso no es de recibo toda vez que “no puede (...) predicarse el desconocimiento de un derecho de stirpe constitucional cuando el mismo se encuentra precedido de una decisión voluntaria y, en todo caso, dirigida al mismo fin: el resarcimiento de perjuicios”.

Finalmente, en referencia a los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria, la funcionaria afirma que “la concurrencia de tales eximentes da lugar a la extinción de la acción civil, atendiendo a la no exigibilidad de conducta diversa en una circunstancia particular. Allí, el legislador privilegia la evitación de un riesgo de mayor entidad, exonerando de responsabilidad penal y, de contera, civil, a quien, por ejemplo, ha asumido voluntariamente la protección de un bien jurídico de mayor jerarquía”. Para darse a

entender con mayor claridad, aporta como ilustración la circunstancia en que se causa un perjuicio económico- como el rompimiento de algunos objetos- por ingresar a la fuerza a una casa cerrada con el único objeto de salvar la vida de quienes se encuentran encerrados en el recinto incendiado. De aceptarse el argumento del actor, sería válida la demanda entablada para que se indemnizen los perjuicios causados; situación contraria a la lógica jurídica y a la exigencia constitucional de vigencia de un orden justo.

2. Fiscalía General de la Nación

Dentro del término correspondiente, intervino el Doctor Gustavo Morales Marín, actuando en representación de la institución ya referida, para solicitar a la Corte que declare la exequibilidad de los artículos demandados.

El funcionario advierte, en primer término, que la sentencia en la que se basa la demanda no es la C-228/00 como lo expuso el actor, sino la C-228/02, donde efectivamente la Corte se pronunció sobre el papel de la parte civil en el proceso penal. Igualmente, afirma que el actor se equivoca al sostener que “con la Sentencia C-228 operó la inconstitucionalidad per se de los artículos acusados” pues hasta el momento de la demanda, los artículos no habían sido objeto de fallo constitucional.

Manifiesta el interviniente que comparte la opinión del demandante en cuanto a que el nuevo papel que juega la parte civil en el proceso penal no es únicamente el de buscar la indemnización de perjuicios sino además buscar que se encuentre un responsable y se haga honor a la verdad. Sin embargo, de la anterior apreciación no se deduce, para el funcionario, la inconstitucionalidad de la normas imputadas. De hecho, considera que ellas, “lejos de vulnerar el ordenamiento constitucional lo realiza”, entre otras cosas, al desarrollar el precepto constitucional de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (artículo 2º), de la dignidad humana (artículo 1º), el derecho al buen nombre y la honra (artículos 15 y 21), a la libertad y el debido proceso de los procesados (artículos 28 y 29), al monopolio estatal de la acción penal (artículo 228) y al acceso de la administración de justicia (artículo 229).

En referencia al argumento que sostiene que no es válida la extinción de la acción penal por la indemnización, la Fiscalía afirma que esa configuración se hizo en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 150 Superior para que el legislador establezca la política criminal que estime conveniente. Recuerda que la obligación del Estado de investigar y juzgar una conducta delictiva tiene sus límites y por eso se configuran presupuestos en que dicha obligación se da por terminada. En el caso en que nos atañe, el legislador dispuso que en ciertas circunstancias, las señaladas en el artículo 42 también demandado, se permite la indemnización integral, y que de hacerse ésta efectiva, se extinguirá la acción penal. Esto simplemente corresponde a la concepción del legislador de que dichas conductas afectan un bien jurídico menor y, por tanto, puede considerarse resarcido el daño con el pago a la víctima.

Por otra parte, considera que “el legislador previó a efectos de realizar [el principio] (...) de

la economía procesal, que la acción civil que debe adelantarse contra el responsable de un hecho delictuoso en busca del pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, se pueda ejercer dentro o fuera del proceso penal. Sin embargo esta circunstancia fue subsanada por el artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, al señalar expresamente que se puede intentar la acción civil independientemente ante la manifestación civil de la jurisdicción ordinaria o dentro del proceso penal a voluntad del perjudicado”.

Finalmente, sostiene que si se observa el artículo 57 acusado a la luz del artículo 32 del Código Penal, se concluye que no hay violación al derecho de la víctima de acceder a la justicia para que se reparen los daños que se le han causado, pues, como lo demuestra la doctrina penal, es posible que la cosa juzgada finalmente no se dé. Así, acogiendo las palabras del penalista Gilberto Martínez Ravé, “si el juez penal absuelve por (...) una de las doce causas de ausencia de responsabilidad penal, es viable la acción civil por cuanto no estaría contemplada en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal. Las causas de ausencia de responsabilidad contempladas en el nuevo Código Penal en su artículo 32 (...) son doce; por tanto, si se absuelve por una de las otras diez causales no se da la cosa juzgada para efectos civiles. Por tanto, cuando la sentencia absolutoria penal se fundamenta (...) porque el autor procedió bajo un estado de necesidad (...) es posible que el perjudicado acuda a la rama civil (...) para buscar que se le reconozca la indemnización por parte del autor del hecho”.

3. Intervención Ciudadana

Dentro del término procesal establecido, intervino en el proceso el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, representado por la abogada Ángela María Buitrago Ruiz, quien emitió su concepto en relación con algunas de las normas acusadas.

La interviniente coincide con el actor en que se ha generado un cambio de la concepción de la parte civil en el proceso penal que resulta en la aceptación de que la parte civil no sólo busca el resarcimiento económico de los daños causados, sino que también busca que se encuentra la verdad y se haga justicia con la sanción del culpable. En este sentido considera que debe prosperar la demanda contra el artículo 52 ya que no se puede considerar viable que se rechace la demanda por el hecho de que no se haga la demostración de la indemnización de perjuicios.

En cuanto a los artículos 38, 42 y 55, considera que el legislador está en la facultad de aplicar los criterios de oportunidad que gobiernan aspectos procesales para disponer los modos de extinción, pero aclara que estos modos “deben ser con el consentimiento y anuencia de la víctima”.

Por último, sostiene que no se debe declarar inconstitucional el artículo 48 ya que “la acreditación de la estimación de los perjuicios y petición de medidas (...) es simplemente un requisito formal” y el juramento que se requiere no es, en su sentir, una atentado contra el derecho de las víctimas.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 242-2, y 278-5 de la Constitución Política, el señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, presentó a esta Corporación su concepto en relación a la demanda, en el cual solicita a la Corte declarar la exequibilidad de las normas demandadas, algunas de las cuales deberán condicionarse.

En primer lugar, el Procurador llama la atención sobre una posible cosa juzgada constitucional respecto de normas del antiguo Código de Procedimiento Penal que ya habían sido declaradas exequibles y guardaban una similitud material importante con las que ahora son objeto de acusación. No obstante, concluye que tal cosa juzgada material no existe, pues los cargos analizados en la revisión del antiguo Código son diferentes a los que plantea el actual demandante. Al anterior argumento añade la consideración del cambio sufrido por la concepción de los derechos de las víctimas en el proceso penal a partir de la Sentencia C-228/02.

En su intervención, el Procurador hace un recuento de la jurisprudencia de la Corte que habla del tema. Recuerda que en las primeras sentencias de esta Corporación se resaltaba la “naturaleza esencialmente indemnizatoria de la acción civil” y se señalaba que “la búsqueda de la verdad y la justicia no es propia de la parte civil”. Sin embargo, con la Sentencia C-228/02, la Corte corrigió su posición “al señalar que en virtud del principio de dignidad humana y a los deberes del Estado consagrados en el artículo 2º de la Carta, no se debe reducir el interés de la parte civil a la indemnización de los perjuicios, por cuanto la obligación estatal de procurar el restablecimiento del derecho (...) lleva incito el correlativo derecho de los perjudicados a conocer la verdad de los hechos y obtener”.

Así mismo, hace una breve reseña resaltando los artículos constitucionales que instauran derechos y deberes relativos al tema que aquí nos atañe. En su concepto, el artículo 2º del Estatuto Constitucional, al establecer el principio de la participación de las personas en las decisiones que los afectan, empieza a reconocer el deber del Estado de procurar el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios ocasionados por conducta punible. De manera concreta, el artículo 250 Superior asigna a la Fiscalía la tarea de cumplir el recién mencionado deber. Teniendo en cuenta lo anterior, la Carta faculta al legislador para que fije “los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa” en su artículo 150 (recién modificado por el Acto Legislativo 03/02).

Fue bajo este marco y con estos límites que el legislador determinó dos mecanismos de intervención en el proceso penal para aquellos perjudicados por la conducta delictiva. El primero de ellos, es el derecho de la víctima a “que se le brinde información sobre la actuación adelantada, a hacer peticiones específicas y a aportar pruebas encaminadas a demostrar la verdad y la sanción de los responsables”, derecho que también es deber según el artículo 95 numeral 7 de nuestra Carta Política. El segundo de los mecanismos, reconoce además el derecho a obtener la reparación de los daños causados; este recurso es

precisamente la constitución como parte civil en el proceso penal, que además de las anteriores facultades, le permite a la víctima impugnar, contradecir y tener acceso directo al expediente. Mas, como se señaló anteriormente, el derecho a la reparación de los daños causados incluye el derecho a conocer las razones del perjuicio y a reclamar la sanción del responsable, ya que, “no brindar esta garantía, afectaría la confianza en el Estado y sus instituciones y crearía un clima de inconformidad eventualmente generador de violencia”.

Ahora bien, es necesario destacar que los perjudicados (entre los cuales se encuentra la sociedad al tratarse de una conducta penal) tienen garantizado su derecho de saber la verdad y de sanción del responsable aún sin constituirse como parte civil al ser representada por el Ministerio Público y al poder gozar del derecho de petición de información. No obstante, esta garantía no es suficiente para aquellos que han sufrido un perjuicio directo y concreto y que, por tanto, deben poder acceder al proceso “en igualdad de condiciones frente a los demás sujetos procesales y no sometidos a los resultados que de la actuación de éstos se obtengan, aunque no concurran en su intervención una pretensión indemnizatoria”. Por esta razón se les permite intervenir como parte civil pues de esta forma se les autoriza a “tener acceso directo al expediente, conocer las pruebas que se recauden en el curso de la investigación y controvertirlas oportunamente, ser notificado o enterado de las decisiones adoptadas por el funcionario lo que en consecuencia le [permite] ejercer el derecho de impugnación”. Lo anterior, aún si su pretensión no es económica, pues como se ha advertido, el restablecimiento del derecho incluye además el obtener justicia y el defender la versión de los hechos para salvaguardar la honra de la víctima.

En este orden de ideas, el artículo 48, incisos 6 y 8 del Código de Procedimiento Penal, que consagra el deber de manifestar bajo juramento el no haber entablado acción contra la jurisdicción civil con el objeto de que se le indemnice los perjuicios, debe ser aplicado únicamente cuando dentro de la demanda se formule la pretensión indemnizatoria, toda vez que, como se ha mencionada en innumerables ocasiones, la parte civil tiene, además de la económica, otras pretensiones que hacen valedera su participación en el proceso.

En el mismo sentido, “sólo procederá el rechazo de la demanda por las causales señaladas en el inciso 1º del artículo 55 relativas a la indemnización de los perjuicios, cuando realizada una petición de tal carácter se demuestre que independientemente se hubiere intentado la indemnización por el mismo demandante”. Además, por obvias razones, también se le rechazará la demandad a quien no haya sufrido un perjuicio directo, pues como se vio anteriormente, ésta es precisamente la fuente de su participación en el proceso penal, ya que, de no ser así, sus intereses estarán fielmente representados por el Ministerio Público “cuya imparcial participación busca garantizar el establecimiento de la verdad y la sanción justa de los responsables”.

El Procurador anota, siguiendo la misma línea argumentativa, que la disposición del artículo 55 que aquí se revisa debe ser aplicada en cuanto al reconocimiento de una pretensión indemnizatoria; es decir, sólo se debe entender extinguida la acción civil en lo pertinente al interés del perjudicado de que se le indemnice por la causal que señala el artículo, mas no se extinguir su participación en el proceso penal para buscar la verdad y la

justicia en virtud de haber sido un responsable directo de la conducta delictiva.

En cuanto a la cuestión de la extinción de la acción penal por la indemnización integral, el Procurador sostiene que se trata de un mecanismo legítimo que puede utilizar el legislador “que por razones de política criminal basados en la gravedad de determinadas conductas, los bienes jurídicos cuya protección se procura y la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en la administración de justicia” ha determinado utilizar. Afirma también que la indemnización integral es una aceptación tácita del sindicado de la responsabilidad penal que se le acusa, con lo cual se llega al conocimiento de la verdad y a la sanción del responsable. Por otro lado, desestima el argumento al que alude el demandante según el cual la extinción de la acción penal por la indemnización integral obliga de cierta forma al sindicado a aceptar la responsabilidad con el pago para que así se extinga la posibilidad de continuar en una querrela que puede terminar con su condena. Para el funcionario “es claro que si el procesado consciente de su inocencia no opta por acogerse a la indemnización integral, cuenta con todos los medios procesales y probatorios para adelantar su defensa y demostrar su inocencia”. También desecha el alegato que considera que la condena se produce por una deuda, pues la sanción penal que se impondría sería por la comprobación de la responsabilidad por la realización de una conducta punible.

Finalmente, en cuanto a la acusación contra el artículo 57 de la Ley 600/02, sostiene que dicha disposición es aplicable “ya sea que la parte civil haya ventilado dentro de la actuación penal su pretensión de carácter indemnizatorio o no” de lo que resultaría lógico deducir que “la pretensión indemnizatoria dentro de la actuación penal estará sujeta a la determinación de la responsabilidad en la conducta punible del sindicado, de tal manera que si ésta desaparece carece de fundamento la condena en perjuicios”. De la misma forma, si la parte civil tan sólo pretendiera la búsqueda de la verdad y de la sanción del responsable, también sería procedente la declaración de la cosa juzgada por cuanto el proceso ha determinado las condiciones en que sucedió el hecho investigado.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia

La Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad de los artículos demandados, ya que hacen parte de una ley de la República.

2. Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos planteados por el demandante son los siguientes:

a) ¿Es inconstitucional, contrario a preceptos internacionales y opuesto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ser atentatorio de los derechos de la parte civil, que la acción penal se extinga por indemnización integral de los perjuicios?

b) ¿Quebranta el principio de igualdad constitucional el hecho de que la acción penal se extinga por indemnización integral, teniendo en cuenta que sólo los individuos con mayor capacidad económica accederían a dicho privilegio?

c) ¿Constituye una manifestación de la proscrita 'prisión por deudas', el hecho de que no pueda extinguirse la acción penal de quien no puede indemnizar el daño irrogado?

d) ¿Desconoce los derechos de la víctima que desea constituirse en parte civil dentro del proceso penal la exigencia de que, para presentar la demanda, requiere hacer un estimativo de los perjuicios, debe manifestar que no ha iniciado proceso civil independiente o que no se ha ordenado la indemnización del perjuicio recibido? En la misma línea ¿atenta contra los derechos del afectado patrimonial por el ilícito el que éste no pueda constituirse en parte civil dentro del proceso penal al tiempo que tramita un proceso indemnizatorio ante la jurisdicción civil o ante la jurisdicción contencioso administrativa?

e) ¿Vulnera el derecho de la víctima a recibir indemnización la imposibilidad de iniciar o proseguir la acción civil cuando el procesado es absuelto penalmente por haber actuado en ejercicio de un deber legal o haber cometido el delito en ejercicio de la legítima defensa?

3. Evolución jurisprudencial sobre la parte civil en el proceso penal

Antes de analizar uno a uno los cargos de la demanda, esta Corporación encuentra útil recordar cuál es la posición actual de la jurisprudencia en torno al papel de la parte civil en el proceso penal.

Tradicionalmente se había reconocido que el único fin de la parte civil en el proceso penal era la indemnización de los perjuicios causados por el delito. La interpretación de las normas del derecho civil relativas a la indemnización del daño, así como las de procedimiento que delinean la presencia de la parte civil en el proceso penal, hacía ver que el afectado por el ilícito acudía al proceso penal exclusivamente para obtener la reparación del perjuicio patrimonial.

Con la expedición de la Constitución de 1991 el papel de la víctima en el proceso penal adquirió renovado protagonismo, aunque el reconocimiento de sus derechos no se consolidara de manera definitiva sino entrado el año 2002, gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La explícita consagración del derecho al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) llevó inicialmente a la Corte a considerar que uno de los derechos de las víctimas era participar en el proceso penal en que se investiga el delito. En Sentencia T-275 de 1994 la Corte reconoció que la parte civil en el proceso penal militar tiene derecho no sólo al resarcimiento del daño, sino “al 'restablecimiento del derecho' y dentro de este concepto está el lograr lo justo”; a lo cual agregó:

“La participación de las víctimas o perjudicados en el proceso penal no se justifica

solamente por la perspectiva de lograr un bien patrimonial como reparación, sino, además, y especialmente, por el derecho que tienen las personas de acercarse a la verdad. Contribuir en la definición de la verdad y en el rechazo a la falsedad, es tan importante como lograr lo válido, lo útil, lo interesante”. (Sentencia T-275 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero)

Este primer impulso se vio interrumpido en el año de 1995 cuando la Corporación declaró la exequibilidad de un artículo del derogado Código de Procedimiento Penal –Decreto 2700 de 1991- que impedía la constitución de parte civil en el proceso penal hasta antes de proferida la resolución de apertura de la investigación. La Corte determinó que la función de la parte civil en dicho proceso se limitaba a obtener la indemnización de los perjuicios producidos por el delito, situación que confería a las pretensiones de la víctima un cariz netamente económico y la despojaba de cualquier iniciativa para hallar la verdad procesal y para obtener la realización de la justicia. En dicho fallo –Sentencia C-293 de 1995- la Corporación sostuvo lo siguiente:

“Al respecto debe la Corte observar que la citada norma hace parte de un capítulo (el II del libro I del Código de Procedimiento Penal) que se ocupa de la acción civil, y que fija los alcances de ésta en el artículo 43 al disponer en su parte pertinente: "La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por el hecho punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil, o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, o por los herederos o sucesores de aquéllas, o por el Ministerio Público o el actor popular cuando se afecten intereses colectivos." (subrayas de la Corte). De ese modo, fuera de toda duda, está precisando el legislador qué es lo que con la citada institución se persigue. Y para abundar en claridad acerca de su finalidad inequívoca, agrega en el inciso segundo: "Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus bienes, y optare por ejercitarla dentro del proceso penal, se constituirá en parte civil mediante demanda presentada por su representante legal" (subrayas fuera del texto). Con la expresión subrayada quiere la Sala destacar que se trata de un mecanismo diseñado con fines esencialmente patrimoniales, pues nada distinto puede buscar una acción indemnizatoria. (Hasta aquí, subrayas del original)

“(…)

“Si a lo anterior se agrega que los intereses que la víctima o sus herederos persiguen son de naturaleza económica, mientras que el derecho que el sindicado tiene en jaque es la libertad, la alegada desigualdad entre las partes se desvanece por completo. Y no se insista en que la víctima o sus herederos pueden pretender es el esclarecimiento de la verdad, al margen de los valores patrimoniales, porque, tal como más atrás quedó dicho, la acción civil tiene en nuestra legislación una finalidad pecuniaria (desde luego legítima), y la ausencia de normas que apunten a intereses más altos no hace inexecutable las reglas que la consagran.” (Sentencia C-293/95 M.P. Carlos Gaviria Díaz) (Subrayas fuera del original)

A pesar de la tesis de la Corte, cuatro de sus magistrados se apartaron de la decisión

mayoritaria. El salvamento de voto de los disidentes estimó que las “víctimas y los perjudicados tienen también un derecho constitucional a participar en el proceso penal que el Estado debe adelantar con ocasión de la ocurrencia de un hecho punible, derecho que, insiste esta Corte, no se limita a la obtención de la reparación del daño”.

El criterio de la Corte perduró hasta 1998 cuando, a propósito de la revisión de una norma del anterior Código de Procedimiento Penal que pretendía relevar al juez de pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios por haberse dictado sentencia anticipada, la Corte hizo alusión a los derechos de contenido no patrimonial que la parte civil tiene en el proceso penal, como una forma de hacer efectivo el derecho al debido proceso de este sujeto procesal.

A este respecto dijo la Corte:

“En este orden de ideas, ha de entenderse que los principios citados son una consecuencia del derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, el cual no puede ser interpretado como una simple atribución formal de acudir a las autoridades judiciales, sino como una garantía que obliga al juez de la causa a resolver integralmente sobre el fondo del asunto planteado. Así, las víctimas y perjudicados con el delito, como manifestación del derecho a acceder a la administración de justicia, tienen también un derecho constitucional a participar en el proceso penal que el Estado está en la obligación de adelantar, derecho que no debe limitarse a la declaratoria de responsabilidad penal, sino que, además, ha de extenderse a la obtención de la reparación del daño cuando este se encuentre probado.

“Ya esta Corporación había tenido oportunidad de señalar que 'las personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativSentencia C-412/93, M.P., doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.'. Ha de suponerse que ese derecho no sólo abarca a los presuntos responsables sino que se extiende también a las víctimas y perjudicados por el delito.” (Sentencia C-277/98 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)

No obstante y contradiciendo con ello la posición del fallo anterior, en el mismo año la Corte produjo la Sentencia SU-717 de 1998, en donde reiteró la posición asumida en el fallo C-239/95, y sostuvo que a la parte civil en el proceso penal sólo la asiste el propósito resarcitorio, toda vez que el Estado es el único encargado de verificar que se imponga la sanción correspondiente por el delito cometido.

Dado lo anterior, la Corporación añadió que si el fin del afectado es encontrar la verdad, “entonces no requiere de la acción civil para lograr su plena realización, porque para tal fin basta el cumplimiento del deber previsto en el artículo 95-7 de la Carta Política, según el cual toda persona debe colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, que en el proceso penal (cuya iniciación debe promover cualquier ciudadano mediante la denuncia), tiene como fin primordial, precisamente el de establecer la verdad sobre los hechos materia de investigación y juzgamiento, y sobre la autoría de los mismos.”

Así pues, hasta el año de 1998 la jurisprudencia pertinente osciló entre dos extremos: el primero, en el que se reconocía a las víctimas del delito ciertos derechos no vinculados con el fin indemnizatorio que se hace explícito con la presentación de la demanda civil, y el segundo, en el que tales derechos no se garantizan, por razón de considerarse que el proceso penal no tiene un fin retaliatorio, por lo menos en lo que a la víctima concierne.

En el año 2000 –Sentencia C-163/00, M.P. Fabio Morón Díaz- la Corte tuvo oportunidad de resolver una demanda dirigida contra varios de los artículos del Decreto 2700 de 1991 que reproducían algunas de las figuras procesales demandadas en la presente acción de inconstitucionalidad. En dicha oportunidad, la Corte se limitó a reiterar su jurisprudencia en el sentido de que “los derechos de las víctimas a acceder al proceso penal, y en particular a la indemnización de los perjuicios, no sólo es una manifestación de los derechos de justicia e igualdad, sino que se constituyen también en una expresión de los deberes constitucionales del EstadoC-469/95, T-536/94, C-277/98, T-275/94, SU-717/98, C-038/96, C-293/95”, pero no atinó a resolver el conflicto jurisprudencial relativo a cuáles son tales derechos.

No obstante, en Sentencia T-694 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Sala Primera de Revisión de tutelas de la Corte retomó la línea jurisprudencial trazada por la Sentencia T-275 de 1994 al asegurar que “los derechos de participación y de acceso a la administración de justicia, le confieren a la parte civil en el proceso penal una serie de derechos y obligaciones similares, en principio, a los que ostentan los restantes sujetos procesales. En consecuencia, debe entenderse que desde el momento en el cual una persona es reconocida como “parte civil”, adquiere el derecho a participar activamente en todas las diligencias que se realicen, lo cual implica, entre otras cosas, el derecho a solicitar las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de la verdad o para demostrar la responsabilidad del sindicado, así como el derecho a recurrir las decisiones que afecten sus intereses.”.

En el mismo sentido, en el 2001, la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-740, M.P. Alvaro Tafur Gálvis, en donde reconoció que en el proceso penal militar, la actuación de la parte civil “se establece de manera precisa, limitando su actuación al impulso procesal para contribuir a la búsqueda de la verdad de los hechos y (sic) que el tema del resarcimiento de perjuicios se concentra en la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, excluyendo expresamente la competencia de la justicia penal militar en este campo.” En el mismo sentido, en la Sentencia C-1149/01, M.P. Jaime Araujo Rentería, la Corte había dicho, en materia de justicia penal militar, que “El acceso a la administración de justicia no es sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido”.

Posteriormente, en Sentencia T-1267 de 2001, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas adoptó la posición jurisprudencial según la cual, la parte civil en el proceso penal tiene, además de la pretensión indemnizatoria, el derecho a la verdad y a la justicia. La Sentencia

reitera las dos decisiones citadas previamente y advierte que de conformidad con la legislación constitucional vigente, los derechos de las víctimas y de los perjudicados por el delito no se circunscriben a la obtención de la indemnización correspondiente sino que van hasta la averiguación de la verdad de los hechos y a la realización del ideal de justicia ínsito al proceso penal. Sobre el particular se dijo lo siguiente:

“...nuestro ordenamiento jurídico prevé que las personas afectadas por un hecho punible pueden constituirse como parte civil en el proceso penal respectivo con el fin de lograr el reconocimiento y pago de la indemnización por los perjuicios que le fueron ocasionados. Es cierto que la regulación legal confiere a la parte civil una pretensión esencialmente indemnizatoria, pero ello no excluye que ésta pueda apelar una sentencia absolutoria, por las siguientes dos razones:

“De un lado, las víctimas de los delitos tienen un derecho a la verdad y a la justicia, que desborda el campo de la simple reparación, tal y como lo ha señalado con claridad la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que es relevante para interpretar el alcance de los derechos constitucionales (CP art. 93). Por ello, los derechos de las víctimas trascienden el campo puramente patrimonial.” (Sentencia T-1267 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) (subrayas fuera del original)

De igual modo, en Sentencia C-1149 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, la Corte advirtió que “[e]l acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) no es sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido”, providencia que fue reiterada por la Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en la que se afirmó que “las víctimas de los hechos punibles tienen no sólo un interés patrimonial, sino que comprende el derecho a que se reconozcan el derecho a saber la verdad y a que se haga justicia. El derecho a saber la verdad implica el derecho a que se determine la naturaleza, condiciones y modo en que ocurrieron los hechos y a que se determine los responsables de tales conductas. El derecho a que se haga justicia o derecho a la justicia implica la obligación del Estado a investigar lo sucedido, perseguir a los autores y, de hallarlos responsables, condenarles. De ahí que ostenten la calidad de sujetos procesales.”.

Finalmente, siguiendo la línea argumentativa trazada por la última jurisprudencia, en Sentencia C-228 de 2002, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, la Corte adoptó de manera definitiva la doctrina vigente en torno a los derechos de la parte civil en el proceso penal. La Corporación estudió la exequibilidad del artículo 137 del Código de Procedimiento Penal vigente –Ley 600 de 2000– que señala las facultades procesales de la parte civil en las diligencias penales. En un extenso estudio de la legislación nacional e internacional, la Corte arribó a la conclusión según la cual “la víctima o perjudicado por un delito no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además tiene derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia.”. Los términos de la Sentencia de la Corte fueron los siguientes:

“...en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia–no restringida exclusivamente a una reparación económica–fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.

“De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:

“1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos. Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia.

“2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.

“3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito. Casi todos los sistemas jurídicos reconocen el derecho de las víctimas de un delito a algún tipo de reparación económica, en particular cuando se trata de delitos violentos. Esa reparación puede ser solicitada bien dentro del mismo proceso penal (principalmente en los sistemas romano germánicos) o bien a través de la jurisdicción civil (generalmente en los sistemas del common law). Ver Pradel, Jean. *Droit Pénal Comparé*. Editorial Dalloz, 1995, páginas 532 y ss.

“Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan sólo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado sea ínfimo –porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el patrimonio público– pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha determinado

quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia a través del proceso penal.” (Sentencia C-228 de 2002, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinoza y Eduardo Montealegre Lynett)

La posición de la Corte ha sido reiterada en fallos posteriores, como son las sentencias T-622 de 2002, C-805 de 2002, C-916 de 2002 y C-570 de 2003.

Habiéndose establecido la tesis de la Corte Constitucional respecto de los derechos de las víctimas en el proceso penal, procede ahora la Corporación a analizar el primero de los cargos de la demanda, ya que el tema que en él se aborda constituye materia introductoria para los demás reproches contra la Ley 600 de 2000.

4. Análisis particular de los cargos de la demanda

A. Primer Cargo de la demanda

El primer cargo de la demanda se dirige contra la expresión “indemnización integral”, contenida en el artículo 38 del Código de Procedimiento penal. No obstante, las razones expuestas también atañen al texto íntegro del artículo 42 del mismo código. Dicho cargo fue resumido en el extracto de esta Sentencia del siguiente modo: ¿es inconstitucional, contrario a preceptos internacionales y opuesto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ser atentatorio de los derechos de la parte civil, que la acción penal se extinga por indemnización integral de los perjuicios?

En efecto, de conformidad con la lógica del actor, si la parte civil en el proceso penal no sólo tiene derecho a que se le reparen los perjuicios causados por el ilícito sino que también puede exigir que se averigüe la verdad y se haga justicia castigando al victimario, es incompatible con este catálogo de derechos el que se permita al procesado evadirse de la acción punitiva del Estado mediante la indemnización de los perjuicios ocasionados por su actuar ilícito. Desde la argumentación del impugnante, la reparación del daño no es suficiente para garantizar los intereses de la víctima, pues ésta, además, puede exigir que se llegue a la verdad de los hechos y se sancione al responsable del delito.

En los términos en que ha sido expuesta, la tesis del demandante no parece llevar a otra conclusión. No obstante, ahondando en las razones de la jurisprudencia, es posible advertir que el actor ha dejado de lado importantes elementos de juicio que obligan a proponer una solución distinta.

El primero de ellos es que la indemnización de perjuicios ha sido considerada por la jurisprudencia como un vía legítima para extinguir la acción penal, lo que significa reconocer que la misma es instrumento judicial idóneo para realizar el ideal de justicia propuesto por el constituyente.

El segundo es que, a pesar de que la jurisprudencia de la Corte haya evolucionado hacia el

reconocimiento de los derechos a la verdad y a la justicia a favor de la parte civil en el proceso penal, éstos no son derechos absolutos. Dicho de otro modo, el derecho de las víctimas a encontrar la verdad y a que se haga justicia en el proceso penal no puede superponerse al interés público representado en el mismo proceso.

En los dos capítulos siguientes la Corte examinará estos elementos, que no fueron tenidos en cuenta por el demandante a la hora de formular sus cargos de inconstitucionalidad.

A.1. La indemnización de perjuicios en el proceso penal

Respecto del punto en discusión es necesario recordar que la jurisprudencia de esta Corte ha avalado la concordancia de la indemnización de perjuicios con el proceso penal y el régimen de derechos recogido por la Constitución Política, al tiempo que ha reconocido que por su conducto el Estado realiza y garantiza el ideal de justicia material promovido por el constituyente en el artículo 2º de la Carta.

Para empezar, mediante Sentencia C-746/98, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del artículo 28 de la Ley 228 de 1995, que establecía la extinción de la acción penal por indemnización integral en los delitos de hurto simple, hurto de uso, hurto entre condueños, estafa, lesiones personales, emisión y transferencia ilegal de cheque, abuso de confianza, aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, sustracción de bien propio y daño en bien ajeno, salvo cuando existieren circunstancias de agravación.

En dicha oportunidad la Corte avaló la exequibilidad de la reparación integral como mecanismo idóneo para extinguir la acción penal, por considerar que la misma correspondía a un recurso utilizado por el legislador para alcanzar, entre otros fines, la justicia material comprometida en el proceso penal. Dijo la Corte a ese respecto:

“La posibilidad de la reparación integral del daño causado con el hecho punible, se constituye en un mecanismo adecuado para extinguir la acción penal, que atiende a la economía procesal y de gastos, redundando en beneficio de la víctima, del inculcado y de la propia funcionabilidad del aparato punitivo del Estado, y contribuye necesariamente a la racionalización del sistema penal.

“La extinción de la acción penal por reparación integral del daño posee la virtud de asegurar en cierto modo la justicia material, porque permite el resarcimiento del daño en favor de la víctima, evita todo sufrimiento nocivo e innecesario al autor del hecho punible e impide que se le estigmatice como delincuente. En otros términos, dicho instrumento logra un equilibrio que satisface la proporcionalidad entre el resultado del ilícito y la pena con la mediación del fiscal o del juez.”(Sentencia C-746 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell)

Posteriormente, mediante Sentencia C-840 de 2000, la Corporación revisó la exequibilidad del artículo 39 del Decreto 2700 de 1991, norma que preveía la preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento por indemnización integral. A pesar de que la demanda de

aquella oportunidad no cuestionaba la exequibilidad misma de la institución de la indemnización integral y que el debate jurídico se centró en la cuantía límite a partir de la cual la indemnización no extingue la acción penal, la Corte erigió el fallo sobre la base de que dicha reparación era mecanismo idóneo para extinguirla. La de la Corte fue una aceptación implícita, pero inequívoca, de que tal herramienta no se opone a los cánones constitucionales vigentes.

También en Sentencia C-1490 de 2000, al estudiar la exequibilidad de algunos artículos de la Ley 44 de 1993, por la cual se modificaron otras disposiciones de las Leyes 23 de 1982 y 29 de 1944, relativas a delitos cometidos contra las normas sobre derechos de autor, la Corporación analizó la exequibilidad de un artículo que permitía extinguir la acción penal por indemnización de perjuicios cuando la víctima desistiera de la misma. Pese a que en este caso la norma condicionaba la extinción de la acción penal al requisito del desistimiento de la víctima, las razones esbozadas por la Corte para declararla exequible tuvieron en cuenta que la indemnización integral, por sí misma, constituye criterio válido para terminar el proceso de responsabilidad penal contra quien repara el daño.

De igual manera, la Corte Constitucional declaró exequibles los incisos primero y segundo del artículo 97 de la Ley 599 de 2000, mediante fallo contenido en la Sentencia C-916/02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En dicha oportunidad la Corte analizó la constitucionalidad de la medida que permite fijar el monto máximo de la tasación de perjuicios para efectos de determinar la indemnización por el hecho ilícito, análisis que parte de la base de que la indemnización integral es mecanismo idóneo para extinguir la acción penal.

Finalmente, por Sentencia T-1062/02 de la Sala sexta de Revisión de Tutelas de la Corte, esta Corporación sostuvo que era “consecuente con la especial protección a las víctimas de hechos punibles” el que la Constitución permitiera que “que la acción penal se extinguiera por la reparación integral del daño”, a lo cual agregó:

“La indemnización integral es una de las denominadas causales específicas de preclusión y cesación del procedimiento. La aplicación de ésta depende de la voluntad de los sujetos procesales BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo, El proceso penal, Universidad Externado de Colombia, 2002, p.515

“Puesto que es pecuniaria la naturaleza de la pretensión indemnizatoria, ésta se debe regular conforme a los principios generales del derecho privado, así el trámite sea adelantado por un juez penal. En efecto, teniendo en cuenta que este procedimiento se debe regir por los parámetros del derecho privado, al conocer del adelantamiento de este, los titulares de la acción civil pueden disponer de su derecho en el sentido de decidir renunciar a éste o realizar una transacción sobre el mismo, decisión que debe ser respetada por el juez penal a pesar de que con ésta no se dé una reparación plena del daño. En consecuencia, aún en estas condiciones el juez debe decretar la extinción de la acción penal Ibídem p.517”. (Sentencia C-1062 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)

Aunque para la fecha en que se produjeron los fallos inicialmente mencionados no se había consolidado aún la jurisprudencia en torno a los derechos a la verdad y a la justicia de la parte civil, las últimas dos providencias en cita fueron expedidas cuando dicha jurisprudencia ya se encontraba en firme. En este sentido, habría que reconocer que la jurisprudencia más reciente parte de la base de que las víctimas y los perjudicados por el delito no sólo tienen derecho a la reparación sino a la verdad y a la justicia. A tal punto tuvieron en cuenta dichas providencias los asertos de la Sentencia C-228 de 2002, que en el fallo C-916 de 2002 se hizo expresa alusión a ella en los términos que siguen:

“En desarrollo del artículo 2 de la Carta, al adelantar las investigaciones y procedimientos necesarios para esclarecer los hechos punibles, las autoridades judiciales deben propender el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de bienes jurídicos de particular importancia para la vida en sociedad. Esta Corporación ha reconocido que dicha protección no se refiere exclusivamente a la reparación de los daños que le ocasione el delito, sino también a la protección integral de sus derechos a la verdad y a la justicia. Así lo señaló esta Corporación en la sentencia C-228 de 2002 Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, donde la Corte señaló que a la luz de la Constitución en el proceso penal ordinario los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible comprendían tanto el derecho a una reparación económica como los derechos a la verdad y a la justicia y, por lo tanto, declaró exequible el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia; Así mismo, declaró exequibles los incisos segundo y tercero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas”, contenida en el inciso segundo que fue declarada inexecutable. Igualmente declaró exequible el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que una vez la víctima o los perjudicados se hayan constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente; y el artículo 47 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión que limitaba la oportunidad para la constitución de la parte civil exclusivamente “a partir de la resolución de apertura de instrucción” que fue declarada inexecutable. Esta sentencia recogió la concepción amplia de los derechos de la parte civil en la justicia penal militar reconocida en las sentencias C-740 de 2001, MP: Álvaro Tafur Galvis, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999, que establecía a quien se debía dar traslado para alegar una vez vencido el término probatorio establecido para el procedimiento especial regulado por dicho artículo en los siguientes términos: “Declarar EXEQUIBLE el inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999, en el entendido que deberá darse traslado para alegar a la parte civil, en caso de que ésta se hubiere constituido en el respectivo proceso.”; C-1149 de 2001, MP: Jaime Araujo Rentería, donde la Corte examinó los derechos de la parte civil dentro del proceso penal militar y resolvió: “TERCERO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 305 de la Ley 522 de 1999 bajo el entendido de que puede buscar otros fines como la justicia, el efectivo acceso a ella y la reparación del daño, salvo la expresión “exclusivo el impulso procesal para”, que se declara INEQUIBLE”; y la sentencia SU-1184 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett donde la Corte reiteró, en un proceso relativo al juzgamiento de un general por los

hechos ocurridos en Mapiripán, que las víctimas de los hechos punibles tienen no sólo un interés patrimonial, sino el derecho a que se reconozcan el derecho a saber la verdad y a que se haga justicia. Igualmente, para proteger los derechos tanto del procesado como de la parte civil en el proceso penal militar la Corte declaró inexecutable los artículos 578 y 579 de la Ley 522 de 1999, mediante los cuales se reguló el procedimiento especial abreviado, sentencia C-178 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. entre otras razones, para garantizar el principio de la dignidad humana:

“El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, que dice que “Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”, las víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha optado el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón de la comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano. Por el contrario, el principio de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados por un delito sea exclusivamente de naturaleza económica.”

“Si bien la Carta refleja una concepción amplia de la protección de los derechos de las víctimas de un hecho punible, ésta no disminuye la importancia del derecho de la parte civil a la indemnización de los daños que se le hayan ocasionado. Por ello señala la Constitución que tal derecho se debe garantizar aun en caso de amnistías o indultos generales por delitos políticos (artículo 250, numeral 1, CP). Así lo establece el artículo 150, numeral 17 de la Carta Constitución Política, “Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.” que señala que cuando el legislador decide eximir de responsabilidad civil a los favorecidos con tales beneficios, el Estado deberá asumir las indemnizaciones a que hubiere lugar.

“De ello resulta que si bien la indemnización de daños es sólo uno de los elementos de la reparación a la víctima y que el restablecimiento de sus derechos supone más que la mera indemnización, en todo caso la Carta protege especialmente el derecho de las víctimas a la reparación de los daños ocasionados por la conducta punible.” (Sentencia C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)

Ahora bien, no sólo la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que la indemnización de los perjuicios causados por el delito es mecanismo idóneo y constitucional para extinguir la acción penal. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia también acepta tal premisa en desarrollo de su función de tribunal de casación en materia penal. Sobre este particular la Corte Suprema adujo:

“Este, pues, el punto que debe resolver la Sala: si la restitución del objeto material del delito no puede efectuarse, porque éste ya fue recuperado y entregado a su dueño no mucho tiempo después de consumarse el hecho, o porque el lícito se quedó en el grado de tentativa, ¿será suficiente la indemnización de los perjuicios causados a la víctima, para que el responsable del reato se haga merecedor de la diminuyente de pena consagrada en el artículo 374 del Código Penal? Indudablemente que sí.

“...cuando la devolución no es procedente, bien porque como en las tentativas, el ladrón no logró apoderarse de la cosa, o cuando aún habiéndolo logrado, ésta es recuperada poco después por la propia víctima, o por las autoridades o por terceros que se la regresan, no puede exigírsele al responsable, por imposible, la restitución “natural”, ni por injusta (implicaría un enriquecimiento sin causa justa por parte del perjudicado) la restitución “por equivalencia”. En estos casos, el responsable se hace acreedor a la diminuyente punitiva, con el solo hecho de indemnizar los perjuicios del orden material y moral causados con su ilícita conducta.

“Una interpretación distinta de la anterior, como es la del Tribunal Superior, conduce a admitir que el legislador puede imponer obligaciones no sólo injustas sino de imposible cumplimiento.” (Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, noviembre 21 de 1988) (subrayas fuera de texto)

Y en otro de sus fallos agregó:

“La reparación de los daños ocasionados por el delito, cuando es integral, en los términos del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, esto es, por abarcar no solamente lo que cuantitativamente representan los daños y perjuicios ocasionados con el punible, sino también a los ofendidos o perjudicados identificados en el proceso, es una causal de improcedibilidad de la acción penal y extinción de la acción civil...” (CSJ, sentencia del 24 de febrero de 2000, Sala de Casación Penal, M.P. Alvaro Orlando Perez Pinzon)

En resumen de la jurisprudencia transcrita esta Corte extrae la conclusión de que la indemnización de los perjuicios materiales producidos por el ilícito es una institución ajustada al sistema jurídico Colombiano, especialmente a su carta fundamental de derechos, y que en esos términos aquella tiene repercusiones claras en el ideal de justicia que pretende alcanzar el constituyente en su artículo 2°.

Por demás, dicha posición ha sido reconocida por la Corte Constitucional en sus providencias, incluso desde la óptica de su última jurisprudencia relativa a los derechos de las víctimas y de los perjudicados como sujetos procesales en el proceso civil. Por ello, en

principio, no habría lugar a sostener que la misma afecte los derechos de la parte civil en el proceso penal.

Con todo, existe otra razón para considerar que dicha institución no constituye atentado contra los derechos reconocidos de las víctimas en el proceso penal y es que en el marco de la tensión de los derechos de las víctimas en el proceso penal y de la potestad que tiene el legislador para regular las formas propias del proceso penal, no existe incompatibilidad entre aquellos y la posibilidad de extinguir la acción penal por indemnización integral de perjuicios.

En el siguiente aparte de la providencia se ilustrará la posición de la Corte a este respecto.

A.2. Los derechos a obtener reparación integral del daño y a intervenir en el proceso penal para averiguar la verdad del ilícito y para que se haga justicia son garantías compatibles entre sí

Es tema recurrente en la jurisprudencia de la Corte que una de las competencias exclusivas del legislador es la de regular las formas propias de cada juicio y, en ese contexto, la de determinar la estructura de los procesos judiciales, señalando al efecto los derechos que le asisten a las parte y la forma de hacerlos efectivos.

Adicionalmente, la Corte ha reconocido que cuando se aplica en materia penal, el principio anterior se estructura sobre la base de la política criminal del Estado, política que es el resultado de la evaluación de una “multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada”Cfr. Sentencia C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En este caso, la política criminal, definida por la Corte como “ el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción”ibid, sirve de fundamento al diseño de los procedimientos sobre los cuales se erige la sanción y represión al delito.

En este campo, el legislador cuenta con un amplio margen de regulación en virtud de su libre potestad de configuración, libertad que se ejerce, sin embargo, hasta el límite esencial de los derechos fundamentales. Por ello la Corte ha dicho que la ley puede “describir los comportamientos que considera nocivos para la vida en sociedad y precisar las sanciones que se impondrán a quienes incurran en dichas conductas, pero también puede establecer otras consecuencias jurídicas derivadas de la ocurrencia del delito, como lo es el establecimiento de la responsabilidad civil derivada de un hecho punible.Sentencia C-916 de 2002 MP. Manuel José Cepeda Espinosa

En desarrollo del mismo principio, la Corte Constitucional sostuvo que la ley puede

determinar libremente cuáles son las causales de extinción del proceso penal, siempre y cuando en dicha regulación se respete la integridad esencial de los derechos constitucionales. En este sentido, la jurisprudencia constitucional acepta que “[d]efinir las causales de extinción del proceso penal, es una competencia exclusiva del legislador, que las establece previo el ejercicio de ponderación que efectúa de los fenómenos de la vida social que tipifica como delitos y del mayor o menor daño que, en su criterio, ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado social” Sentencia C-1490 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz. Por ello, en otra de sus providencias adujo.

“Además, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, es al legislador al que le corresponde, en ejercicio de la cláusula general de competencia que el Constituyente radicó en él, crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados y determinar los presupuestos que dan vía a la preclusión o extinción del proceso por desistimiento del afectado, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o lleguen a causar en el conglomerado social.

“Lo cierto y definitivo de estas distinciones, es que la competencia radica exclusivamente en el legislador, quien en ejercicio de sus atribuciones y, en concordancia con la política criminal fijada por el Estado, es el encargado de establecer los nuevos hechos punibles, y determinar la jerarquía de los mismos, así como, establecer las sanciones y los procedimientos aplicables al los hechos punibles ...” (Corte Constitucional, Sentencia C-301 de 1999, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra)

Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Corte Constitucional ha reconocido que el legislador puede establecer restricciones al ejercicio de los derechos de las partes en el proceso penal.

Así, por ejemplo, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 97 de la Ley 599 de 2000 que establecía un monto máximo para la indemnización de perjuicios en materia penal. Al precisar que tal límite opera únicamente para los perjuicios morales, la Corte resaltó que el legislador podía establecer restricciones a este tipo de garantías, ya que “la reparación integral de los perjuicios ocasionados por la conducta punible no es un derecho absoluto”, dada la “la potestad de configuración del legislador para regular la reparación de perjuicios sin desconocer que ésta debe ser una indemnización justa” Sentencia C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

En la sentencia citada la Corte Constitucional también abordó el tema de la posibilidad de establecer ciertas restricciones a los derechos de la parte civil en el proceso penal. Por ello, la Corporación aceptó que el límite a la indemnización por los perjuicios morales cumple varias finalidades, algunas de las cuales son garantizar el derecho de defensa del sindicado e impedir que una indemnización de perjuicios excesivamente onerosa “transforme la

justicia penal en una justicia esencialmente vindicativa o retaliatoria.”

El mismo énfasis se había hecho ya en la Sentencia C-228 de 2002, que unificó la jurisprudencia en materia de derechos de las víctimas en el proceso penal, porque la Corte sostuvo en dicha oportunidad que la constitución de parte civil en el proceso penal no significa que “la ampliación de las posibilidades de participación a actores civiles interesados sólo en la verdad o la justicia pueda llegar a transformar el proceso penal en un instrumento de retaliación contra el procesado”.

Así pues, resumiendo las posiciones anteriores, la jurisprudencia reconoce que el legislador es autónomo para diseñar la estructura de los procesos judiciales, en concreto del proceso penal, razón por la cual también se encuentra habilitado para establecer restricciones al ejercicio de los derechos de las partes, siempre y cuando dichas restricciones no afecten el núcleo esencial de los derechos involucrados. En concordancia con esta afirmación, es posible afirmar que la realización de los derechos a la verdad y a la justicia de la parte civil admiten limitaciones, toda vez que la finalidad del proceso penal no es retaliatoria.

En otros términos, la parte civil en el proceso penal no está habilitada para ejercer sus derechos a la verdad y a la justicia hasta el extremo de convertir el proceso penal en mecanismo que persiga únicamente el castigo del infractor y olvide de intereses de mayor jerarquía. La jurisprudencia en cita permite entender que el interés de la Corte es proteger los derechos de las víctimas hasta el punto en que su satisfacción no sacrifique intereses de mayor rango como la realización de la justicia material, la reparación del daño, el poder disuasivo de la pena y la economía procesal, entre otros, intereses todos involucrados en la indemnización como causal extintiva de la acción penal.

En la misma línea, debe concluirse que las causales de extinción del proceso penal constituyen materia sujeta a la libre configuración del legislador, y a menos que resulten desproporcionadas y atentatorias de los derechos fundamentales constitucionales, aquellas pueden ser diseñadas de acuerdo con la política criminal acogida por la ley.

A.3. La indemnización integral de los perjuicios y los derechos a la verdad y a la justicia son garantías inescindibles y esenciales para lograr los fines constitucionales que persigue la parte civil

El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral son garantías concurrentes al concepto de parte civil en el proceso penal, que resultan inescindibles por hacer parte de la esencia de la naturaleza jurídica de la parte civil.

En el presente caso, sin embargo, sólo se discute la posible incompatibilidad entre los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En este contexto, y refiriéndose a lo planteado por el demandante, es posible afirmar que cuando el legislador establece la indemnización integral de perjuicios como causal de extinción de la acción penal, aquél inserta una herramienta acorde con el ordenamiento jurídico y con los principios de la Carta, pues utiliza una vía idónea para alcanzar el ideal de justicia y verdad garantizados

por la Constitución.

Al mismo tiempo, en ejercicio de la libertad de configuración que le confiere el Estatuto Superior, el legislador diseña la estructura del proceso penal de conformidad con los resultados de las evaluaciones de su política criminal. En este campo, a menos que incurra en medidas arbitrarias y desproporcionadas, el legislador tiene amplia libertad para determinar las causales de extinción del proceso penal. Pero se dijo que la indemnización de perjuicios es un mecanismo ajustado a la Constitución e idóneo para realizar el ideal de justicia, lógico resulta añadir que aquél es proporcional a los derechos de las partes en el proceso penal y racional desde el punto de vista del respeto por los derechos constitucionales.

Por último, al establecer que la indemnización integral de perjuicios extingue el proceso penal, el legislador no desconoce los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia. Esto, porque, en primer lugar, dicha indemnización tiene implícito un ideal de justicia que consiste en reparar el daño causado por el delito, dejando “a la víctima y a los perjudicados por el hecho punible en la situación más próxima a la que existía antes de la ocurrencia del mismo. Sentencia C-916 de 2002 En segundo término, porque el derecho de las víctimas a obtener la verdad y la justicia en el proceso penal no es absoluto y, por tanto, puede estar sometido a limitaciones razonables.

En el caso particular, el derecho a la verdad y a la justicia ceden ante la realización de los principios de “economía procesal y de gastos, redundan en beneficio de la víctima, del inculcado y de la propia funcionabilidad del aparato punitivo del Estado, y contribuye necesariamente a la racionalización del sistema penal”, ya que la “extinción de la acción penal por reparación integral del daño posee la virtud de asegurar en cierto modo la justicia material”. Lo anterior, dado que el proceso penal no es retaliatorio y su finalidad no consiste, exclusivamente, en sancionar al infractor.

Las razones anteriores no son las únicas que pueden esgrimirse para sostener que la indemnización integral de perjuicios es una alternativa legítima en el campo de la extinción de la acción penal. Otras consideraciones, relativas a su operabilidad en el proceso penal, dan cuenta de su proporcionalidad y razonabilidad en el esquema de protección de los derechos de las víctimas.

Para deducir la proporcionalidad de la medida, repárese en que la indemnización de perjuicios no extingue la acción penal en cualquier clase de delitos. El artículo 42 del Código de Procedimiento Penal establece que dicha indemnización sólo extingue la acción penal en “los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concorra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La expresión resaltada fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-760 de 2001

MM.PP. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa

La indemnización integral no es causal de extinción de la acción penal en los delitos "de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección." (Art. 42, inciso segundo, C.P.P.)

La enumeración de los delitos respecto de los cuales procede la extinción de la acción penal por indemnización de perjuicios ilustra el interés del legislador por limitarla a casos especiales en los que la afección del orden social y de los intereses públicos es menor. La circunstancia de que el mecanismo de exculpación se restrinja a ciertos delitos –por razón del interés protegido o el grado de culpabilidad de su autor- demuestra que el legislador no ofreció dicha posibilidad de manera indiscriminada, sino que lo hizo proporcionalmente, acorde además con los objetivos implícitos de su política criminal.

Por ello, son sólo algunos delitos culposos -los delitos que admiten desistimiento, las lesiones personales transitorias y los delitos contra el patrimonio y los derechos patrimoniales de autor- las conductas elegidas para tal favorecimiento, quedando claro que con ello el legislador pretende privilegiar la restitución del orden económico y social, al tiempo que sacrifica la sanción por la sanción misma. La interpretación correcta es que la ley prefiere dar por terminado un proceso en el que el orden social no ha sido gravemente afectado o en el que la conducta no responde a la voluntad positiva de causar el daño –dolo-, en lugar de sancionar a la víctima y de ocasionar, por dicha sanción, un perjuicio mayor para el orden social. En este orden de ideas, resalta lo dicho por la doctrina penal en el sentido que la indemnización de perjuicios en el proceso es un mecanismo para desjudicializar conflictos sociales, mecanismo que responde a los postulados de la criminología crítica. Curso de Criminología, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001., citado por Bernal Cuellar y Montealegre Lynett en "El proceso Penal", Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 4ª edición, 2002, pág. 517.

De allí que no sea posible afirmar con el demandante que la indemnización de perjuicios podría convertirse en una vía para "exponer a los ciudadanos a tratos 'cruels, inhumanos o degradantes', proscritos por la Constitución Política, ya que los responsables de estos hechos tienen la posibilidad de evadir la responsabilidad penal mediante el pago de una suma de dinero". Es claro que la naturaleza de los delitos indemnizables excluye tal posibilidad, dejando a salvo, en cambio, los derechos de los afectados y promoviendo la recuperación del orden justo. Por lo anterior la Corte ha dicho:

"En efecto, en el primero, el de las contravenciones, el legislador atendió la circunstancia de que se trata de hechos punibles de menor trascendencia jurídico-social que los delitos, mientras en la segunda, la del artículo 39 del C.P.P, si bien impuso la preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento por indemnización integral, para el caso de delitos culposos, o de delitos contra el patrimonio económico, exceptuando el hurto calificado y la extorsión, sin condicionarla al desistimiento del ofendido, lo hizo por tratarse de conductas culposas, que como tales admiten un tratamiento más benévolo por parte del estado y de la

sociedad, tanto es así, que en el caso de los delitos contra el patrimonio económico, quiso condicionar la extinción de la acciones al monto de los daños, señalando que la norma en cuestión era aplicable siempre y cuando el monto de los mismos no excediera los doscientos salarios mínimos legales mensuales, expresión que fue declarada inexecutable por esta Corporación.” (C-1490 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz)

Adicionalmente, de la lectura del cuarto inciso del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal es posible inferir que no podrá extinguirse la acción penal por indemnización integral si dentro de los cinco años anteriores se ha decretado, respecto del mismo procesado, resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral. Ello quiere decir que un mismo individuo no puede solicitar la extinción de la acción penal por indemnización integral dos veces en un lapso inferior a cinco años. La razón es, precisamente, evitar la reincidencia consuetudinaria en conductas afectivas del orden jurídico. El compás de espera conferido por la ley respecto de la posibilidad de indemnizar los perjuicios para obtener la terminación del proceso penal da cuenta también de que el legislador ha sido prudente al diseñar esta figura procesal. Como lo sostiene la doctrina, “El término de cinco años busca evitar que las personas hagan del delito una profesión y, cada vez que sean sorprendidas, puedan obtener la terminación del proceso mediante el fácil expediente de la indemnización” Bernal Cuellar, Montealegre Lynett. Ob.cit. Pág. 519.

No puede entonces concluirse, como lo hace el actor, que la ley estimula la impunidad y descuida los derechos de las víctimas al permitir que el proceso penal termine por indemnización integral, pues la herramienta legislativa tiene restricciones que buscan compensar sus efectos jurídicos con los intereses de la sociedad.

En la misma línea, también es evidente que cuando se produce la extinción de la acción penal por indemnización del daño se produce un reconocimiento de la autoría del ilícito en cabeza del sujeto pasivo de la acción penal. Esta circunstancia indica que la indemnización de perjuicios respeta, en cierta medida, el derecho que tiene la víctima a conocer la verdad del proceso en relación con el penalmente responsable, así el sujeto pasivo de esta acción no reciba la medida punitiva prevista en la ley.

Igualmente, el hecho de que la indemnización integral extinga la acción penal también es una manera de realizar el ideal de justicia que persigue el Estado, pues es evidente que el concepto de reparación del daño hace parte de ese otro concepto que consiste en obligar al infractor a hacerse cargo de la responsabilidad que implica el quebrantamiento de la ley. Asumir la responsabilidad de indemnizar el daño también es una manera de cumplir el cometido de justicia para el que la Administración de Justicia ha sido instituida.

Por lo anterior es dable admitir que los derechos a la verdad y a la justicia son derechos compatibles con la figura de la indemnización de perjuicios como causal de extinción de la acción penal y que, además de dicha compatibilidad, dichas garantías resultan inescindibles de la indemnización integral pues cuando la misma se otorga se realiza el ideal de justicia perseguido por el legislador amén de que se establece la verdad sobre el ilícito en términos

de su autoría.

En atención a lo explicado, y por los cargos analizados en esta primera parte de la Sentencia, la expresión “indemnización integral”, contenida en el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, así como el artículo 42 del mismo Código, serán declarados exequibles.

B. Segundo cargo de la demanda. La indemnización integral de perjuicios como causal de extinción de la acción penal no vulnera el principio de igualdad constitucional

Según el demandante, la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal quebranta el principio de igualdad constitucional por cuanto sólo los individuos con mayor capacidad económica accederían a dicho privilegio. En tal virtud, la acción penal no podría extinguirse para quien no puede indemnizar el perjuicio por no contar con los medios económicos para hacerlo.

Aunque la argumentación del demandante encuadra el problema jurídico en el ámbito del derecho a la igualdad, del análisis detenido del cargo se deduce que éste no es el marco teórico de la controversia. En otros términos, el cargo de la demanda parte de un supuesto errado y es considerar que la ley penal ha establecido una discriminación de contenido económico para efectos de conceder un beneficio jurídico.

Ciertamente, para poder señalar que la ley penal ha establecido un beneficio jurídico en función de la capacidad económica del individuo habría que identificar en el texto de la ley un elemento diferenciador de contenido económico -un criterio de comparación o tertio comparationis- que indique cómo el patrimonio de las personas sujetas a la ley penal determina la adquisición del beneficio de la extinción de la acción penal. En otras palabras, para ubicar el debate en el terreno de la igualdad se requeriría encontrar en la ley demandada una diferencia de trato evidente a partir de la cual pudiera decirse que la ley otorga a los individuos diferentes consecuencias jurídicas según su capacidad económica.

Sería indispensable encontrar, por ejemplo, un elemento similar al contenido en el artículo 369 de la Ley 600 de 2000, que fue declarado inexecutable por la Corte en la Sentencia C-316 de 200M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra , y que establecía una cuantía mínima para la caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. En dicha ocasión la Corte encontró que al fijar un monto mínimo a la caución prendaria, el legislador dejaba por fuera de la regulación aquellos individuos sub judice incapaces de pagar un salario mínimo legal mensual para acceder al beneficio de la libertad provisional.

En dicha ocasión, sin embargo, el monto de la caución fue directamente establecido por el legislador, por lo cual era correcto afirmar que era la propia ley la que establecía un criterio de diferenciación que hacía inconstitucional la disposición.

Con el mismo criterio, la Corte declaró inexecutable el artículo 7 de la Ley 383 de 1997, que modificó el artículo 867 del Decreto 624 de 1989, y que establecía la obligación de

suscribir una garantía bancaria o póliza de seguros con cuantías fijas, como requisito para ejercer la acción contencioso administrativa del contribuyente que intentaba discutir una obligación tributaria (Sentencia C-318 de 1998, MP, Carlos Gaviria Díaz).

En esa oportunidad, la Corte sostuvo que la ley no estaba habilitada para establecer un porcentaje fijo a partir de cuyo cubrimiento pudiera accederse a la administración de justicia, porque tal conducta no consultaba la capacidad económica de la parte afectada, introduciendo un elemento ajeno a la equidad. En esta oportunidad, al igual que en el caso de la caución prendaria, el legislador había fijado un monto mínimo que le permitía a los individuos acceder a los beneficios de la administración de justicia, lo que implicaba que el criterio diferenciador tenía origen en la ley misma, que ésta era la fuente del trato diferencial.

En la figura que aquí se estudia, dicho elemento no existe: no es la ley la que establece el criterio de diferenciación y no es ella la fuente del trato diferenciado.

En la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal el monto de la indemnización está determinado por el daño que causa el autor del ilícito, daño que, por razones obvias, no se encuentra establecido en ley. Es el autor del delito el que determina, voluntaria o involuntariamente, pero siempre por razón de su conducta, la magnitud del daño indemnizable y el monto de la reparación correspondiente, ateniéndose a la consecuencia de poder o no indemnizarlo. No podría decirse, como se ha dicho respecto de las otras dos situaciones analizadas, que sea la ley la que introduce el criterio diferenciador, ya que la posibilidad o imposibilidad material de indemnizar el daño material no dependen de ella sino del productor mismo del daño.

Así entonces, es posible imaginar situaciones concretas en las que el autor del ilícito y causante del daño no puede compensar económicamente el perjuicio ocasionado y, por tanto, se priva de la posibilidad de obtener la extinción de la acción penal por indemnización integral. Sin embargo, no por ello puede inferirse que sea por voluntad de la ley que dicha consecuencia se produce. Estos son, mejor, los efectos de haber quebrantado el orden jurídico y los de haber ocasionado un perjuicio concreto a un tercero que por dicha causa merece la reparación del daño.

La indemnización integral como causal de extinción de la acción penal se ofrece entonces en igualdad de condiciones a todos los sujetos sometidos al proceso penal sin atender al monto de su patrimonio; más bien, al monto del daño. Y pese a que las posibilidades de extinción de la acción penal dependen de la capacidad económica del victimario, es innegable que en este punto las medidas adoptadas por el legislador tienden a proteger a la víctima, no al procesado, razón por la cual dicha problemática debe abordarse desde tal perspectiva.

Para la Corte no hay duda de que la interpretación radical propuesta por el demandante conduciría a proscribir la indemnización de perjuicios como causal extintiva de la acción penal. Por vía de los argumentos de la demanda y en aras de la protección a ultranza del

principio de igualdad, habría que llegar a la conclusión inaceptable de que, como quien no tiene dinero para indemnizar no puede librarse de la acción penal, tampoco puede hacerlo quien sí lo tiene. Acordes con esta lógica, que dice proteger los derechos de las víctimas, la Corte se vería enfrentada a la paradoja de eliminar una institución creada, precisamente, para beneficiarlas, mediante el estímulo que implica desembarazarse de la acción penal a través el pago de la indemnización correspondiente. En fin, proceder como sugiere el actor, equiparando por el rasero más bajo a los responsables de la indemnización de perjuicios, sería someter a las víctimas del delito a olvidarse de la reparación del daño hasta que la justicia asigne las responsabilidades correspondientes mediante una sentencia condenatoria.

Por demás, el cargo del demandante referido a que el efecto de la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal es constreñir al pago de indemnización a quien legítimamente considere que es inocente, pero desee desembarazarse del proceso penal, no es de recibo por la Corte, pues dicha hipótesis no se desprende del contenido de la disposición acusada.

En efecto, el demandante supone en su argumentación que la figura procesal podría ser desviada o mal utilizada por quienes, pretendiendo evadir el proceso penal, indemnicen el daño aún siendo inocentes. No obstante, para la Corte es un hecho que la posibilidad referida no constituye a una práctica avalada por la norma sino contraria a su misma filosofía, razón por la cual no puede considerarse que tal sea un vicio de inconstitucionalidad proveniente de su texto. En resumidas cuentas, una norma jurídica no puede ser atacada con el argumento de que el mal uso de sus prescripciones podría tener efectos inconstitucionales.

Adicionalmente, el supuesto de que parte el demandante resulta insostenible porque durante el trámite del proceso penal, mientras no se ha proferido la sentencia respectiva, no existe manera de establecer, desde un punto de vista jurídico, si el sindicado es o no inocente. La hipótesis del demandante no es útil a la discusión planteada porque mientras no se produzca la sentencia penal no hay posibilidad de señalar si quien es procesado es responsable del delito. En consecuencia, tampoco es posible determinar si quien paga la indemnización es o no inocente.

Las razones anteriores llevan a la Corte a considerar que en nada afecta el principio de igualdad constitucional el que la indemnización integral de perjuicios se erija en causal de extinción de la acción penal, como tampoco puede inferirse que del texto legal se incite al uso indebido de dicha institución. Por tal razón, también por este aspecto, el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal es exequible.

C. Tercer cargo de la demanda. La indemnización integral de perjuicios como causal de extinción de la acción penal no constituye prisión por deudas. Reiteración de jurisprudencia

El tercer cargo de la demanda sugiere que constituye una manifestación de la proscrita 'prisión por deudas', el hecho de que no pueda extinguirse la acción penal de quien no puede indemnizar el daño irrogado. Dicho cargo también está dirigido genéricamente

contra la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal, es decir contra el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal.

En virtud de que este cargo de la demanda ya fue analizado en la Sentencia C-008 de 1994 por la Corte Constitucional, esta Sala se atenderá a las consideraciones expuestas en dicha ocasión, reiterando su posición a ese respecto.

En dicha oportunidad la Corte sostuvo:

“Una de las obligaciones impuestas al condenado por el artículo 69 del Código Penal para que pueda tener aplicación la condena de ejecución condicional es precisamente, como atrás se subraya, la que luego desarrollan los preceptos parcialmente acusados: la de reparar los daños ocasionados por el delito.

“La ley no ha hecho cosa distinta de plasmar un postulado general del Derecho, derivado del más elemental sentido de justicia: todo el que causa un daño está obligado a su reparación.

“De tal principio no puede estar excluido aquel que incurre en la comisión de un hecho punible. Del delito nace la obligación de resarcir los perjuicios que con él se han generado.

“La condición de que se trata en este proceso no es inconstitucional pues no implica -como lo asegura el demandante- la exigencia de pagar una deuda civil bajo el apremio de una pena privativa de la libertad sino el requerimiento a quien es beneficiado con una eventual inejecución de la pena para que atienda, de todas maneras, la obligación de reparar el daño causado con el delito. Esta, como la pena, tiene por fuente el hecho punible, pero no se confunde con la pena y, por tanto, no desaparece por la sola circunstancia de que dicha pena pueda dejar de aplicarse. Más todavía: el subrogado penal es una excepción a la regla general de que la pena sea cumplida en todo su rigor; tal cumplimiento tampoco libera al condenado de la obligación que, por razón del delito, ha contraído con los perjudicados.

“La Constitución Política que, como lo declara su Preámbulo, aspira a realizar un orden justo, parte del enunciado criterio y, más aun, expresamente exige su observancia aunque se trate de delitos políticos cuyos autores hayan sido favorecidos con amnistía o indulto (artículos 150, numeral 17, y 201, numeral 2, de la Constitución).

“A juicio de la Corte, no tiene fundamento alguno el cargo de inconstitucionalidad que se formula contra las normas procesales acusadas en el sentido de que ellas consagran la imposición de una pena por deudas; lo que en realidad ocurre es que, ante el incumplimiento de la obligación de indemnizar el daño causado, falla la condición en cuya virtud se podía, según la ley, suspender la ejecución de la pena o prescindir de ella y, por tanto, queda en pleno vigor la condena, tal como si no se hubiera adoptado la decisión de otorgar el beneficio. Esto acontece cuando se incumple la obligación de indemnizar, como cuando se desatiende cualquiera otra de las que la ley impone.

“Así, pues, los artículos impugnados encajan dentro de la filosofía y el sentido de la condena de ejecución condicional y en modo alguno quebrantan el artículo 28 de la Constitución Política.” (Sentencia C-008 de 1994, MP José Gregorio Hernández Galindo)

La Corte prohíja los argumentos expuestos en la Sentencia citada y concluye que la indemnización de perjuicios como causal de extinción de la acción penal no vulnera el principio constitucional que proscribe la prisión por deudas. También por este cargo declarará exequible la norma acusada.

D. Cuarto cargo. Pese a que la víctima tiene derecho no sólo a la indemnización de perjuicios en el proceso penal, ésta debe manifestar una intención indemnizatoria si su interés es participar en el proceso penal en calidad de parte civil

El actor manifiesta que los apartes acusados de los artículos 48, 52 y 55 son inconstitucionales, porque si los derechos de las víctimas en el proceso penal no se limitan a la indemnización de perjuicios, sino que se extiende hasta los derechos a la verdad y a la justicia, no cabe que se exija a quien pretende constituirse en parte civil dentro del proceso penal que manifieste no haber iniciado un proceso civil independiente o que el afectado no pueda constituirse en parte civil si ha iniciado un proceso de reclamación independiente.

Al igual que con el cargo anterior, esta Corporación ya tuvo oportunidad de pronunciarse acerca del problema jurídico planteado.

En Sentencia C-163 de 2000 la Corte analizó una demanda dirigida contra el artículo 46 del Decreto 2700 de 1991 en el que el Código de Procedimiento Penal señalaba como requisito para constituirse en parte civil en el proceso penal, “la declaración de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con el hecho punible”.

En esa ocasión la Corte declaró exequible la norma bajo la consideración de que la ley ofrece a la víctima una opción de la cual ésta puede hacer uso para intervenir en el proceso penal o para actuar en el proceso civil, razón por la cual no es posible acudir a ambos simultáneamente. Sobre el particular dijo este Tribunal:

“...ha de concluirse que no procede la constitución de parte civil dentro del proceso penal, cuando la víctima o sus causahabientes hayan promovido una acción civil en un proceso aparte. Pues se reitera el derecho que tiene el afectado con el delito a reclamar su indemnización dentro del proceso penal, o en su defecto abstenerse de utilizar la vía penal e irse por la vía civil, con el propósito de obtener del juez el reconocimiento de los perjuicios, cuando éstos se encuentren debidamente probados, lo cual tiene su soporte constitucional en el derecho de las víctimas a participar en el proceso penal y en la obligación estatal de restablecer los derechos afectados con el ilícito o el reato.

“(...)”

“En este orden de ideas, no entiende la Corte, como sostiene el demandante, que 'el legislador privilegió la naturaleza y función de la ritualidad y procedimientos penales frente a las disposiciones civiles que gobiernan los procesos', pues los artículos 46, 50 y 55 del Decreto 2700 de 1991, desarrollan simplemente la idea según la cual, quien ejerce la acción civil ante una cualquiera de las autoridades judiciales donde pueda intentarlo, ya no podrá formularla ante otros, lo cual impide que el afectado con el hecho punible formule las reclamaciones de stirpe civil o patrimonial, lesionando el derecho del infractor o presunto responsable a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. A juicio de la Corporación, cuando el afectado con el hecho punible presenta su reclamo civil ante la justicia penal, debe probar en ese escenario procesal, los perjuicios sufridos y allí se debe decidir de fondo lo debatido. Empero, si el perjudicado intenta la acción civil ante la jurisdicción civil, ya no podrá hacerlo ante la justicia penal. En consecuencia, ejercida la acción civil ante un juez civil, ésta ya no puede promoverse ante un fiscal o ante un juez penal, lo que no significa que si el hecho que origina el proceso civil pueda dar lugar a investigación penal, el afectado no pueda presentar denuncia o noticia criminal, ante la autoridad competente, aun cuando haya ejercido la acción civil.”

En dicha Sentencia, la Corte Constitucional adoptó la posición de la Corte Suprema de Justicia y reiteró lo dicho por ese tribunal en el sentido de que la posibilidad de ejercer la acción civil independientemente o dentro del proceso penal es potestativa y, por tanto, no puede incoarse en ambos procesos al tiempo. La cita jurisprudencial reiterada por la Corte fue la siguiente:

“Es tan clara la naturaleza civil, que no penal, de los perjuicios ocasionados con el delito, que su resarcimiento puede pretenderse alternativamente por la vía civil o mediante el ejercicio paralelo de la acción civil dentro del proceso penal ; ejercicio que es facultativo para la persona perjudicada patrimonialmente con la delincuencia, porque de su voluntad dependerá instaurarla o no, aunque es preciso reconocerlo, esta última parte ha sido modificada parcialmente por cuanto a partir del Código Procesal de 1987 se consagró la norma rectora del restablecimiento del derecho que se conserva en la actual normatividad procesal y que tiene una amplia reglamentación a lo largo y ancho de la codificación, que impone al juez, entre otras imperativas obligaciones, la de condenar en concreto en aquellos casos donde se hubieren producido perjuicios". (Sentencia No. 80/87, MP. Edgar Saavedra Rojas)

Acorde con dicha interpretación, en reciente pronunciamiento la Corte Constitucional consideró que la razón de ser de la opción de constituirse en parte civil en el proceso penal o incoar la acción civil independientemente es impedir que la Administración de Justicia avance a doble marcha en la resolución del mismo problema jurídico.

La jurisprudencia dijo a este respecto

“...la posibilidad de acudir al proceso penal para obtener la indemnización de perjuicios constituye una forma de hacer efectivo el principio de economía procesal. Así, acudiendo a dicha alternativa, el Estado evita la doble marcha de la administración de justicia dirigida a

resolver una responsabilidad bivalente que tiene una fuente común: el delito.

“De otra parte, gracias a que la responsabilidad penal se resuelve paralelamente a la responsabilidad civil, la interposición de la demanda civil dentro del proceso penal permite que las pruebas recaudadas reciban valoración simultánea, encaminada a resolver los dos aspectos de la responsabilidad involucrados. Ello le permite al demandante obtener una pronta decisión judicial que aprovecha el material probatorio de la investigación penal.

“Vinculado con lo anterior, la posibilidad de ejercer la acción civil dentro del proceso penal también constituye vía idónea para evitar la producción de fallos contradictorios. Así, la medida procesal tiende a evitar que, por ejemplo, el juez penal encuentre probado el hecho dañoso cuando el juez civil considere que éste no existió.” (Sentencia C-570 de 2003)

Así entonces, es claro que cuando la ley ofrece al afectado por el delito la opción de constituirse en parte civil en el proceso penal o de acudir independientemente a la jurisdicción civil, le está ofreciendo o bien la posibilidad de intervenir en el proceso penal para obtener la indemnización correspondiente y colaborar con la administración de justicia en el esclarecimiento de la verdad y la sanción del responsable, o bien la de perseguir exclusivamente la indemnización de los perjuicios sin acceder a las posibilidades concedidas por el primero.

Es el afectado por el ilícito quien tiene la opción de determinar la ruta procesal que más convenga a sus intereses. Desde tal perspectiva, no tendría sentido reprocharle al legislador que haya establecido restricciones en el diseño de cada opción, restricciones que, además, van encaminadas a trazar con exactitud los linderos de una y otra vía procesal. Así pues, no es lógico confundir los fines de la vía jurisdiccional civil con la penal, pues cada una tiene su propio trazado y condiciones de ejercicio. En últimas, como cualquiera de las opciones permite a la parte afectada reclamar la indemnización de perjuicios, el legislador consideró incompatible que el afectado, a fin de obtener dicha indemnización, ejerciera simultáneamente las dos alternativas.

La jurisprudencia del Consejo de Estado también ha recogido el razonamiento anterior al afirmar que no es posible utilizar las dos vías procesales cuando se pretende obtener la reparación de los perjuicios causados por el ilícito. Así, en uno de sus fallos, el máximo tribunal de la justicia contenciosa sostuvo:

“Dentro de las opciones que la ley le otorga al perjudicado, éste puede optar por la que mejor se acomode a sus aspiraciones e intereses jurídicos y patrimoniales, pero sometido desde luego a los resultados favorables o desfavorables que esa opción pueda hacer el futuro proporcionarle. De otra forma se patrocinarían condiciones inaceptables desde el punto de vista procesal y jurídico, que le permitirían al afectado transitar por dos jurisdicciones diferentes en busca del resarcimiento más favorable y prevalido de una doble oportunidad de sacar adelante su aspiración resarcitoria, en condiciones que ciertamente no se adecuan a un proceso justo y de equidad para las personas naturales o jurídicas que se vean involucradas en cada accionar del afectado, con perjuicio del principio de la cosa

juzgada el que en todo caso se vería afectado con el fallo definitivo posterior. (Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Tercera. Santafé de Bogotá, D. C., 24 de septiembre de 1993. Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández. Referencia: Expediente N° 8201. Actor: Marta Lucía Cristancho de Molano. Demandado: La Nación - Policía Nacional.) (Subrayas fuera del original)

Por lo anterior no es posible afirmar, como lo hace el impugnante, que la imposibilidad de participar en el proceso penal, cuando se ha iniciado un proceso civil independiente, vulnere el derecho de defensa de la víctima porque algunas decisiones adoptadas en el proceso penal puedan incidir en la pretensión indemnizatoria. El hecho de que exista una opción y de que cada alternativa ofrezca sus propias desventajas no desvirtúa el hecho de que en ambos trámites el derecho al debido proceso se encuentra suficientemente garantizado. Además, la circunstancia de que ciertas decisiones en el proceso penal puedan tener incidencia en el proceso civil es normal en el desenvolvimiento de las investigaciones, por lo que hay que suponer que la misma es conocida por el afectado que escoge entre una y otra.

Adicional a lo anterior debe aclararse otro punto en relación con este papel de la parte civil en el proceso penal. Ha quedado dicho que la jurisprudencia constitucional reconoce que la parte civil en el proceso penal tiene, además del derecho a la indemnización de perjuicios, los derechos a la verdad y a la justicia. Sin embargo, tampoco puede perderse de vista que la razón determinante de la presencia de la parte civil en el proceso penal es la reparación del daño. Tal es y ha sido su razón de ser en el proceso penal, no obstante que, por extensión, la jurisprudencia le haya reconocido otros derechos. Los derechos a la verdad y a la justicia fueron incorporados por la jurisprudencia sobre la base de que la acción civil en el proceso penal persigue, como mínimo, la reparación del daño, pero la doctrina no ha evolucionado hasta considerar que estos puedan desplazar la pretensión indemnizatoria.

La base de la participación del perjudicado en el proceso penal debe consistir en el interés indemnizatorio, aunado como puede ir al interés de que se descubra la verdad y se imponga la sanción correspondiente. No obstante, ya que, como se explicó, los derechos a la verdad y a la justicia admiten restricciones razonables, no podrían éstos desplazar la razón esencial de la institución a que se ha hecho referencia. Se reitera una vez más el carácter no resarcitorio del proceso penal, objetivo que claramente se perseguiría si se le permitiera a la parte afectada ingresar en el proceso con la sola intención de obtener la sanción penal para el responsable.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación concluye lo siguiente. No es inexecutable que el artículo 48 establezca como requisito de la demanda de constitución de parte civil, “la manifestación bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible.” Del análisis precedentes es claro que el Estado no ha concedido en patrocinar el ejercicio simultáneo de dos acciones en cuyo fundamento primero existe la misma finalidad.

Tampoco es inexecutable que el legislador haya dispuesto en el mismo artículo, como requisitos de la demanda, la necesidad de incluir los “daños y perjuicios de orden material y moral que se le hubieren causado, la cuantía en que se estima la indemnización de los mismos y las medidas que deban tomarse para el restablecimiento del derecho, cuando fuere posible”, así como “las pruebas que se pretendan hacer valer sobre el monto de los daños, cuantía de la indemnización y relación con los presuntos perjudicados, cuando fuere posible”. Esta conclusión es compatible con las anteriores, en el sentido en que la demanda de parte civil debe tener, por exigencia de su misma naturaleza, una pretensión indemnizatoria.

Con el mismo argumento, también se ajusta a la Carta el que en el artículo 52 se establezca como causal de rechazo de la demanda la verificación de que la acción civil se inició independientemente, que se obtuvo la indemnización correspondiente o que se ha producido la reparación del daño (hecho que puede ocurrir mediante vías no necesariamente resarcitorias, como sería el caso de quien devuelve el bien hurtado). En relación con este artículo, la Corte no se pronunciará sobre la expresión “o que quien la promueve no es el perjudicado directo”, pues dicha frase no encaja en el debate jurídico que se lleva a cabo en tanto la misma hace referencia al rechazo de la demanda por falta de legitimación por activa, hipótesis ajena a la debatida por el actor.

Finalmente, la Corte encuentra que el demandante no formula un cargo pertinente ni suficiente contra el artículo 55 del C.P.P, norma que dispone que la “la acción civil proveniente de la conducta punible se extingue en todos o en parte, por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil”.

Ello por cuanto que los argumentos sobre los cuales se sustenta la demanda parten de la base de la extinción de la acción penal por indemnización integral de perjuicios, mientras que el artículo 55 se refiere a la extinción de la acción civil por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil. Lo anterior indica que las consideraciones de la demanda no son pertinentes al texto del artículo acusado, además de que no existe una argumentación particularmente dirigida a atacar dicha norma por el aspecto que se refiere a la indemnización de perjuicios en el proceso penal. Así entonces, no considera la Corte que el cargo esté suficientemente argumentado, razón por la cual se inhibirá de emitir pronunciamiento al respecto.

E. Quinto cargo de la demanda. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria en el proceso de responsabilidad civil

¿Vulnera el derecho de la víctima a recibir indemnización, la imposibilidad de iniciar o proseguir la acción civil cuando el procesado es absuelto penalmente por haber actuado en ejercicio de un deber legal o haber cometido el delito en ejercicio de la legítima defensa?

Con dicho planteamiento se estructura el cargo dirigido contra el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, que establece los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La

disposición demandada indica que la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el sindicato obró, entre otros, en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.

El demandante asegura que aunque en algunos casos resulte justificado sujetar los efectos de la responsabilidad civil a los de la cosa juzgada penal absolutoria, dicha sujeción es improcedente en el caso de que el procesado haya actuado en ejercicio de un deber legal o en ejercicio del derecho a la legítima defensa.

Respecto del primero, dice que la absolución a quien actúa en ejercicio de un deber legal no tiene por qué definir su responsabilidad civil, pues se trata de consideraciones diversas, y que no se justifica que el fallo penal exima automáticamente de responsabilidad civil al ejecutor de la conducta. Advierte que tal disposición implica una vulneración del artículo 90 de la Constitución Política según el cual la responsabilidad patrimonial del Estado surge con la constatación del daño antijurídico que la víctima no está en la obligación de soportar. En esa medida, la absolución por cumplimiento de un deber legal no puede enervar la posibilidad que tiene la víctima de reclamar su indemnización.

En el caso de la legítima defensa, el demandante plantea la circunstancia de la legítima defensa subjetiva y advierte que en esos casos el daño se produce por un error de conducta del autor, razón por la cual no es posible eximirlo de la responsabilidad civil.

Con el fin de evacuar los cargos expuestos esta Corte considera indispensable hacer algunas precisiones iniciales acerca de los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria en la responsabilidad civil del procesado, para luego analizar los casos particulares, relativos a la legítima defensa y al daño producido en ejercicio de un deber legal.

E.1. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria

Tal como lo reconoce el demandante, al citar el ejemplo de la legislación chilena, en la que la decisión del juez penal no tiene injerencia alguna en el proceso civil indemnizatorio, el legislador tiene la facultad de dividir de manera categórica el régimen de responsabilidad penal del de responsabilidad civil, indicando que para tales efectos el juez civil no requiere tener en cuenta la decisión penal al momento de determinar la indemnización correspondiente.

No obstante, la alternativa adoptada por el legislador colombiano es opuesta a dicha práctica y consiste en establecer ciertas causales de absolución por las que la decisión del juez penal tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, interrumpiendo así los procesos civiles que se sigan coetáneamente contra el procesado e impidiendo la iniciación de nuevos procesos en los que se pretenda discutir la responsabilidad civil por el ilícito del cual se lo absuelve.

De conformidad con el artículo 57 del C.P.P, dichas causales son: a) haberse declarado que la conducta causante del perjuicio no se realizó, b) haberse declarado que el sindicato no

cometió dicha conducta, c) haberse establecido que el sindicato actuó en estricto cumplimiento de un deber legal y d) haberse determinado que el sindicato actuó en legítima defensa.

Tal como se dijo, en estos casos el juez civil no está habilitado por la ley para desconocer la decisión tomada por el juez penal, razón por la cual deberá dar por terminado el proceso civil iniciado contra el sindicato o rechazar las demandas que se dirijan contra el mismo y que tengan como propósito discutir la responsabilidad civil surgida de la conducta que se le endilgaba.

Ahora bien, la finalidad de dicha medida es evitar las decisiones contradictorias que pudieran presentarse entre las jurisdicciones civil y penal. Como fácilmente se observa, no tendría sentido que, por ejemplo, el juez penal adujera que la conducta causante del perjuicio no se produjo al tiempo que el juez civil sostuviera que sí lo fue. Es pues evidente que en este punto la ley pretende evitar contrasentidos que no repercutirían más que en la propagación de la inseguridad jurídica en el sistema de administración de justicia.

En otros supuestos, valga decirlo, la decisión del juez penal no ata al juez civil a la hora de determinar la responsabilidad civil del demandado. Tal es el caso de la sentencia penal absolutoria fundada en el hecho de que la conducta por la cual se investiga al procesado no constituye delito. En estos casos, aunque el sindicato no merece reproche penal, su responsabilidad civil frente al daño no se define en la sentencia penal absolutoria, pues este fallo no tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, quedando la víctima en libertad de iniciar un proceso civil, o de continuar el vigente, para reclamar la indemnización correspondiente.

La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la problemática que acaba de presentarse. La siguiente cita ilustra cuáles son los argumentos que dicho tribunal expone para justificar la incidencia de la sentencia absolutoria penal en el proceso civil.

“Y para entrar de una vez en materia, quizá la manera más clara para demostrar lo errado del criterio del ad quem en el punto, consiste en reproducir el artículo 55 de la Ley 50 de 1987- vigente para la época de los hechos-, que por lo demás coincide con el precepto 57 de Ley 81 de 1993 que después rigió; reza así la norma:

'Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse, cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicato no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber o en legítima defensa'.

“Texto del que surge sin el menor género de duda que cuando emana de alguna de las cuatro causales allí descritas, la absolución penal surte, sin más, efectos de cosa juzgada erga omnes. Tajante es la disposición: declarado aquello, "la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse": Para negar, pues, la incidencia del fallo penal en la acción civil en tales

casos, preciso sería desconocer abiertamente el precepto en cuestión.

“Y desde luego que para evadir lo perentorio del precepto de bien poco sirve aducir, cual lo hace el ad quem, que no opera en eventos tales la cosa juzgada porque " (...) regularmente el juez penal sólo puede sentenciar en relación con el aspecto doloso del implicado, ya que la mera culpa no acarrea esa responsabilidad penal"; pues razonamiento tal sólo se explica si se echa al olvido que conforme a la ley penal la culpabilidad asume las formas del dolo, la culpa o la preterintención, facetas entre las cuales no hace el citado artículo 55, para los efectos de la cosa juzgada, diferenciación de ninguna clase; de manera que si la conducta culposa es de aquellas expresamente determinadas como punibles en la ley (cuéntanse en ellas el homicidio y las lesiones personales), entonces la decisión absolutoria penal que al respecto y por las causas determinadas en el comentado precepto llegare a proferirse, produce todos los efectos allí previstos.

“A propósito de este tema de la cosa juzgada penal tuvo la Corte oportunidad de expresarse recientemente como sigue:

'La premisa de que un mismo hecho puede generar diversas proyecciones en el ámbito jurídico en general, y particularmente en al campo civil y penal, (...) avista la eventualidad, inconveniente como la que más de que haya sentencias excluyentes, siendo que, por imperio de la lógica, la verdad no puede ser sino una sola. Muy grave se antoja por cierto, que en tanto la justicia penal proclame libre de culpa al sindicado, la civil, antes bien, lo condenase al abono de perjuicios.

'Puesta en guardia ante semejante despropósito, la legislación ha pretendido establecer algunos diques para impedirlo, entre los cuales destaca el secular principio de la cosa juzgada penal absolutoria, consagrado positivamente en el ordenamiento patrio, así, el art. 55 del Decreto 050 de 1987 (...).

'Pronunciamientos penales semejantes se imponen por igual a toda la sociedad, son decisiones que por tocar el honor y la libertad de los hombres, deben quedar a salvo de cualquier sospecha de error, y no pueden ser desconocidos por absolutamente nadie (...).

'Es entendible que el primeramente llamado a respetar decisión semejante sea el propio Estado (...) por suerte que la jurisdicción, así sea de otra especialidad, debe corearla a una, y vedada se encuentra por tanto para tocar el punto que así ha sido definido, pues ya es cosa juzgada, con efectos universales'. (Cas. de 12 de octubre de 1999).

“En suma, pues, dadas las hipótesis previstas en la norma comentada, su aplicación, bien al contrario de lo estimado por el tribunal, se impone ineludiblemente”. CSJ, Sala casación civil. M.P. Manuel Ardila Velásquez, 24 de noviembre de 2000, expediente 5365

Ahora bien, retomando el curso de la demanda, el legislador ha establecido dos causales por las que la sentencia absolutoria penal produce efectos de cosa juzgada erga omnes. Estos son el que el procesado hubiere actuado en estricto cumplimiento de un deber legal o que lo

hubiere hecho en legítima defensa. La Corte pasa a estudiar cada uno de ellos.

E.2. Sentencia penal absolutoria por cumplimiento estricto de un deber legal

En el primero de los casos, el motivo por el cual el legislador ha considerado que la sentencia penal absolutoria por ejecución estricta de un deber legal hace tránsito a cosa juzgada erga omnes tiene que ver con la reprochabilidad de la conducta desplegada por el autor del daño.

En efecto, establecido por el juez penal que el ejecutor de la conducta actuó con sujeción estricta al deber impuesto por la ley -esto es, descartada la extralimitación, la desviación, la falta de competencia, la desproporción, la torpeza, la ineficiencia, la impericia, etc.- la sentencia correspondiente funda la absolución en la ausencia del elemento de culpabilidad. En otras palabras, la sentencia penal absolutoria que se funda en haber actuado el causante del daño en estricto cumplimiento de un deber legal implícitamente establece que en el desarrollo de la conducta no se cumplieron los elementos del dolo o la culpa exigidos por el tipo penal infringido.

Por lo que toca al cargo de la demanda, al descartarse la existencia de culpa en la conducta del autor, implícitamente se descarta que el daño se hubiere causado por impericia, negligencia, imprudencia o por desconocimiento de un deber general de cuidado. Obsérvese que, por sí mismo, por su misma naturaleza, la conducta que se realiza en estricta sujeción a un deber legal excluye que ésta se ejecute de manera imperfecta, incompleta, desbordada o incorrecta.

Para explicarlo con la terminología del Código Penal, la absolución del infractor por haber actuado en estricto cumplimiento de un deber legal extingue la acción civil porque el juez penal descarta que el resultado típico sea “producto de la infracción al deber objetivo de cuidado” y que el agente “debió haberlo previsto, por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo” (Art. 23 C.P.).

Visto de otro modo: si el individuo actúa con culpa, esto es, con impericia, imprudencia, negligencia o en desconocimiento de un deber general de cuidado, su sujeción al deber legal no es estricta. Por lo mismo, si la sujeción al deber legal es estricta, el autor no pudo haber actuado con culpa. En suma, los términos “estricto cumplimiento de un deber legal” y culpa, en lo que a sus fuentes se refiere, son incompatibles. En estos términos, el cargo no prospera.

En otro aspecto de su argumentación, el demandante sostiene que la injerencia de la decisión penal en la civil atenta contra el artículo 90 de la Constitución Política, pues la responsabilidad patrimonial del Estado se da por el daño antijurídico, que es aquél que la víctima no está obligada a recibir, el cual nada tiene que ver con el grado de culpabilidad del agente que ejecuta la conducta perjudicial. La preocupación del actor se traduce, así, en que si el agente estatal es absuelto porque su conducta se sujetó estrictamente al cumplimiento de un deber legal, la víctima perdería el derecho a recibir su indemnización.

Sobre el particular esta Corporación considera que el cargo del actor funda sus argumentos en una concepción equivocada del concepto de daño antijurídico, al igual que desconoce los límites de la responsabilidad patrimonial del Estado y del agente estatal, según los lineamientos del artículo 90 de la Constitución Política.

En efecto, tal como lo ha indicado la Corte Constitucional, el artículo 90 de la Carta Política establece que el Estado responde patrimonialmente por el daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas. Tal fue la consideración expuesta en la Asamblea Nacional Constituyente durante el trámite de adopción del actual artículo constitucional. Al respecto se dijo en dicha Asamblea:

"En materia de responsabilidad patrimonial del Estado, se elevan a la categoría constitucional dos conceptos ya incorporados en nuestro orden jurídico: el uno, por la doctrina y la jurisprudencia, cual es el de la responsabilidad del Estado por los daños que le sean imputables; y el otro, por la ley, la responsabilidad de los funcionarios.

La noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo.

La responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente de la Administración causante material del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares.

Esta figura tal como está consagrada en la norma propuesta, comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por falta o falla del servicio, daño especial o riesgo (subrayas no originales)Agusto Ramírez Ocampo. "Ponencia para segundo debate de la nueva Constitución Política de Colombia" en Gaceta Constitucional No 112, 3 de julio de 1991, pp 7 y 8.

En interpretación de las consideraciones anteriores, la jurisprudencia nacional ha recabado en el concepto de daño antijurídico, haciendo énfasis en que la licitud o ilicitud de la conducta del Estado no son factores que determinen la antijuridicidad del daño. El daño resulta antijurídico y, por tanto, indemnizable, si la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, no si la actividad perjudicial del Estado fue jurídica o antijurídica. En otras palabras, "se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismoConsejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163. Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández..

En relación con este punto la jurisprudencia ha sostenido:

“En la responsabilidad del Estado el daño no es sólo el resultado de una actividad irregular

o ilícita, sino también del ejercicio de una actuación regular o lícita, pues lo relevante es que se cause injustamente un daño a una persona. Como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, la licitud o ilicitud no se predica de la conducta de sus agentes, sino sólo del daño.” (Sentencia C-430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell)

La primera conclusión es, entonces, que el daño antijurídico no necesariamente proviene de la conducta ilícita o antijurídica del Estado, sino que puede tener origen en una conducta lícita, caso en el cual también debe indemnizarse. En ese aspecto, la demanda contiene una primera imprecisión y es aducir que porque la conducta del agente es lícita, pues se ejecuta en ejercicio de un deber legal, el perjudicado no recibirá indemnización.

La segunda imprecisión del cargo consiste en que equipara la responsabilidad del agente estatal a la responsabilidad del Estado, cuando es un hecho que se trata de responsabilidades claramente diferenciables, que siguen regímenes independientes.

Ciertamente, el artículo 90 de la Constitución Política establece dos tipos de responsabilidad patrimonial. El primero, referido a la responsabilidad del Estado, funda su estructura en el daño antijurídico, ya explicado. De conformidad con dicho régimen, el Estado es patrimonialmente responsable por el daño irrogado por cualquiera de sus agentes, cuando la víctima no estuviere obligada a soportarlo. El daño antijurídico es la fuente de la responsabilidad del Estado frente al particular afectado, responsabilidad que no consulta la conducta del agente que causa el daño.

El segundo tipo de responsabilidad de que trata el artículo 90 es el de la responsabilidad del agente. Mientras el Estado responde por el daño antijurídico, su agente sólo lo hace cuando la conducta dañosa proviene del dolo o la culpa grave. El agente estatal no responde ante el particular sino ante el Estado, mediante la denominada acción de repetición, por lo cual a la víctima del perjuicio le es irrelevante, para efectos de la indemnización, si la conducta del agente fue realizada con dolo o culpa. Probar el daño antijurídico le basta para obtener la indemnización. En cambio, la determinación del grado de culpa con que actúa el agente estatal incide en la posibilidad que tiene el Estado de repetir contra éste a fin de recuperar el dinero que tuvo que pagar como consecuencia de la condena que le fue impuesta. Si el agente actúa con dolo o culpa, el Estado repite contra él.

Sobre el particular esta Corte ha señalado lo siguiente:

“Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes.

“En el primer caso, como se ha visto, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de éstos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva

de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones.

“En consecuencia si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque ésta sólo se legitima en la medida en que éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables.

“3.5. Según el inciso segundo del art. 90 de la Constitución, sólo en el evento de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial del daño antijurídico, que haya sido determinado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, puede aquél repetir lo pagado contra éste. Ello significa, en consecuencia, que los perjudicados no pueden reclamar directamente del funcionario la indemnización por el daño. Con ello se garantiza, de un lado, la reparación al perjudicado, porque queda debidamente asegurada con el respaldo patrimonial del Estado, y, de otro, se consigue que pueda establecerse dentro del proceso el dolo o la culpa grave del funcionario en los hechos dañosos, para efectos de la acción de repetición”. (Sentencia C-430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell)

De las consideraciones anteriores se extrae la segunda conclusión. El hecho de que el agente estatal actúe en ejercicio de un deber legal no incide en la indemnización que merece el afectado. Siempre y cuando el daño sea antijurídico, el responsable frente al particular es el Estado, no el agente, y la sujeción o desconocimiento de la conducta del último al deber legal establecido no modifica en nada el derecho a ser indemnizado. En suma, las conductas lícitas desplegadas por los agentes del Estado, es decir, aquellas que se realizan en cumplimiento de un deber legal, no impiden que el Estado indemnice a la víctima que ha sufrido un daño antijurídico. Simplemente, impiden que el Estado repita contra el agente que causa el daño.

De conformidad con las razones expuestas, esta Corporación considera que el cargo dirigido contra la expresión “que obró en estricto cumplimiento de un deber legal” no tiene fundamento constitucional y, por tanto, debe ser desechado, declarando la norma inexecutable por el cargo sometido a estudio.

E.3. Sentencia penal absolutoria por legítima defensa

Finalmente, en lo que tiene que ver con la última causal de improcedencia de la indemnización de perjuicios -por haberse dictado sentencia absolutoria sustentada en la legítima defensa del procesado-, el demandante sostiene que aunque la legítima defensa objetiva podría dar lugar a enervar la responsabilidad civil del procesado, la legítima defensa subjetiva no lo permite, pues en ella el perjuicio irrogado tiene origen en un error de conducta de su autor, lo que impide que se lo exima de responsabilidad civil.

Para resolver el interrogante propuesto, esta Corte estima indispensable transcribir de nuevo la norma acusada:

Artículo 57. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa

Del texto transcrito se tiene que la legítima defensa constituye causal de exoneración de la responsabilidad civil por constituir, a su vez, causal excluyente de responsabilidad penal. El actor considera que dicha exoneración sólo opera en el caso de la legítima defensa objetiva, porque en el de la subjetiva no existe una agresión real y, por tanto, el perjuicio ocasionado por el infractor tiene origen en un error de conducta y no en una agresión actual e inminente de la víctima.

La distinción del demandante relativa a los efectos de la legítima defensa objetiva y subjetiva plantea un interrogante sobre el alcance de la expresión “legítima defensa”, en el marco de las causales de exoneración de responsabilidad civil reguladas en el artículo 57, que obliga a la Corte establecer ciertas diferencias puntuales.

La legítima defensa es una institución de inveterada raigambre en el derecho penal que justifica la agresión de quien recibe una agresión injusta. La licitud de la conducta de quien causa un daño en contra de quien lo provoca se deriva del derecho que tiene todo individuo de defender sus propios intereses, de la superposición de los derechos del agredido frente a los derechos del agresor y de la transposición de la defensa particular frente a la imposibilidad coyuntural de recurrir a la defensa del Estado.

En la legislación colombiana, el artículo 32 del Código Penal regula lo atinente a la legítima defensa. Establece que ella es causal excluyente de responsabilidad penal y que se configura por la necesidad de repeler una agresión injusta, actual o inminente. Dice a este respecto el artículo en cita.

Art. 32. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando:

6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión.

Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas

Ahora bien, en vista de que en la realidad fenoménica un hecho desprovisto de intención ofensiva puede ser interpretado por el sujeto que se defiende como una agresión injusta, actual o inminente, la doctrina ha establecido la clásica diferencia entre legítima defensa objetiva y legítima defensa subjetiva, para delinear un margen entre la defensa real y la imaginaria.

La legítima defensa subjetiva o putativa (del latín 'putate', que significa pensar, suponer o juzgar) se produce cuando quien pretende defenderse lo hace frente a una agresión que no

existe, contra una ofensa ficticia. "Aquí ocurre un fenómeno muy curioso de cambio de papeles: el que cree que se defiende es, en realidad, un agresor; y el que fue tomado por un agresor termina finalmente defendiéndose legítimamente de la agresión real que sufreCfr.: "Legítima Defensa Putativa", Muñoz Conde, en "Der. Penal Europeo", ps. 183 y sig., Ed. Bosch, año 1996., señala Muñoz Conde al definir el fenómeno.

Ahora bien, dado que en la legítima defensa subjetiva la agresión es imaginaria, ficticia o supuesta, la conducta de quien despliega la actividad defensiva no puede ser más que atribuible al error. Un error sobre la antijuridicidad de la conducta defensiva gracias al cual, quien cree ser objeto de un ataque asume como legítima su propia defensa. De allí que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia considere esta institución como "casual de inculpabilidad por error sobre la antijuridicidad de la conducta"Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso N° 12343 Magistrado Ponente:Dr. Carlos Augusto Galvez Argote, 14 de diciembre de 1999

Precisamente, atendiendo a estas razones, el Código Penal nacional no reguló el tema de la legítima defensa subjetiva en el apartado correspondiente a la legítima defensa. El legislador penal colombiano tampoco incluyó una norma específica que se refiera a la legítima defensa subjetiva como entidad autónoma de exclusión de responsabilidad penal. Simplemente, en el numeral 11 del mismo artículo 32, el Código advierte que también se da la exoneración de responsabilidad penal cuando "Se obre con error invencible de la licitud de su conducta", a lo cual agrega que "si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad". Sobre este particular, obsérvese que la causal de exclusión de responsabilidad penal opera no sólo para el error respecto de la legítima defensa sino para el error que se da sobre cualquier conducta que se reputa lícita. El error sobre la legítima defensa es simplemente uno de ellos.

Así pues, ya que el ordenamiento penal no establece un régimen específico para la legítima defensa subjetiva sino que incluye a dicha figura en el régimen del error como causal excluyente de culpabilidad, es dentro de este régimen que debe entenderse incluida la defensa putativa.

Por ello, del tratamiento legislativo previsto es posible deducir que cuando el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal establece que la legítima defensa constituye causal de exoneración de la responsabilidad civil, aquél se refiere a la legítima defensa objetiva y no al error de conducta respecto de la causal de antijuridicidad denominada legítima defensa. Esta diferencia de trato en la terminología del Código Penal, que no menciona la legítima defensa subjetiva cuando hace alusión a ella, sino que la incluye en el régimen del error exculpativo, permite concluir que el artículo acusado se refiere a la legítima defensa objetiva y no a la subjetiva.

Atendiendo a las razones anteriores, el cargo de la demanda no está llamado a prosperar, pues a la luz del artículo 57 del C.P.P. la legítima defensa subjetiva no constituye causal de exoneración de responsabilidad civil, premisa de la cual parte el actor para controvertir la disposición normativa.

VII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

PRIMERO.- por los cargos propuestos por el demandante, declarar EXEQUIBLES la expresión “indemnización integral”, contenida en el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000-, así como el artículo 42 del mismo Código.

SEGUNDO.- por los cargos propuestos en la demanda, declarar EXEQUIBLE el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000-.

TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos expuestos, las expresiones “la manifestación bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible”; “daños y perjuicios de orden material y moral que se le hubieren causado, la cuantía en que se estima la indemnización de los mismos y las medidas que deban tomarse para el restablecimiento del derecho, cuando fuere posible”, así como “las pruebas que se pretendan hacer valer sobre el monto de los daños, cuantía de la indemnización y relación con los presuntos perjudicados, cuando fuere posible”, contenidas en el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal.

CUARTO.- Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 52 del Código de Procedimiento Penal, por los cargos expuestos, a excepción de la expresión “o que quien la promueve no es el perjudicado directo” respecto de la cual se INHIBE por ausencia de cargos.

QUINTO.- INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto del artículo 55 del Código de Procedimiento Penal por inepta demanda.

SEXTO.- Declarar EXEQUIBLE las expresiones “o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa”, contenida en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000-, únicamente por los cargos analizados en esta providencia.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Presidente

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET
Magistrado
ALVARO TAFUR GÁLVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL (E)
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

HACE CONSTAR:

Que el H. Magistrado doctor Jaime Córdoba Triviño, no firma la presente sentencia por cuando en la fecha le fue aceptado impedimento para intervenir en la presente decisión.

IVAN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)